SESIÓN ORDINARIA NÚMERO QUINCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA ONCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL ONCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO VÍCTOR JACOBO VÁZQUEZ CERDA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS Y JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ.

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día al que se propone para la misma.

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día: Sesión Pública Ordinaria número quince, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día; **I.-** Lista de presentes; **II.-** Declaración del quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión; **III.-** Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número catorce, celebrada el día 19 de julio del año 2011; **IV.-** Síntesis de Comunicaciones; **V.-** Declaratoria formal de que las Minutas Proyecto de Decreto, que reforman, la primera, la denominación del Capítulo III correspondiente al Título V, con los artículos 84 y 85; y la segunda, los artículos 40 y 41, todos ellos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forman parte de la misma Constitución; **VI.-** Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la reforma del artículo 10, de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima, y la adición de un segundo y tercer párrafos al artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; **VII.-** Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales por medio del cual se crea la Ley para la Promoción de la Cultura de la Legalidad del Estado de Colima; **VIII.-** Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por las Comisiones de Planeación del Desarrollo Urbano y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la Ley de Valuación para el Estado de Colima; **IX.-** Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, relativo a la iniciativa por la que se adiciona el inciso c), a la fracción I, del artículo 1º de la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses; **X.-** Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos por medio del cual se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo cuarto transitorio de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, así como el inciso c), segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto 200, aprobado el 27 de octubre del año 2010, publicado el 6 de noviembre del mismo año; **XI.-** Asuntos Generales; **XII.-** Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; **XIII.-** Clausura. Colima, Col., 11 de Agosto del año 2011. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VAZQUEZ CERDA. Gracias señor Secretario está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído, tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. VAZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de los presentes. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; Dip. Leonel González Valencia; Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; el de la voz Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez

García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Olaf Presa Mendoza. Ciudadano Presidente le informo a usted que se encuentran presentes 23 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea, faltando con justificación el Diputado Leonel González Valencia y el Dip. Juan Roberto Barbosa López.

DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES. Gracias Diputado Secretario. Dip. Itzel, Dip. Germán. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal siendo las diez horas con doce minutos del día once de agosto del año 2011, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número catorce, celebrada el día 19 de julio del presente año.

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 34 fracción VIII, 37 fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número catorce, celebrada el día 19 de julio del presente año; así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta.

DIP. PDTE. VAZQUEZ CERDA. Con mucho gusto Diputado Secretario, se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.

DIP. PDTE. VAZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia.

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.

DIP. PDTE. VAZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. Solicito al Vicepresidente por favor tome su lugar.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. En el siguiente punto del orden del día, informo a ustedes compañeras y compañeros Diputados, que en sesión pública ordinaria número 9, celebrada con fecha 8 de junio del año en curso, se aprobaron los dictámenes que contienen el proyectos de decreto que reforma, el primero, la denominación del Capítulo III, correspondiente al Título V, con los artículos 84 y 85; y el segundo, los artículos 40 y 41, todos ellos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, por lo que en cumplimiento a lo que establece la fracción III, del artículo 130 de la Constitución Local, mediante oficios número 2317/011, 2318/011, 2319/011, 2320/011, 2321/011, 2322/011, 2323/011, 2324/011, 2325/011, 2326/011, fechados todos ellos el 8 de junio del presente año y suscritos por los CC. Diputados Juan Roberto Barbosa López y Luis Alfredo Díaz Blake, en su carácter de Secretarios de la Mesa Directiva en funciones, se remitieron los

expedientes relacionados con las citadas Minutas Proyecto de Decreto, a cada uno de los Ayuntamientos, que conjuntamente con esta Soberanía conforman el Constituyente Permanente, recibiendo cada uno de ellos los documentos con fecha 15 de junio de este año, por lo que de acuerdo al artículo 130 Constitucional, los mismos dispusieron de un término de 30 días siguientes a la fecha en que recibieran las Minutas respectivas, para dar respuesta en un sentido u otro de la votación con relación a las reformas constitucionales citadas, habiendo recibido esta Soberanía respuesta aprobatoria dentro del plazo, únicamente de los HH. Ayuntamientos de Colima, mediante oficios-245/2011 de fecha 1º de julio del presente año y recibido el 5 del mismo mes y año y de Comala, mediante oficio SM-141/2011 de fecha 18 de julio de 2011, recibido el 23 del mismo mes y año; no atendiendo la solicitud los Ayuntamientos de: Armería, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Tecomán, Minatitlán, Manzanillo y Villa de Álvarez, toda vez que transcurrió el término para comunicar por escrito a este Poder Legislativo su aceptación o rechazo de dicha reforma, tal y como lo señala la fracción III del artículo 130 de la Constitución Local que dice: "...la aprobación o reprobación de parte de los Ayuntamientos será presentada dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que reciban el proyecto de ley, y si transcurriere este término sin que los Ayuntamientos remitan al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan las adiciones o reformas"...; por lo que al no haber recibido respuesta alguna de estos ocho Ayuntamientos, se entiende que aceptan las reformas de referencia, dándose la afirmativa ficta, que es una decisión normativa para lo cual si la autoridad municipal no contesta en el plazo legal establecido en la Constitución Local, se entenderá que la respuesta es en el sentido positivo, por lo tanto, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, el día de hoy declara, que las reformas a la denominación del Capítulo III, correspondiente al título V, con los artículos 84 y 85 y la reforma de los artículos 40 y 41, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forman parte de la misma Constitución en consecuencia, expídase el Decreto respectivo. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la reforma del artículo 10 de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima y la adición de un segundo y tercer párrafos al artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. En el uso de la voz el Dip. José Manuel Romero.

DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias Diputado Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva de mis compañeras y compañeros Diputados del público en general. H. Congreso del Estado de Colima. Presente a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue turnada para el análisis y estudio correspondiente la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Víctor Jacobo Vázquez Cerda y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; así como los Diputados Alfredo Hernández y José Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y el Dip. Único del Trabajo Olaf Presa Mendoza, relativa a reformar el artículo 10 de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima y adicionar un segundo y tercer párrafos al artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. Solicito Diputado Presidente someta a la consideración de la... con fundamento en los artículos 141, 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Presidente solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo a reformar el artículo 10 de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima y adicionar un segundo y tercer párrafos al artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, para leer únicamente los artículos resolutivo y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Dip. José Manuel Romero. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Dip. José Manuel Romero Coello, para que inicie la lectura de los artículos resolutivo y transitorio del dictamen que nos ocupa.

DIP. ROMERO COELLO. Muchísimas gracias Diputado Presidente, por lo anterior Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento se pone a esta H. Asamblea para su aprobación el siguiente:

Dictamen

“ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el artículo 10 de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 10.- En los juicios del orden civil, familiar y mercantil, con las salvedades contempladas en el artículo 7º de esta Ley, el Juez en el auto de radicación deberá informar a las partes, la posibilidad que tienen de someter el conflicto a la mediación o conciliación con la finalidad de solucionarlo, indicando los beneficios que se obtienen con este tipo de medios de solución de conflictos; así como el domicilio del Centro de Justicia Alternativa que corresponda, para que las partes estén en posibilidad de acudir si así lo estiman conveniente.

En caso de que las partes manifiesten en forma expresa su intención de someter la controversia planteada a la conciliación o mediación, el Juez suspenderá el procedimiento hasta por dos meses, que no serán computados para efectos de la caducidad de la instancia, remitiendo al Centro Estatal o Regional, en su caso, copia certificada de las actuaciones, para que cite a los interesados a una audiencia informativa y aplique el método que las partes prefieran.

Si una o ambas partes rechazan someterse a los procedimientos alternativos, el Director del Centro correspondiente lo informará al Juez de la causa dentro del plazo de veinticuatro horas, levantándose la suspensión del procedimiento decretada, sin perjuicio de que manifiesten posteriormente su voluntad de someterse a un procedimiento no jurisdiccional para resolver el conflicto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se adiciona un segundo y un tercer párrafos al artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 255 -

El juez en el auto de radicación de la demanda informará a las partes, en términos del artículo 10 de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima, de la posibilidad que tienen de someter el asunto a la mediación o conciliación, las cuales tendrán un término de cinco días hábiles para manifestar su intención de resolver su controversia de carácter jurídica a través de la justicia alternativa, mediante procedimientos no jurisdiccionales.

Si dentro del término fijado en el párrafo anterior, las partes no atendieran a la recomendación del Juez, no interrumpirá éste el término para la contestación de la demanda.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima.

El Gobernador del Estado dispondrá se imprima, publique, circule y observe.”

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se emita el Decreto correspondiente, muchas gracias Diputado Presidente.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Como no hay intervenciones al respecto, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano, le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Por la negativa.

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, pasaremos a emitir nuestro voto la Mesa Directiva, Alfredo, a favor.

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. López, por la afirmativa.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Rojas, a favor.

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa.

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen por medio del cual se crea la Ley para la Promoción de la Cultura de la Legalidad del Estado de Colima. Tiene el uso de la voz la Dip. Mónica Adalicia.

DIP. ANGUIANO LOPEZ. Con su permiso Diputado Presidente a los compañeros Diputados y Diputadas y al público que nos acompaña. El H. Congreso del Estado de Colima. Presente. A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a crear la Cultura de la Legalidad del Estado de Colima.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1113/010 de fecha 31 de agosto de 2010, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por la Diputada Mónica Adalicia Anguiano López, relativa a crear la Ley Cultura de la Legalidad del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente que:

“Hablar de legalidad obligadamente remite a pensar en leyes y en quienes debieran acatarlas, estos no solamente son los ciudadanos que forman un Estado, sino también las autoridades que ejercen de una u otra manera las leyes o un poder público. Así, para que la legalidad exista plenamente, será necesario que se internalice de forma generalizada entre todos los ciudadanos que forman el estado, sean gobierno o no, hasta que llegue a convertirse en cultura, la que comúnmente se conoce como “cultura de la legalidad”.

La cultura de la legalidad ha sido estudiada extensamente en el área académica, ya sea de forma teórica o a través de encuestas que tienen como objetivo conocer el grado en que ésta se encuentra presente en la sociedad. Sin embargo, se conocen pocos esfuerzos que busquen, más allá de saber si la cultura de la legalidad existe en una sociedad determinada. Es decir, no es muy común encontrarse con iniciativas, programas gubernamentales o políticas públicas que tengan como intención principal, generar cultura de legalidad como un modo de vivir.

En este sentido José Antonio Crespo señala que el problema de la falta de cultura de legalidad “...surge cuando la ley no se aplica sistemáticamente con un criterio de universalidad, sino de privilegio...” Este mismo autor, afirma de manera acusatoria que “La ausencia de respeto a la estructura legal es responsabilidad primera de la élite política...” y ubica a la cultura de la legalidad como un insumo valioso para que la democracia se dé, al mencionar que “...el apego a la legalidad por parte de gobernantes y gobernados resulta crucial para el adecuado funcionamiento de un régimen democrático...” En cuanto a la relación de cultura de la legalidad y Estado de derecho, Roy Godson apunta que “...una cultura de la legalidad significa que la cultura, la ética y el pensamiento dominantes en una sociedad, simpatizan con la observancia de la ley. En una sociedad regida por el Estado de derecho, la gente tiene capacidad para participar en la elaboración e implementación de las leyes que rigen a todas las personas e instituciones dentro de esa sociedad, incluyendo al gobierno mismo.”

En México, según la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2008, 84% de los encuestados respondieron que “si uno no se cuida a sí mismo, la gente se aprovechará”. Asimismo, a la pregunta “al elaborar las leyes ¿qué es lo que los diputados y senadores toman más en cuenta?”, 49% respondió que a “los intereses de los propios diputados y senadores”, 25% dijo que a “los intereses de sus partidos” y solamente el 11% contestó que a “los intereses de la población”. La respuesta a estas dos preguntas es evidencia, en primer lugar, de la poca confianza que existe entre los mexicanos, como resultado probable de un sistema legal que no garantiza una buena convivencia social, y en segundo plano, del descrédito que existe a quienes hacemos las leyes, por lo cual éstas también recibirán tal valoración.

Ahora bien, en la misma encuesta a la pregunta expresa ¿qué tanto cree usted que en el país las personas respetan la ley?, 6% dijo “mucho”, 11% respondió “nada”, 31% contestó “algo” y 52% mencionó “poco”. Además, el Índice de Corrupción y Buen Gobierno 2007 midió el nivel de corrupción que en diversos trámites existe, lo que dio como resultado que los cinco trámites con mayor incidencia de corrupción tienen que ver con el gobierno, los cuales son: 1. Pedir al camión de la delegación o municipio que se lleve la basura. 2. Pasar sus cosas en alguna aduana, retén, garita o puerto fronterizo. 3. Evitar que un agente de tránsito se lleve su automóvil al corralón/sacar su automóvil del corralón. 4. Evitar ser infraccionado o detenido por un agente de tránsito. 5. Estacionar su automóvil en la vía pública en lugares controlados por personas que se apropian de ellos.

Tanto las respuestas donde se afirma que 11% de las personas cree que la ley no es respetada, o se dice que 52% de las personas cree que la ley se respeta poco, como en el hecho de que los trámites de mayor incidencia de corrupción involucran a sociedad y gobierno, son evidencia de una débil cultura de la legalidad en México. Como parte de esto, la Encuesta de Fraude y Corrupción en México 2008 descubrió que 77% de las empresas que operan en nuestro país ha tenido cuando menos un fraude

en el último año, de los cuales 46% fue cometido por personal de las propias empresas. De igual forma, esta encuesta advierte que México es el segundo país de Latinoamérica con mayor incidencia de fraudes, solamente por debajo de Brasil.

La cultura de la legalidad en Colima es medida por diversas encuestas, algunas de las cuales ya se mencionaron. No obstante, existen datos relevantes, los cuales son presentados en la Encuesta Estatal de Cultura Política y Participación Ciudadana. En esta se encontró que al hacer la pregunta “al elaborar las leyes”, ¿qué es lo que los legisladores toman en cuenta?, los encuestados respondieron así: 32.8% dijo que los legisladores hacían caso a las propuestas de sus partidos políticos, 29% mencionó que los legisladores hacen caso a sus propias propuestas, y solamente 20% afirmó que los legisladores toman en cuenta las propuestas de la población. Esto significa que los Colimenses desacreditan las leyes aprobadas por los legisladores, al sentirlas alejadas e irreales, lo cual repercute directamente en el nivel de cultura de la legalidad.

Por otra parte, Colima goza de aspectos positivos en cuanto a la cultura de la legalidad, ya que es considerado por el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2007 como el estado con menor nivel de corrupción de todo el país, por lo que se debe trabajar para mantener ese nivel. En la Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad hecha en 2008 que aplica el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A.C. se encontró que el 11% de personas de 18 años o más que viven en Colima fueron víctimas de algún delito. Esto ubica al Estado de Colima en el lugar 11 de los estados con mayor incidencia de delitos.”

TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora coincide con la importancia y trascendencia que reviste fomentar e impulsar la Cultura de la Legalidad en nuestra entidad, tal como lo indica la autora de la iniciativa que se dictamina, Diputada Mónica Adalicia Anguiano López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la cual precisa la poca confianza que tiene la población en las leyes que rigen la conducta de la sociedad, así como en los responsables de aplicar las mismas.

La legalidad es un componente indispensable en la vida de toda sociedad democrática y, en un estado de derecho democrático como el nuestro, el imperio de la ley demanda la subordinación a ella de todos los poderes del Estado, así como de todos los ciudadanos para asegurar que se respete el interés general y que no se ejerza el poder de forma arbitraria.

En este sentido, la formación ciudadana no puede prescindir del conocimiento y respeto de las leyes que regulan la convivencia social y política, así como de las instituciones y los mecanismos que la Constitución Federal establece para garantizar la vigencia y respeto de los derechos fundamentales, por ello se prevé que desde la formación básica se inculque a la población una Cultura de la Legalidad.

Con el objeto de que tanto gobernantes como gobernados participen activamente en los asuntos públicos, se prevé la implementación de acciones de fomento y promoción de la Cultura de la Legalidad, a fin de que desarrollen capacidades, habilidades y actitudes que los conduzcan a la adhesión voluntaria y racional de aquellos principios éticos y jurídicos que orientan la convivencia social y la participación ciudadana.

El apego a la legalidad, es uno de los principios claves en el proceso de formación de la ciudadanía. La ley por sí misma y su aplicación es indispensable, más no suficiente para garantizar una convivencia pacífica, tolerante y respetuosa; para lograrlo, son necesarias las acciones de fomento y promoción de la Cultura de la Legalidad que promuevan en los colimenses y en los servidores públicos de las administraciones pública estatal y municipales, de los poderes Legislativo y Judicial, de los organismos constitucionales autónomos, etc., el ejercicio responsable de su libertad y el desarrollo de su autonomía moral, así como la capacidad de solidarizarse y preocuparse por el bienestar colectivo.

Con el fin de preservar la convivencia y el respeto entre gobernantes y gobernados, es por ello que los integrantes de la Comisión que hoy dictamina, con el objeto de salvaguardar el Estado de Derecho de nuestra entidad y, consecuentemente, el de nuestra nación, es que se resuelve favorable la presente iniciativa, para que, de aprobarse el presente Dictamen, con las modificaciones que más adelante se detallan, se puedan llevar a cabo acciones de fomento y promoción de la Cultura de la Legalidad, en las cuales se persiga el conocimiento y el respeto a la ley; valor que se debe fomentar en la conciencia de los individuos desde el nivel más elemental de convivencia social y fortalecerlo a lo largo de las diferentes etapas de la vida y la formación académica, logrando con ello, el estricto cumplimiento de las obligaciones que la ley nos impone para garantizar un nivel adecuado de convivencia social y, por otra parte, que el ejercicio de sus derechos se realicen con apego a las disposiciones legales.

Así mismo, el hecho de apoyar la promoción y el impulso de la Cultura de la Legalidad, implicaría que los gobernados, al tener un conocimiento más claro de las leyes que los rigen en comunidad, podrán exigir de las autoridades el cumplimiento puntual de las mismas; esto es, denunciar las irregularidades, abusos y actos ilícitos, que, en ocasiones, lamentablemente, se realizan ante el desconocimiento o ignorancia de los ordenamientos jurídicos, coadyuvando con ello a eliminar actos al margen de la ley.

La Comisión que dictamina, haciendo uso del derecho que le otorga el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con motivo del estudio y análisis de la Iniciativa de Ley que realizó para emitir el presente dictamen, propone modificaciones de fondo y forma a la iniciativa original, como es el nombre de la misma, para quedar como “Ley para la Promoción de la Cultura de la Legalidad en el Estado de Colima”, así como el número de capítulos y artículos de la misma. Siendo que antes constaba de ocho artículos, dividida en cinco capítulos y, ahora, de acuerdo a las observaciones que resultaron de su estudio y análisis correspondiente, se compone de veinte artículos, divididos en tres capítulos, para quedar de la siguiente manera.

El Capítulo I, denominado “Disposiciones Generales”, se integra por los artículos 1º al 7º; en el cual se precisa que la iniciativa de ley que se dictamina es de interés público y de observancia general en el Estado de Colima, tiene por objeto establecer las bases para fomentar y promover la Cultura de la Legalidad entre la población y los servidores públicos que fortalezca el Estado de Derecho y el respeto a las reglas de convivencia armónica en la sociedad, a fin de incrementar el bienestar social dentro de un marco jurídico que otorgue seguridad a los colimenses y promueva el desarrollo del Estado.

Así mismo, contempla un conjunto de objetivos específicos, en los que se pretende exista una coordinación interinstitucional y participación social con las entidades, instituciones y organizaciones de los sectores público, privado y social del Estado; donde impere la legalidad; se procure la difusión normativa; se garantice el acceso de la población a los distintos ordenamientos que constituyen el marco jurídico vigente para su conocimiento y cumplimiento; se contempla que durante el proceso formativo educativo, se inculque la Cultura de la Legalidad como un valor fundamental en la vida de los colimenses; en las acciones de fomento y promoción se propone sean integrales, tomando en cuenta su implementación en todos los ámbitos: educativo, de procuración e impartición de justicia, en las instituciones y corporaciones policiales, en la administración pública estatal y municipal, en los poderes Legislativo y Judicial del Estado, entre otros, en los que sea viable impulsar la legalidad.

El Capítulo II, con la denominación, “Del Consejo para la Promoción de la Cultura de la Legalidad”, integrado por los artículos 8º al 17; en el cual se precisa la conformación del Consejo, definiéndolo como órgano encargado de dirigir las políticas de fomento y promoción de la Cultura de la Legalidad, el que se integrará por representantes de entidades y dependencias del sector público, así como por representantes de instituciones, grupos y organizaciones más representativas de los sectores privado y social, con jurisdicción en el territorio del Estado, así como la sociedad civil.

Los integrantes del Consejo contarán con su respectivo suplente, designado por ellos mismos, debiendo éstos pertenecer a la entidad, institución u organización a la que correspondan, señalándose que los cargos serán honoríficos.

Se destaca que para la conformación del Consejo, el Gobernador emitirá la convocatoria correspondiente para que los representantes de instituciones, grupos y organizaciones más representativas de los sectores privado y social propongan o postulen candidatos, los cuales serán nombrados por el Gobernador, designando preferentemente a aquellas personas que se hayan distinguido en la realización de actividades a favor de la Cultura de la Legalidad.

Al respecto, es de resaltarse que el Consejo, será el encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley que se dictamina, siendo así, el órgano rector de dirigir las políticas y acciones de fomento y promoción de la Cultura de la Legalidad en todo el Estado; así como el encargado de coordinarse con las distintas autoridades e instituciones públicas, sociales y privadas para el fomento y promoción de la misma.

Es de resaltarse que como integrante del Consejo estará la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, quien tiene una participación muy importante en la difusión de la Cultura de la Legalidad, siendo que ésta tiene a su cargo la formación educativa de la comunidad estudiantil desde temprana edad, es por ello que se busca que desde la educación básica y su proceso formativo se puedan implementar acciones de fomento y promoción de la Cultura de la Legalidad, haciendo conciencia entre los padres de familia, directivos, personal docente y administrativo de las instituciones educativas del sector público y privado, para que ésta sea tomada como una forma de vida que coadyuve a la preservación del Estado de Derecho.

Por último, el Capítulo III, denominado “Del Programa para la Promoción de la Cultura de la Legalidad en el Estado”, integrado por los artículos 18 al 20, en el cual se establece que el Programa será el instrumento guía para orientar las políticas públicas y las acciones de fomento y promoción de la Cultura de la Legalidad, que en forma coordinada realicen el Estado, las instituciones, grupos y organismos públicos, privados o sociales, así como ciudadanos de la sociedad civil que integren el Consejo.

Se propone en el presente dictamen que el Programa a que se refiere el párrafo anterior, se formule conforme a las directrices metodológicas que se consideren más idóneas para ese fin, tomando en cuenta el acervo cultural e histórico del Estado, el respeto de los valores, las leyes, las instituciones y dignidad de las personas; ponderando la preservación del Estado de Derecho en la entidad; todo ello, bajo la responsabilidad del Consejo.

Cabe precisar que la elaboración del Programa estará a cargo del Gobernador, conjuntamente con el Secretario Técnico, mismo que será sometido para su aprobación al seno del Consejo; del cual se destaca deberá elaborarse noventa días naturales después de la conformación del Consejo y, actualizarse como máximo cada tres años, a partir de su aprobación.

Así mismo, se le agregan cuatro artículos transitorios a la iniciativa de Ley que se dictamina, a efecto de señalar la iniciación de la vigencia de la misma, el plazo que tiene el Consejo para integrarse, elaborar su Reglamento interior respectivo y, el plazo para elaborar el Programa, documento que guiará las acciones y políticas públicas tendientes a promover la Cultura de la Legalidad en el Estado.

Es por estas razones que la Comisión dictaminadora determina la viabilidad de crear la Ley para la Promoción de la Cultura de la Legalidad, mediante la cual, se establecen políticas sobre Cultura de la Legalidad dirigidas tanto a gobernantes como gobernados, con el fin de que esta cultura sea revalorizada en nuestra entidad y, así, podamos exigir unos de otros el cumplimiento exacto de las diversas disposiciones normativas que rigen nuestra convivencia social.

Asimismo, se pretende que los ciudadanos se apeguen voluntariamente a la legalidad, cobren conciencia sobre la importancia de apegarse a la misma y se convenzan de su importante utilidad para vivir junto con otras personas con necesidades y derechos similares, en una sociedad cuya diversidad es digna de respetar; de igual manera, se procura tengan la capacidad de desarrollar una actitud crítica frente al desempeño de sus representantes en la vida pública y sepan emplear los mecanismos que la propia ley les otorga, para emprender las acciones que contribuyan al desarrollo del Estado.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento se propone a esta H. Asamblea para su aprobación el siguiente:

DICTAMEN

“**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se crea la Ley para la Promoción de la Cultura de la Legalidad del Estado de Colima, para quedar como sigue:

LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD

DEL ESTADO DE COLIMA

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- La presente Ley es de interés público y de observancia general en el Estado, tiene por objeto establecer las bases para fomentar y promover la Cultura de la Legalidad entre la población y los servidores públicos que fortalezca el estado de derecho y el respeto a las reglas de convivencia armónica en la sociedad, a fin de incrementar el bienestar social dentro de un marco jurídico que otorgue seguridad a los colimenses y promueva el desarrollo de la entidad.

Artículo 2º.- La presente Ley tiene como objetivos específicos, los siguientes:

I. Coordinación Interinstitucional y Participación Social: Fomentar la Cultura de la Legalidad con la participación activa de entidades, instituciones y organizaciones de los sectores público, privado y social del Estado;

II. Principio de Legalidad: Fomentar la Cultura de la Legalidad entre la población y servidores públicos, bajo el cumplimiento del Principio de Legalidad que se traduce en que la autoridad puede hacer únicamente lo que la ley le concede y el gobernado todo lo que ésta no le prohíbe;

III. Difusión de la Normatividad: Fomentar la Cultura de la Legalidad mediante la realización de acciones de difusión y divulgación del marco normativo: leyes, códigos, reglamentos y todo tipo de disposiciones jurídicas para que servidores públicos y ciudadanos tengan conocimiento del mismo;

IV. Accesibilidad: Fomentar la Cultura de la Legalidad mediante la realización de acciones que garanticen el acceso ágil y directo de la población a los distintos ordenamientos que constituyen el marco jurídico vigente para su conocimiento y cumplimiento;

V. Proceso Formativo: Fomentar la Cultura de la Legalidad como un proceso formativo-informativo en el desarrollo de las personas a partir de la educación básica, media-superior y superior en las distintas escuelas e instituciones públicas y privadas del Estado, con el fin de inculcarla como un valor fundamental dentro de la vida de los colimenses; y

VI. Integralidad: Fomentar la Cultura de la Legalidad mediante la implementación de programas y acciones en todos los ámbitos: educativo, de procuración e impartición de justicia, en las instituciones y corporaciones policiales, en la administración pública estatal y municipal, en los poderes Legislativo y Judicial del Estado, entre otros, en los que sea viable impulsar la legalidad.

Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Acciones de fomento y promoción: A las actividades relacionadas con la promoción de la Cultura de la Legalidad en la sociedad y el conocimiento del derecho;

II. Consejo: Al Consejo para la Promoción de la Cultura de la Legalidad;

III. Cultura de la Legalidad: Al cumplimiento espontáneo y estricto por gobernantes y gobernados de las obligaciones que la ley impone para garantizar la convivencia social, a partir de su publicación, difusión, comprensión y adopción personal; acatamiento sustentado en la conciencia y convicción, individual y colectiva, de respeto a la ley, como práctica cotidiana de valores éticos, universales y forma de vida;

IV. Gobernador: Al titular del Poder Ejecutivo del Estado;

V. Ley: A la presente Ley;

VI. Programa: Al Programa para la Promoción de la Cultura de la Legalidad del Estado; y

VII. Reglamento: Al Reglamento Interior del Consejo para la Promoción de la Cultura de la Legalidad.

Artículo 4º.- El Gobernador impulsará y apoyará la participación de las instituciones públicas, privadas y sociales, para la realización de acciones orientadas a la promoción de una Cultura de la Legalidad que defina y fortalezca la identidad y solidaridad de todas las personas que habitan en el Estado.

Artículo 5º.- Las acciones de fomento y promoción que se realicen en términos de la presente Ley, deberán efectuarse con absoluto e irrestricto respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y demás leyes que dimanen de éstas.

Artículo 6º.- Son sujetos de esta Ley, todos los habitantes del Estado; así como todos los servidores públicos: de las dependencias y entidades que integran la administración pública estatal, centralizada y paraestatal; de los poderes Legislativo y Judicial del Estado; de los organismos constitucionales autónomos; de los ayuntamientos del Estado y de sus respectivas administraciones públicas municipales, centralizadas y paramunicipales.

Artículo 7º.- Esta Ley será formativa e informativa y, en ningún caso, tendrá carácter represivo.

CAPÍTULO II

DEL CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN

DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD

Artículo 8º.- El Consejo se crea como órgano encargado de dirigir las acciones de fomento y promoción de la Cultura de la Legalidad; se integrará por representantes de entidades y dependencias del sector público, así como por representantes de instituciones, grupos y organizaciones más representativas de los sectores privado y social, con jurisdicción en el territorio del Estado.

Artículo 9º.- El Consejo será un órgano de naturaleza consultiva, autónomo, incluyente, plural y democrático, de carácter honorífico y se integrará de la siguiente manera:

I. Un Presidente, que será el Gobernador;

II. Un Vicepresidente, que será un representante ciudadano designado por los integrantes del Consejo, por mayoría de votos de entre sus miembros;

III. Un representante del Congreso del Estado;

IV. Un representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado;

V. Un representante de la Secretaría General de Gobierno;

VI. Un representante de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado;

VII. Un representante de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado;

VIII. Un representante de la Universidad de Colima;

IX. Un Secretario Técnico, que será una persona con reconocida experiencia y probidad, propuesto de una terna por el Presidente y aprobado por el Consejo;

X. Un representante por cada Municipio de la entidad;

XI. Un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y

XII. Cinco representantes de la sociedad civil organizada, cuyas labores sean afines a los objetivos de la Cultura de la Legalidad, quienes serán nombrados por el Gobernador. Se designarán preferentemente a aquellos que se hayan distinguido en la realización de actividades a favor de la Cultura de la Legalidad.

Los miembros del Consejo señalados en las fracciones III a XII del presente artículo, tendrán el carácter de vocales, así como derecho a voz y voto; contarán con un suplente designado por ellos mismos, debiendo éstos pertenecer a la entidad, institución u organización a la que correspondan y los cargos serán honoríficos.

Las sesiones serán ordinarias y extraordinarias. La organización y funcionamiento del Consejo se establecerá en el Reglamento que para el efecto se expida.

El Presidente podrá invitar a Delegados Federales, así como a los titulares de las dependencias y entidades con representación en el Estado, catedráticos y expertos en el tema, los cuales asistirán a las sesiones del Consejo con voz, pero sin derecho a voto.

Artículo 10.- Los miembros del Consejo durarán en su encargo tres años, serán substituidos de manera escalonada, pudiendo sus miembros ser reelectos.

Artículo 11.- Para efectos de la fracción XII del artículo 9º, el Gobernador emitirá la convocatoria correspondiente para que representantes de instituciones, grupos y organizaciones más representativas de los sectores privado y social, con jurisdicción en el territorio del Estado, interesadas en participar en el Consejo, propongan o postulen candidatos, siempre y cuando cumplan con los requisitos indicados para tal fin.

Artículo 12.- Serán obligaciones del Presidente:

I. Coordinar y presidir las sesiones y reuniones de trabajo del Consejo;

II. Firmar acuerdos, resoluciones, pronunciamientos y todo documento oficial emitido en el Consejo;

III. Hacer preservar la libertad y el orden en el desarrollo de las sesiones del Consejo;

IV. Acordar reuniones del Consejo con autoridades gubernamentales, organizaciones sociales o privadas, cuando sea necesario;

V. Representar al Consejo en todos los eventos públicos en que se requiera su participación;

VI. Enviar junto con el Secretario Técnico, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación, la convocatoria para las sesiones ordinarias de trabajo. Para las sesiones extraordinarias, el plazo de la convocatoria será el suficiente para notificar a todos los integrantes del Consejo;

VII. Convocar a sesión cuando se considere urgente al Consejo;

VIII. Iniciar y clausurar las sesiones y reuniones de trabajo del Consejo;

IX. Elaborar, conjuntamente con el Secretario Técnico, el proyecto del Programa, para someterlo a la aprobación del Consejo;

X. Elaborar, en coordinación con el Secretario Técnico, el proyecto de Reglamento del Consejo;

XI. Programar el orden del día de las sesiones y reuniones de trabajo; y

XII. Las demás que le confiera esta Ley y el Reglamento.

Artículo 13.- Serán obligaciones del Vicepresidente:

I. Auxiliar al Presidente en el desempeño de sus funciones; y

II. Las demás que le confiera esta Ley y el Reglamento.

Artículo 14.- El Consejo contará con una Secretaría Técnica, cuyo titular tendrá las siguientes atribuciones:

I. Apoyar los trabajos del Consejo;

II. Coadyuvar con el Presidente en la elaboración del orden del día de las sesiones y reuniones de trabajo;

III. Llevar el registro de asistencia de las sesiones y reuniones de trabajo;

IV. Apoyar a los integrantes en los asuntos del Consejo;

V. Levantar actas de las sesiones y reuniones de trabajo del Consejo;

VI. Elaborar los informes de actividades;

VII. Integrar, actualizar y mantener de forma permanente los archivos de todos los asuntos y actividades realizados por el Consejo;

VIII. Coadyuvar con el Presidente en la organización, diseño y desarrollo de foros, seminarios y todo tipo de eventos que el Consejo necesite llevar a cabo;

IX. Participar en la elaboración del proyecto del Programa, en coordinación con el Presidente;

X. Elaborar, de acuerdo con el Presidente, el proyecto de Reglamento, para su posterior aprobación por el Consejo; y

XI. Las demás que señale la Ley y el Reglamento.

Artículo 15.- Son obligaciones de los integrantes del Consejo:

- I. Asistir con puntualidad a las sesiones y reuniones de trabajo;
- II. Participar con voz y voto en las sesiones y reuniones de trabajo;
- III. Conservar el orden y respeto debidos durante las sesiones y reuniones de trabajo; y
- IV. Las demás que señale la Ley y el Reglamento.

Artículo 16.- El Consejo sesionará previa convocatoria de al menos 48 horas de anticipación, de manera ordinaria cada tres meses y de forma extraordinaria cuando sea necesario.

Artículo 17.- Son facultades del Consejo:

- I. Procurar las condiciones necesarias para la participación de los diversos sectores de la población en los programas y acciones que se realicen, en términos de la presente Ley;
- II. Promover e impulsar la difusión de los valores y principios cívicos, éticos y morales como parte de la Cultura de la Legalidad, a través de campañas de información sobre sus objetivos y alcances;
- III. Fomentar en el Estado el conocimiento de los derechos y obligaciones, contenidos en las diversas disposiciones legales, como forma y parte de la Cultura de la Legalidad;
- IV. Realizar acciones de fomento y promoción de la Cultura de la Legalidad enfocadas a la comunidad escolar de las instituciones educativas, públicas y privadas, a fin de proporcionar a los estudiantes las habilidades básicas de cómo hacer valer el estado de derecho en su vida cotidiana; concientizando a los padres de familia, directivos, personal docente y administrativo de dichas instituciones, que el cumplimiento de éste les ofrece una mejor calidad de vida para ellos y para su comunidad;

V. Establecer vínculos de coordinación con las diversas entidades e instituciones públicas de la administración pública estatal y municipal, los poderes Legislativo y Judicial del Estado, instituciones públicas, grupos y organizaciones de los sectores privado y social, así como con la sociedad civil, en la elaboración de programas y realización de acciones de fomento y promoción;

VI. Diseñar los procedimientos para la supervisión, control y evaluación periódica de los programas y acciones de fomento y promoción que se emprendan con motivo de esta Ley;

VII. Dar seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones de fomento y promoción que se emprendan en el marco de esta Ley;

VIII. Integrar, conducir y coordinar las campañas y políticas públicas de promoción de la Cultura de la Legalidad;

IX. Crear e integrar las comisiones de trabajo que considere necesarias para la atención de asuntos específicos;

X. Suscribir convenios y acuerdos con entidades e instituciones públicas, privadas y sociales, en materia de la difusión y fomento de la Cultura de la Legalidad;

XI. Asesorar técnicamente a los municipios del Estado en las acciones de fomento y promoción de la Cultura de la Legalidad, contempladas en esta Ley;

XII. Estudiar, analizar y aprobar, en su caso, el proyecto del Programa, propuesto por el Presidente;

XIII. Vigilar el cumplimiento de esta Ley;

XIV. Aprobar el Reglamento, a propuesta del Presidente; y

XV. Las demás que determinen la presente Ley y el Reglamento.

CAPÍTULO III

DEL PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN

DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD DEL ESTADO

Artículo 18.- El Programa será el instrumento guía para orientar las políticas públicas y las acciones de fomento y promoción de la Cultura de la Legalidad que en forma coordinada realicen el Estado y los representantes de las entidades, instituciones, grupos, organismos y ciudadanos que integran el Consejo.

Artículo 19.- El Programa deberá estar formulado conforme a las directrices metodológicas que se consideren más idóneas para ese fin y estará bajo la responsabilidad del Consejo.

En la elaboración del Programa deberá tomarse en cuenta el acervo cultural e histórico del Estado, promoviendo el respeto de los valores, las leyes, las instituciones y dignidad de las personas; ponderando la preservación del estado de derecho en la entidad.

Artículo 20.- El Programa deberá ser actualizado por los miembros del Consejo, a más tardar cada tres años.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

Artículo Segundo.- El Consejo se conformará en un plazo no mayor a noventa días naturales a partir de la iniciación de la vigencia de la presente Ley.

Artículo Tercero.- El Consejo cuenta con un plazo no mayor a noventa días naturales contados a partir de la conformación del mismo, para aprobar su Reglamento, a propuesta del Presidente.

Artículo Cuarto.- El Presidente, conjuntamente con el Secretario Técnico, cuenta con un plazo de noventa días naturales a partir de la conformación del Consejo, para elaborar el proyecto del Programa, para su posterior aprobación por el pleno del Consejo.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe”.

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se emita el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 11 de agosto de 2011, Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. El Dip. Presidente José Manuel Romero Coello, Dip. Secretario Enrique Rojas Orozco, Dip. Secretario Alfredo Hernández Ramos, es cuanto.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano, le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. Recordándoles que con fundamento en lo establecido en el artículo 148 fracción IV inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular algún artículo del mismo, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Le damos el uso de la voz al Diputado Nicolás Contreras.

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros integrantes de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, Diputadas, publico que amablemente nos hace el favor de acompañarnos. Indudablemente el documento que el día de hoy estamos analizando revierte una importancia sustancial. Hablar de transparencia de rendición de cuentas y de honestidad es un asunto que atañe a este Congreso y definitivamente que interesa a toda la sociedad, en la página número 3 del dictamen que nos acaba de leer nuestra compañera Diputada en el párrafo tercero de esa cuartilla dice lo siguiente: Por otra parte, Colima goza de aspectos positivos en cuanto a la cultura de la legalidad, ya que es considerado por el índice nacional de corrupción y buen gobierno 2007 como el Estado con menor nivel de corrupción de todo el país, por lo que se debe trabajar para mantener ese nivel. Después dice algunas otras cosas, yo lo solicito y lo leí, solicito que ese párrafo sea retirado y argumento porque. Este dictamen lo presentaron el año pasado, lo presentaron el año pasado el 31 de agosto del año pasado en aquel entonces no estaban todavía o no conocíamos todavía los resultados más recientes de este índice de transparencia, de este índice nacional de corrupción y buen gobierno, ya tenemos los resultados más recientes, en aquel entonces Colima estaba en el primer lugar, hoy en la actualidad en el estudio más reciente Colima en esta Materia esta en el lugar número 26, está en el lugar número 26, quiere decir que aquella transparencia, que aquella rendición que cacaraqueaban mucho la administración estatal, funcionarios de gobierno, ahora en la actualidad, simple y sencillamente ya no lo pueden hacer, es imprecisa entonces actualmente esta argumentación como forma parte del dictamen y hay un error yo solicito, una que se retire esa argumentación o dos que se corrija y los documentos están en mi mano si alguien tiene alguna duda. Fueron motivo inclusive de una nota periodística en los medios de circulación local, definitivamente que nosotros como Congreso lo que queremos es aprobar leyes pero que estén sustentadas en la verdad; reitero

esta información si bien es cierto cuando se presento era con la que se contaba actualmente ya hay otra más actualizada y dista mucho de lo que en su momento se argumentó como cierto, es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Solo comentarle al Diputado Contreras que a lo que usted se refiere es a lo que viene en la exposición de motivos, son las consideraciones que vienen no es parte pues, cuando se presento la iniciativa fueron las argumentaciones que se daban no sé si, ahí se debió de haber señalado pero le comentamos al Presidente de la Comisión no se quiera señalar algo.

DIP. ROMERO COELLO. Efectivamente Diputado Presidente como usted lo menciona viene en la exposición de motivos no se puede retirar y yo propongo que se someta a votación en este momento.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con fundamento en el artículo 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en virtud de no haberse reservado ningún Diputado para discutir y votar por separado algún Título, Capítulo, Sección o Artículo del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente, sobre si se admite que la presente ley sea votada lo general y en lo particular en un solo acto, ya se le había explicado Diputado adelante Secretario.

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si se admite que toda la ley se vote en un solo acto, en lo general y en lo particular, en virtud de no existir reserva alguna. De nuevo mi amigo. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si se admite que toda la ley se vote en un solo acto, en lo general y en lo particular, en virtud de no existir reserva alguna. Quienes estén de acuerdo favor de levantar su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto, en lo general y en lo particular del dictamen que nos ocupa.

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal, y en un solo acto en lo general y en lo particular si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Por la negativa.

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, pasaremos a emitir nuestro voto la Mesa Directiva, Alfredo, a favor.

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. López, por la afirmativa.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Rojas, a favor.

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor en lo general y en lo particular.

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra en lo general y en lo particular y 1 abstención.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Valuación para el Estado de Colima. Tiene le uso de la voz el Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes.

DIP. VAZQUEZ MONTES. Con su permiso Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, compañeros Legisladores, público que nos acompaña, H. Congreso del Estado de Colima, Presente, a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Planeación del Desarrollo Urbano les fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto Relativa a crear la Ley de Valuación para el Estado de Colima, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que mediante oficio número 722/10, de fecha 11 de mayo de 2010, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Planeación del Desarrollo Urbano, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por el Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativa a crear la Ley de Valuación para el Estado de Colima.

SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala que:

Que en México se tienen datos de la actividad valuatoria desde la época de la conquista, con la introducción de las prácticas españolas y europeas en general. Dentro de la materia comercial encontramos que la practica valuatoria se ejercita desde el 15 de junio de 1952, fecha en que se instituyó por Cédula Real el consulado de la ciudad de México, en la Nueva España y sus Provincias.

El primer avalúo de bienes muebles e inmuebles se realizó el 14 de agosto del año de 1528, ordenado por el cabildo de la ciudad de México- Tenochtitlán y en febrero del año siguiente, surge la primera inconformidad de los gobernados presentada en contra de los aranceles y tasaciones que se encontraban pregonadas en la ciudad.

Para efectos impositivos se hizo la tasación o valuación general de todos los solares de la ciudad de México en el año de 1607. Esta valuación fue practicada por Peritos Valuadores designados por la autoridad, con el fin de recabar fondos para las obras de desagüe de las aguas excedentes del valle y la ciudad.

La profesión de la valuación es la labor más antigua que se tiene como cimiento en el país, con relación al gravamen de una propiedad inmobiliaria. A lo largo de los años dentro del Virreinato en México, se fue originando la práctica de censar y valuar todos los solares de las ciudades y pueblos del país con propósitos de fiscalización. Ya para la etapa de la emancipación política y social a partir de la independencia de México, el Síndico primero del Cabildo de la capital, le ordeno a los arquitectos Joaquín de Heredia y Francisco de Paula ejercer el avalúo de los terrenos de la ciudad, considerándose como criterio esencial fijar valores unitarios por cada cuadra en los cruceros o centros de cada esquina en la capital.

En esta época en México, se consagraron dos tipos de procedimientos valuatorios: el primero, mediante trabajos individuales, de cuantificación de partidas así como en trabajos masivos y el segundo; mediante criterios de uniformar valores de bienes muebles en zonas o calles.

Con esta medida, se fundamentó legalmente en el país las bases de la valuación en bienes muebles que en esta época actual del siglo XXI, ha sido modernizado y actualizado. En este contexto, los Peritos Valuadores son las personas que valúan bienes muebles e inmuebles de las entidades públicas y privadas, interviniendo en la actualización de las Leyes de Catastro en las entidades federativas, como también de las instituciones bancarias.

Entonces, tenemos que el sistema de valuación en México parte de la influencia Italiana y de la tendencia de asociar la profesión de la valuación, relacionadas con edificaciones y construcciones en infraestructuras urbanas.

La valuación hoy en día, es considerada una rama académica de la Ingeniería y de la Arquitectura, tradición que es compartida con las demás naciones que conforman América Latina. Es entonces, que se reconoce en estos tiempos la profesión del Perito Valuador, teniendo un carácter multidisciplinario en la economía internacional y nacional.

En la actualidad, existe la Academia Mexicana Nacional de Peritos Valuadores, como resultado del interés de un grupo de seis peritos valuadores en pro de aglutinar a los mejores en la materia, que cumplan fehacientemente con todas las calificaciones técnicas y personales necesarias para pertenecer a dicha institución.

Los valuadores son profesionistas que ofrecen sus servicios a la sociedad mexicana como un organismo de consulta, tanto en el sector privado como gubernamental. Su labor es la apoyar a dependencias y empresas que lo requieran en el establecimiento de criterios generales, normas y estándares. Así como, de impulsar el reconocimiento técnico de los especialistas y peritos en la materia. Todo ello, con la participación de todas las entidades públicas, privadas, de la sociedad civil y de personas interesadas en el medio valuatorio.

La labor que emprenden los Peritos de valuación de bienes muebles e inmuebles en sus diversas modalidades, es de gran importancia porque tiene un alcance internacional, nacional y local debido a que establecen acuerdos con instituciones de interés, para la edición, adecuación u adopción de normas y procedimientos en la materia, permitiendo la competencia nacional de dichos profesionistas. Su meta es siempre la de lograr la excelencia en el ámbito valuatorio en México, logrando la competitividad a nivel nacional, reconociendo a los especialistas en el peritaje de la valuación por su eficacia y eficiencia dentro de su desempeño profesional.

En esa tesitura el pasado 26 de abril del presente año, a invitación realizada por la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano que me honro presidir de esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, acudieron a la Sala de Juntas General Francisco J. Mújica de esta Soberanía Popular, los integrantes de la Directiva del Colegio de Valuadores del Estado de Colima A.C., donde en voz de su Presidente el Ingeniero Juan José López Rodríguez, presentaron a esta Comisión Legislativa un Pre-Proyecto de Ley con el objeto de actualizar el marco normativo en la materia del peritaje de la valuación de bienes muebles e inmuebles en sus diversas especialidades, a efecto de lograr una adecuada regulación de la actividad valuatoria en el Estado, en virtud de que se requiere una actualización a la Ley que crea el Registro de Peritos Valuadores en el Estado de Colima por encontrarse desfasada, debido a que la actual norma data desde el año de 1992 es decir, desde hace 18 años y solo ha tenido una reforma realizada en el año de 1995, ante esto resulta ser de gran importancia que se garantice que todos aquellos profesionistas que se ostenten como peritos en la rama valuatoria, cuenten efectivamente con la preparación profesional que se requiere para cumplir con esta responsabilidad en la entidad.

Para nadie es ajeno que en Colima en los últimos años se ha venido originando un desarrollo que ha venido produciendo un constante crecimiento de inversión hacia los sectores público, social y privado, generando con ello un incremento paralelo e importante de transacciones comerciales a la entidad, que ha originado que se vierta una gran demanda de prestación de servicios profesionales en la valuación técnica comercial y en otras modalidades como de maquinaria y equipo, en bienes agropecuarios, en obras de arte, en joyas así como, en bienes muebles, inmuebles de forma empresarial y en Instituciones públicas para efectos del cumplimiento de las obligaciones fiscales y de tramitación de créditos bancarios, con el natural incremento de ciudadanos colimenses que ofrecen y realizan este servicio.

En ese sentido dentro del Derecho Constitucional Mexicano contiene la rama del Derecho Comparado en donde el maestro Rafael de Pina Vara, dentro de su libro de Diccionario Jurídico menciona que esta rama del derecho constitucional, *“es el estudio jurídico de las diferencias y semejanzas en las legislaciones nacionales y locales, como el factor importantísimo para la preparación y adecuación de proyectos legislativos en cualquier país, pues permite beneficiarse de las experiencias de los demás y la consiguiente utilización de fórmulas ya aplicadas en otras partes para la solución de problemas jurídicos que, muchas veces no son exclusivos de ninguna nación, sino comunes a todas, sin que ello suponga negar la necesidad de que el Legislador, tenga siempre en cuenta, en primer lugar las características nacionales propias”*. En este contexto, la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano que presido, ejerciendo un estudio y análisis del derecho comparado, encontramos que en otros Estados como los de Jalisco y de San Luis Potosí, cuentan con una norma de Valuación modernizada y actualizada a los tiempos actuales, estableciendo un mecanismo procedimental de profesionalismo y calidad que sustenten los avalúos requeridos por particulares e Instituciones Públicas; del mismo modo, encontramos que en entidades federativas como Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Sinaloa, cuentan simplemente con un apartado de los peritos valuadores dentro de sus respectivas leyes de Catastro, pero sin establecer en éstas, el profesionalismo y la calidad que aboguen los avalúos así como, de reconocer al perito valuador como una especialidad profesional en sus distintas especialidades; sin que se establezca las bases para integrar una Comisión de Valuación, como organismo público regulador para registrar a los ciudadanos que ostenten dicha profesión en sus respectivos Estados. Tomando esta Comisión partes importantes de todas las legislaciones locales antes referidas, para enarbolar y adecuar a nuestra entidad dicha Iniciativa.

Es por eso que se presenta a la consideración de la Asamblea, la presente Iniciativa de Decreto, ratificando el interés público en las operaciones de valuación, reconociéndolas como una especialidad profesional en sus distintas modalidades; del mismo modo, en la presente Iniciativa se establecen las bases para integrar la Comisión de Valuación del Estado de Colima, como un organismo público descentralizado, que tendrá como finalidad promover la capacitación de los profesionistas en el rubro de la valuación, así como, en el desarrollo y coordinación de las actividades de valuación en sus diversas modalidades; a la vez que regula la participación de las autoridades estatales, en concurrencia con las asociaciones u colegios de valuadores en la entidad.

Del mismo modo, en el documento en mención su objeto es de formar, conservar y operar el Registro Estatal de Valuadores Profesionales, que estará a cargo de la Comisión de Valuación del Estado, con el objeto de inscribir y actualizar a los profesionistas en la materia valuatoria que ejerzan en nuestro territorio; así mismo, coordina las acciones de capacitación en materia de valuación; la formación de un banco de datos sobre los valores de los bienes y el actuar de un cuerpo consultivo especializado, auxiliando a las autoridades competentes de la materia. Definiéndose también en esta norma, los requisitos de estudios y capacitación especializada, que deben acreditar los ciudadanos que deseen ejercer de forma profesional la valuación de bienes; orientando las actividades de las

asociaciones de valuadores en las áreas de capacitación y actualización profesional, definiendo y revisando además, los criterios de valuación con mayor certeza legal en eficacia y eficiencia de los avalúos.

Que la presente Iniciativa está compuesta por doce Capítulos, 95 artículos y cinco Títulos en los cuales el Título Primero contiene las Disposiciones Generales, con el Capítulo I denominado "De las Bases para ejercer la actividad profesional de Valuadores", en donde se plasma las bases para el ejercicio de las actividades profesionales que realicen los valuadores profesionales, con relación a los requerimientos del Estado, los Municipios y de las personas en particular; así como el Capítulo II llamado "De los Valuadores", establece la función del Valuador consistente en determinar el valor comercial de los bienes muebles e inmuebles; el Capítulo III designado "De los Derechos y atribuciones de los Valuadores Profesionales" en él se extiende el documento denominado avalúo, que contiene el estudio y análisis que estipula dicho valor, así mismo, se plasma dentro de este mismo capítulo, los derechos y atribuciones de los Valuadores Profesionales autorizados conforme a las disposiciones de la presente ley; dentro del Título Segundo instituido "De los Avalúos, Asociaciones de Valuadores y Conformación de la Comisión de Valuación" dentro de su Capítulo IV llamado "De la Valuación y los Avalúos", se establece la valuación, como una actividad profesional en el Estado de Colima en donde se regirá conforme a las disposiciones de esta ley y su reglamento, así mismo, se establece también en este mismo capítulo, que los avalúos se formularán por escrito de manera clara y objetiva, presentando el razonamiento y la información suficiente con las cuales el valuador obtendrá el valor conclusivo del bien en estudio, siempre en rubros enunciativos más no limitativos; en el Capítulo V llamado "Asociaciones de Valuadores Profesionales", se plasma que las asociaciones de valuadores profesionales, se integrarán conforme a las disposiciones que regulan la presente ley, así como, la Ley de Profesiones del Estado, teniendo personalidad jurídica y patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines; en el Capítulo VI denominado " De la Comisión de Valuación del Estado de Colima" se establece la estructura orgánica de la misma, el objeto y las atribuciones que tiene; en ese mismo sentido en el Título Tercero llamado "De la Conformación del Comité Ejecutivo y Atribuciones de la Comisión de Inspección y Vigilancia", en su Capítulo VII denominado "Del Comité Ejecutivo", se plasma la integración de éste, las facultades y atribuciones así como, se establecen las atribuciones y las obligaciones del Secretario Técnico; del mismo modo, se plasman las atribuciones de los vocales como integrantes del Comité; en el Capítulo VIII denominado "De la Comisión de Inspección y Vigilancia", se establece en este capítulo que dicha Comisión será el órgano de control y de revisión de la Comisión de Valuación así como, se instituye su integración; en el Título Cuarto denominado "Registro de Valuadores Profesionales, las Sanciones y Recursos", en su Capítulo IX, se plasma el Registro Estatal de Valuadores Profesionales, como el medio de consulta y control del ejercicio de la valuación como actividad profesional en el Estado, que estará a cargo del Gobernador del Estado a través de la Secretaría General de Gobierno; así mismo, se instituye también, la naturaleza de los bienes a valorar en la entidad en sus diversas especialidades; en los Capítulos X y XI denominado el primero, "De las Sanciones y Recursos" y el segundo "Del Recurso de Revisión" se plasman las sanciones a los Valuadores como el acto u omisión que contravenga lo dispuesto en esta ley, en donde podrán ser sancionados por la Comisión de Inspección, previo procedimiento que se establezca en el reglamento dando preeminencia al derecho de audiencia y defensa del valuador, señalado como presunto infractor; así mismo en el capítulo XI se establecen los recursos de revisión contra las sanciones hacia los valuadores que les imponga la Comisión de Inspección, pudiendo interponer el valuador mismo, el recurso de revisión ante el Presidente del Comité Ejecutivo por conducto de la Secretaría General de Gobierno; por último, en el Título Quinto denominado "De la Conformación del Patrimonio de la Comisión de Valuación", en su Capítulo XII, se establece la integración del patrimonio de la Comisión de Valuación en cuanto a su infraestructura mobiliaria.

TERCERO.- Después de haber realizado el estudio y análisis correspondiente de la Iniciativa relativa a crear la Ley de Valuación para el Estado de Colima, presentada por el Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes, éstas comisiones dictaminadoras coincidimos, que así como lo menciona su iniciador, esta nueva Ley viene a actualizar el marco normativo en la materia del peritaje de la valuación de bienes muebles e inmuebles en sus diversas modalidades, a efecto de lograr una adecuada regulación de la actividad valuatora en el Estado, siendo que la vigente Ley que crea el Registro de Peritos Valuadores no ha sido actualizada de acuerdo a las necesidades y exigencias que apremian en la actualidad; es por ello que resulta de gran importancia se garantice que todos aquellos profesionistas que se ostenten como peritos en la rama de la valuación, cuenten con la preparación profesional que se requiere para tal efecto.

En la Iniciativa que se dictamina, se resalta el hecho de que en la entidad se ha venido registrando un claro y constante crecimiento de inversión hacia los sectores público, social y privado, generando con ello un incremento paralelo e importante de transacciones comerciales en el Estado, originando que se vierta una gran demanda de prestación de servicios profesionales en la valuación técnica comercial y en otras modalidades como de maquinaria y equipo, en bienes agropecuarios, en obras de arte, en joyas, así como en bienes muebles e inmuebles de forma empresarial y en instituciones

públicas, para efectos del cumplimiento de las obligaciones fiscales y de tramitación de créditos bancarios, con el natural incremento de ciudadanos colimenses que ofrecen y realizan este servicio.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo decreto un receso muy breve ..RECESO.. se reanuda la sesión

DIP. VAZQUEZ MONTES. Al aprobar esta nueva Ley, se estarán reconociendo las operaciones de valuación como una especialidad profesional en sus distintas modalidades; dándole apertura y oportunidad a todas aquellas personas que se ajusten a lo dispuesto de la misma para poder ejercer la profesión valuadora, cumpliendo con ello lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual garantiza la libertad de dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.

Con base en el párrafo anterior queda claro que no se coarta la garantía constitucional de dedicarse a la profesión, empleo u oficio, siempre que sea lícito; siendo que la Ley de Profesiones del Estado de Colima regula la existencia de la valuación como área académica y la Ley que se propone regula su ejercicio, además de que ambas legislaciones establecen la *certificación profesional*, misma que se define como el proceso de evaluación a que voluntariamente se somete un profesionista, con el objeto de determinar su nivel de competencia y grado de actualización con relación a los conocimientos propios de la profesión o rama profesional, así como las habilidades, aptitudes y destrezas que posee para el ejercicio profesional. De igual manera, como parte de la actualización profesional se establece el mejoramiento continuo de los profesionistas que tendrá por objeto la actualización y capacitación permanente sobre conocimientos técnicos, teóricos y prácticos del ejercicio profesional; en razón de lo siguiente:

La Ley de Profesiones del Estado de Colima, establece en su artículo 7º, que será obligación de la Secretaría de Educación, por conducto de la Dirección Estatal de Profesiones, registrar a los profesionistas que hayan sido reconocidos como peritos.

En ese mismo sentido, el artículo 14 de la misma Ley de Profesiones, señala que para realizar la función de perito, se deberá tener título de la Profesión o especialidad que comprenda los actos sujetos al dictamen; así mismo, menciona que los peritos que hayan sido reconocidos de conformidad con la legislación aplicable, deberán registrarse ante la Dirección Estatal de Profesiones, lo cual da sustento a la existencia de una Ley de Valuación, mediante la cual se reglamente el procedimiento pertinente para la obtención del registro que lo autorice como perito valuador y su ejercicio.

ARTÍCULO 14.- Para realizar la función de perito, se deberá tener título de la Profesión o especialidad que comprenda los actos sujetos al dictamen; cuando en un procedimiento arbitral, laboral, administrativo o cualquier otro de carácter jurisdiccional, se requiera la opinión de un especialista y no exista en la entidad, se llamará a quien ejerza en la rama general de la profesión.

Los profesionistas que hayan sido reconocidos como peritos de conformidad con la legislación aplicable, deberán registrarse ante la Secretaría por conducto de la Dirección.

La lista de peritos profesionales será publicada anualmente por la Secretaría por conducto de la Dirección.

Igualmente, la iniciativa que se dictamina pretende contribuir al enaltecimiento del servicio de valuación, en la cual se prevé se preste con probidad, honestidad, responsabilidad, respeto, preparación y profesionalismo por las personas que cuenten con el registro correspondiente que las avale como peritos valuadores, de conformidad a lo establecido por la nueva Ley que se dictamina.

Por ello, se incorporan requisitos generales aplicables a personas físicas o morales que ofrezcan servicios de valuación, a fin de garantizar a los usuarios uniformidad, certeza y confianza en el resultado del mismo.

Lo anterior permitirá garantizar que todos aquellos profesionistas que se ostenten como peritos en la rama de la valuación, contarán con la preparación profesional que se requiere, a efecto de unificar, normar, regular, controlar y vigilar el ejercicio de la valuación como una actividad profesional, desde el punto de vista técnico-jurídico, determinando los requisitos para su ejercicio tanto en lo individual como en lo colectivo, que nos permita contar con peritos valuadores plenamente certificados para el ejercicio de su profesión o especialidad.

A mayor abundamiento, es importante mencionar que dentro del estudio y análisis de la Iniciativa que se dictamina, con el firme propósito de enriquecer el contenido del presente Dictamen, las Comisiones que suscribimos solicitamos en su momento observaciones y comentarios de profesionales en la materia de la valuación para que vertieran sus aportaciones, puntos de vista e inquietudes sobre la misma, las cuales fueron expuestas por éstos en reuniones de trabajo celebradas el 26 de enero y 26 de mayo del presente año, en la Sala de Juntas J. Francisco Mujica del Congreso del Estado; dentro de los cuales participaron: por parte del Poder Judicial, el entonces Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el Magistrado José Alfredo Jiménez Carrillo, el actual Magistrado Presidente del mismo tribunal, el Licenciado Rafael García Rincón, el Juez Primero de lo Mercantil de Colima, Licenciado Adán Muñiz Mora, la Juez Mercantil de Villa de Álvarez, Licenciada Delia Ludivina Olmos Díaz; los diputados locales Ma. del Socorro Rivera Carrillo, Milton de Alba Gutiérrez y Raymundo González Saldaña; representantes de la Secretaría General de Gobierno; el Arquitecto y Maestro, Carlos G. Mercado Schulte, Presidente del Consejo Directivo del Colegio de Peritos Valuadores (COPVAL); el Ingeniero Rafael Héctor Rodríguez Olvera, Presidente del IV Consejo Directivo del COVACOL; el Ingeniero Juan José López Rodríguez, el otrora Presidente del COVACOL; los Peritos Valuadores en el Estado, el Arquitecto José Ricardo Moreno Peña, el Arquitecto Armando Díaz Barbosa, la Ingeniero Civil Evangelina Bañuelos Rodríguez, el Ingeniero Agustín Gallardo Aparicio y las Maestras en Valuación de Bienes: Ma. Emerita Gutiérrez González, Margarita Gutiérrez González e Irma Alicia Gutiérrez González. Igualmente, en la elaboración del presente dictamen se contó con la importante participación de la Secretaría del Educación del Gobierno del Estado, a través de su Dirección Jurídica, respecto de la forma e integración de los colegios de valuadores en la entidad.

Por lo tanto, derivado del estudio y análisis correspondiente y, de acuerdo a las aportaciones y puntos de vista vertidos por los profesionales señalados en el párrafo anterior y, haciendo uso del derecho otorgado por el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en la elaboración del presente Dictamen, éstas comisiones dictaminadoras, hemos decidido tomar en cuenta algunas de ellas e incorporarlas al mismo; mismas que dieron lugar a varios cambios en el

contenido de la Iniciativa original en cuanto a estructura y alcance normativo, mejorando con ello la redacción y técnica legislativa. Teniendo, a groso modo, como principales modificaciones a destacar:

I.- La iniciativa se distribuía en cinco títulos y doce capítulos, mismos que después de los comentarios, observaciones y, el estudio y análisis realizados por las comisiones dictaminadoras, se optó por eliminar los Títulos de la misma para quedar solamente con ocho capítulos y cinco secciones dentro del capítulo sexto.

II.- Por cuestiones de redacción, técnica legislativa y alcance normativo, se reformaron, derogaron y adicionaron diversos artículos en el cuerpo de la Ley que se dictamina; la cual, originalmente constaba de 95 artículos y, ahora se integra por 97 artículos.

III.- En cuanto a los transitorios de la Iniciativa, ésta se integraba por cuatro Transitorios, de los cuales se modificó el orden de los mismos por cuestiones de técnica legislativa, pasando el Artículo Cuarto Transitorio a ser Primero, haciéndose el corrimiento correspondiente, asimismo, se adicionan cuatro nuevos Artículos, para quedar con ocho artículos transitorios; quedando de la siguiente manera: Se adicionan los artículos Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo. Los cuales van enfocados a determinar el término que tiene el Comité para integrarse, mismo que no podrá ser mayor a 90 días naturales a la entrada en vigor de la presente Ley; así como indicar que los actuales registros de los valuadores realizados hasta antes de la entrada en vigor de este Dictamen, serán respetados en todos sus derechos, sin embargo, deberán ajustarse a las disposiciones de la Iniciativa que se dictamina; de igual manera, se precisa que el cargo de Secretario Técnico del Comité será ejercido por el Director de Catastro, en tanto no sea creada la Dirección General del Instituto del Registro Territorial.

Al efecto, se destaca que la Iniciativa de Ley que se dictamina, queda integrada por 97 artículos, divididos en ocho Capítulos y cinco secciones dentro del capítulo sexto, los cuales se conforman de la siguiente manera:

El Capítulo Primero, denominado “Disposiciones Generales”, se compone por los artículos 1º al 3º, el cual señala que esta nueva Ley tiene por objeto establecer y reglamentar las bases para el ejercicio de las actividades profesionales que realicen los valuadores, a diferencia de la vigente Ley, que solo establece el registro de los peritos valuadores del estado.

El Capítulo Segundo, denominado “De los Valuadores”, compuesto por los artículos 4º al 11, establece con claridad que el valuator será aquel profesionista con título y cédula profesional de valuator, expedido por la Secretaría de Educación Pública, una vez que haya cursado los estudios específicos en el área del conocimiento de la valuación, en una Institución de educación superior con reconocimiento oficial o avalados por ésta; para su ejercicio en forma individual o colegiada, debiendo además, estar inscrito en el Registro. Con ello podrá acreditar que cuenta con los conocimientos necesarios para determinar el valor comercial de bienes muebles e inmuebles mediante la emisión de dictámenes técnicos de valor; asimismo, se establece con claridad en qué consiste la función propia del valuator, así como los requisitos para poder estar dado de alta en el Registro Estatal de Valuadores Profesionales y los beneficios que conlleva estar inscrito en el mismo.

El Capítulo Tercero, denominado “De los Derechos y Obligaciones de los Valuadores Profesionales”, compuesto por los artículos 12 a 18, establece, como su nombre lo indica, determina los derechos y obligaciones de los valuadores profesionales, detallando con precisión el conjunto de actos y actividades a que está facultado desarrollar el valuator profesional, así como el conjunto de obligaciones a que lo sujeta esta Ley que se dictamina en el ejercicio de su profesión, con lo cual se determina el actuar de los peritos profesionales de la valuación.

El Capítulo Cuarto, denominado “De la Valuación y los Avalúos”, se integra por los artículos 19 al 32, en este se destaca los lineamientos a seguir por los peritos valuadores en la elaboración de sus dictámenes de valor; los efectos que tienen cuando éstos han sido realizados cumpliendo con la normatividad y cuando se emiten sin observar la Ley y su Reglamento, en este último caso, se precisa que sólo tendrán el carácter de una opinión particular de quien lo emita, careciendo de validez para utilizarse en actos jurídicos de los que deriven obligaciones de naturaleza pública o privada.

Asimismo, se señala que los dictámenes de valor tendrán una vigencia por seis meses, contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción por parte del interesado; donde, para efectos de la vigencia de éstos, se deberá tomar en cuenta las posibles variaciones inflacionarias de un más menos 5% sobre el valor comercial del bien; precisándose que la valuación comercial se efectuará conforme a las disposiciones de la Ley que se dictamina y, en su momento, por el Reglamento respectivo.

En éste Capítulo, también se precisa que la determinación de los valores por parte de los valuadores profesionales debidamente registrados tendrá las modalidades de valuación sobre bienes inmuebles, muebles, maquinaria y equipo, industrial, actividades extractivas, bienes agropecuarios, obras de arte, joyas, comercial, valuación de bienes intangibles y las demás que determine en su momento el Reglamento respectivo.

El Capítulo Quinto, denominado “Asociaciones de Valuadores Profesionales”, integrado por los artículos 33 al 36, el cual determina la forma en que habrán de integrarse las Asociaciones de Valuadores Profesionales, entendiéndose por estas a las asociaciones de profesionistas y a los colegios. Capítulo en el que se indican los requisitos que deberán cumplir cada una de ellas para su constitución y registro, así como los derechos y obligaciones a que quedan sujetas dichas Asociaciones, contribuyendo con ello a una adecuada regulación en la operación y funcionamiento de las mismas.

El Capítulo Sexto, denominado “De la Comisión de Valuación del Estado de Colima”, el cual se subdivide en cinco secciones, integrado por los artículos 37 al 73, en el cual se destaca la estructura y funcionamiento que tendrá la Comisión, a la cual se le otorgan mayores facultades que a la vigente Comisión de Peritos Valuadores, contenida en la Ley que Crea el Registro de Peritos Valuadores en el Estado de Colima; misma que fungirá como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con capacidad normativa, de consultoría y regulación de la actividad de valuación en cualquiera de sus modalidades en el Estado; del mismo modo, es de destacarse la integración de la Comisión de Valuación, como un órgano descentralizado, que tendrá como finalidad, promover la capacitación de los profesionistas en el rubro de la valuación

en sus diversas áreas; a la vez que regulará la participación de las autoridades estatales, en concurrencia con las Asociaciones de Valuadores Profesionales y los peritos que ejerzan de manera individual en la entidad.

Dentro de la misma Comisión existirá un *Comité Ejecutivo*, quien tendrá la representación legal de ésta, el cual, entre otras de sus atribuciones, tendrá las de vigilar el cumplimiento de la Ley que se dictamina, su Reglamento y las normas éticas, técnicas y arancelarias que para el efecto se expidan.

Asimismo, será el encargado de examinar las solicitudes de registro de quienes aspiren a ejercer la profesión de valuadores profesionales, debiendo aprobar a aquellos que cumplan con los requisitos indicados en la Ley y negar el registro a quienes no cumplan con ellos.

Este Comité Ejecutivo estará integrado por representantes del Poder Ejecutivo, los cuales consisten en el Gobernador del Estado, el Secretario General de Gobierno, en su momento, por el Director General del Instituto del Registro Territorial, por un representante de los poderes Legislativo y Judicial; en el caso de los municipios de la entidad, estarán representados por dos ayuntamientos, uno por cada distrito electoral Federal existente en el Estado, nombrados por la mayoría de los mismos; en el caso de los valuadores colegiados, tendrán dos representantes por cada una de las Asociaciones de Valuadores Profesionales constituidas en el Estado, a propuesta de sus integrantes.

Asimismo, los valuadores que ejerzan de manera independiente, también tendrán participación dentro del Comité, los cuales estarán representados ante el mismo por un valuator independiente de la entidad con registro vigente, a propuesta de cuando menos tres de éstos últimos, quienes, al igual que los demás integrantes del Comité, tendrán el carácter de vocales.

Como órgano de revisión y control de la Comisión, existirá la *Comisión de Inspección y Vigilancia*, que dentro de sus funciones se encuentra el vigilar que los valuadores y asociaciones de valuadores profesionales acreditados en la entidad, den cumplimiento a las disposiciones de la Ley que se dictamina, su Reglamento, las normas éticas, técnicas y arancelarias que para el efecto se expidan. Siendo, además, el órgano encargado de amonestar, sancionar y, en su caso, cancelar los registros de los valuadores que incumplan o infrinjan con las disposiciones de la Ley de la materia.

Asimismo, ésta comisión estará integrada por un representante que nombre el Gobernador del Estado, por quien nombre el Secretario de Desarrollo Urbano, por los presidentes de las Asociaciones de Valuadores Profesionales y por el representante de los valuadores independientes ante el Comité.

El *Registro Estatal de Valuadores Profesionales*, aunque ya se contempla en la vigente Ley, se establece como un medio de consulta pública y control del ejercicio de la valuación como actividad profesional en el Estado, el cual estará a cargo del

Gobernador del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno; trámite que se hace actualmente a través del Director de Catastro.

Se destaca que para que ejercer la actividad de la valuación y, mejorar el servicio y la calidad de los dictámenes técnicos de valor, todos los nuevos valuadores que pretendan inscribirse deberán contar con cédula de especialista en cualquiera de los rubros de la valuación que indica el artículo 28 de la nueva Ley; en los casos que el arte u oficio sobre el que se va a emitir el dictamen de valor no estuviera reglamentado por la Ley de Profesiones, se atenderá a lo dispuesto por los párrafos tercero y cuarto del artículo 345 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, los cuales mencionan que *si la profesión o el arte no estuvieren legalmente reglamentados, o estándolo, no hubieren peritos en el lugar, podrán ser nombrados cualesquiera personas entendidas, aun cuando no tengan título.*

Para mantener vigente su Registro como valuadores, éstos deberán refrendar su registro cada 5 años, comprobando que durante ese tiempo se estuvo actualizando por un mínimo de 30 horas, avaladas por una Institución educativa que esté reconocida por la Comisión de Valuación, la Secretaría de Educación Pública, por organismos de reconocimiento local, nacional o internacional, así como por alguna asociación de valuadores profesionales legalmente constituida; caso contrario, en la vigente Ley se refrenda cada dos años, sin embargo no señala como obligación que el valuador acredite que durante ese tiempo se estuvo actualizando.

Así como se exige el registro para ejercer la profesión o especialidad de la valuación, también les obliga registrarse a las Asociaciones de Valuadores Profesionales que se constituyan en la entidad. De las cuales se destaca que todos los socios que integren las mismas, deberán cumplir con los requisitos que marca el artículo 7º de la Ley que se propone.

En cuanto a las autoridades jurisdiccionales, las dependencias y entidades paraestatales de la administración pública del Estado, del Poder Legislativo y de los municipios; así como los notarios públicos, y los corredores públicos, se destaca que preferentemente sólo admitirán los avalúos que emitan los valuadores profesionales debidamente inscritos en el Registro y los emitidos por las personas legalmente facultadas para ello o aquellos que sean nombrados en los términos de los párrafos tercero y cuarto del artículo 345 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, cuando no exista perito o valuador en el lugar, de acuerdo con lo previsto en sus leyes y demás disposiciones respectivas, quedando excluidos los avalúos catastrales.

Esto indica que para ejercer la actividad de la valuación en el Estado, los interesados deberán inscribirse en el Registro, haciendo la solicitud por escrito, acompañando los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 7º de la Ley de la materia, a través de la Secretaría General de Gobierno, la cual turnará la documentación a la Comisión de Valuación para que determine si procede o no la inscripción solicitada; mejorando con ello, la calidad en el servicio de la valuación.

La exigencia de inscripción para aquellos profesionistas que deseen ejercer como valuadores, otorga certeza a las personas físicas o morales, entidades públicas o privadas que contraten los servicios de valuación, de que los dictámenes emitidos por los profesionales registrados tendrán validez ante cualquier autoridad o asociación, persona física o moral en la Entidad.

Esto garantiza que no se aceptarán más avalúos que los realizados por valuadores debidamente registrados conforme a lo dispuesto por la Ley que se propone y, en su momento, por su Reglamento; esto es, que los dictámenes elaborados sin observar las disposiciones de la nueva Ley que se dictamina, sólo tendrán el carácter de una opinión particular de quien los emita, los cuales tendrán el alcance normativo que en su momento el juzgador quiera otorgarles.

El Capítulo Séptimo, denominado “De las Sanciones”, compuesto por los artículos 74 al 80, señala que ante todo acto u omisión de los valuadores profesionales que contravengan lo dispuesto por la Ley que se dictamina, serán sancionados por la Comisión de Inspección, de acuerdo a la gravedad de la falta cometida; las cuales podrán consistir en amonestación por escrito, suspensión del registro y cancelación del mismo.

El Capítulo Octavo, denominado “De los Recursos”, integrado por los artículos 81 a 97, menciona que ante los actos o resoluciones emitidos por la Comisión de Inspección, los valuadores sancionados tendrán como medio de defensa el Recurso de Revisión ante el Presidente del Comité Ejecutivo, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, para que el afectado argumente lo que a su derecho convenga.

Sin embargo, será optativo para el valuador sancionado agotar el Recurso de Revisión o promover el juicio correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.

Es por estas razones que determinamos aprobar la Iniciativa de Ley que se dictamina, siendo que busca unificar, normar, regular, controlar y vigilar el ejercicio de la valuación como una actividad profesional, desde el punto de vista técnico-jurídico, determinando los requisitos para su ejercicio tanto en lo individual, como en lo colectivo; que nos permita contar con peritos valuadores plenamente certificados para el ejercicio de su profesión o especialidad.

Por lo tanto, las comisiones dictaminadoras consideramos que la presente iniciativa permitirá darle mayor certidumbre y legalidad a los avalúos que se emitan por los profesionales de las diferentes áreas, imprimiendo agilidad a todas las transacciones que se lleven a efecto en la Entidad, aún en las más complejas o controversiales; permitiendo, además, una mejor toma de decisiones en las inversiones que se realicen en el Estado.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 133 al 138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:

DICTAMEN:

“ARTÍCULO UNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Ley de Valuación para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

LEY DE VALUACIÓN PARA EL ESTADO DE COLIMA

**CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público, interés social, observancia general y de aplicación en toda la entidad; y tiene por objeto:

I.- Establecer y regular las bases para el ejercicio de las actividades profesionales que realicen los valuadores profesionales, con relación a los requerimientos del Estado, los municipios y de las personas en particular, a efecto de contar con un documento técnico que contenga el estudio para establecer el valor comercial de los bienes muebles e inmuebles en forma fehaciente, confiable y autorizada, para fines administrativos, fiscales y judiciales, quedando comprendidos dichos bienes dentro de las especialidades señaladas en la presente Ley;

II.- Normar, regular, controlar y vigilar el ejercicio de la valuación como una actividad profesional y determinar sus requisitos;

III.- Constituir el Registro Estatal de Valuadores Profesionales;

IV.- Delimitar los derechos y obligaciones de los valuadores profesionales;

V.- Integrar la Comisión de Valuación del Estado de Colima, así como definir las bases para su integración, organización y funcionamiento;

VI.- Definir la integración de las Asociaciones de Valuadores Profesionales, estableciendo los requisitos para su formación y sus fines específicos;

VII.- Constituir la Comisión de Inspección y Vigilancia, dependiente de la Comisión de Valuación del Estado de Colima, determinando su integración y su objeto;

VIII.- Establecer las bases específicas para la integración y actividades de las asociaciones de profesionistas especializados en valuación;

IX.- Fijar los lineamientos técnicos y jurídicos mínimos, así como, implementar los métodos, criterios y formatos adecuados y uniformes, que deberán observar los valuadores profesionales al emitir avalúos en los que intervengan, los cuales determinarán de manera adecuada e integral el valor de los bienes objeto de la valuación;

X.- Promover la actualización de la actividad valuatoria, así como la capacitación del valuador profesional, para el mejoramiento de su actividad como profesional especializado;

XI.- Determinar las sanciones que se impongan a los valuadores profesionales, cuando contravengan lo dispuesto en esta Ley; así como el recurso de revisión que se puede interponer contra las resoluciones que emita la Comisión de Inspección y Vigilancia; y

XII.- Estipular los medios con los que se integra el patrimonio de la Comisión de Valuación del Estado de Colima.

Artículo 2°.- La aplicación de la presente Ley corresponde al Gobernador del Estado, por conducto del Secretario General de Gobierno, a través de la Comisión de Valuación del Estado de Colima y los órganos que la integran.

Artículo 3°.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I.- Análisis de mercado: Al comparativo de ofertas de mercado que se fundamenta en el examen de datos de ofertas, transacciones o comportamiento de mercado;

II.- Avalúo: Al documento final emitido por el valuador como resultado del proceso de estimar el valor de un bien mueble o inmueble precisados en esta Ley y su Reglamento, determinando la medida de su poder de cambio en unidades monetarias a una fecha determinada. Es asimismo, un dictamen técnico en el que se indica el valor de un bien a partir de sus características físicas, su ubicación o su uso, como resultado de una investigación y análisis de mercado, atendiendo la Norma Mexicana de Valuación cuando en las leyes, reglamentos, reglas, circulares y demás ordenamientos se haga referencia a un informe de valuación, dictamen pericial valuatorio, reporte de valor, dictamen de valuación, debiendo entenderse que tales términos constituyen el avalúo;

III.- Asociaciones de Valuadores Profesionales: A las asociaciones de profesionistas y los colegios que tengan por objeto la valuación de bienes legalmente constituidos en la entidad conforme a las leyes de la materia;

IV.- Bien materia de valuación: A cualquier tipo de bien, derecho, obligación o servicio que se encuentre dentro del patrimonio de una persona física, persona moral o cualquier entidad sin personalidad jurídica;

V.- Comisión: A la Comisión de Valuación del Estado de Colima;

VI.- Comisión de Inspección: A la Comisión de Inspección y Vigilancia dependiente de la Comisión de Valuación del Estado de Colima;

VII.- Comité: Al Comité Ejecutivo de la Comisión de Valuación del Estado de Colima;

VIII.- Conclusión de valor: Al enunciado que manifiesta el resultado obtenido, expresado en número y letra, en moneda nacional, a la fecha del informe de valuación;

IX.- Costo: A la cantidad expresada en términos monetarios que se requiere para adquirir, crear o producir un bien, derecho, obligación o servicio;

X.- Dirección de Profesiones: A la Dirección Estatal de Profesiones de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado;

XI.- Fecha de inspección: A la precisión del tiempo durante el cual se realiza la identificación y verificación de las características del bien materia de la valuación;

XII.- Fecha de referencia de valor: Al día en el calendario presente, retrospectivo o prospectivo al que corresponde el valor del bien materia de la valuación, pudiendo éste ser diferente a la fecha del avalúo, de conformidad con las disposiciones legales específicas. Una valuación referida debe tomar en cuenta el valor obtenido a la fecha del avalúo del mencionado bien;

XIII.- Gobernador: Al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima;

XIV.- Ley: Al presente ordenamiento;

XV.- Ley de Profesiones: A la Ley de Profesiones del Estado de Colima;

XVI.- Registro: Al Registro Estatal de Valuadores Profesionales, adheridos a la Comisión;

XVII.- Reglamento: Al Reglamento de esta Ley;

XVIII.- Secretaría: A la Secretaría General de Gobierno del Estado de Colima;

XIX.- Usuario: A la persona física, moral o cualquier entidad sin personalidad jurídica que utiliza un informe de valuación. En ocasiones puede ser el mismo solicitante;

XX.- Valor: Al concepto económico que refiere a la cantidad expresada en términos monetarios que se le estime al bien objeto de la valuación, en función de su utilidad, demanda y oferta en una fecha determinada;

XXI.- Valor comercial: Al valor expresado en términos monetarios que determina el valor de un bien en el mercado corriente, bajo las circunstancias prevalecientes a la fecha del avalúo;

XXII.- Valor de mercado: A la cantidad estimada expresada en términos monetarios, por el cual un bien se intercambia entre un comprador y un vendedor actuando por voluntad propia, con un plazo razonable de exposición, donde ambas partes actúan con conocimiento de los hechos; y

XXIII.- Valuador: A la persona física con título y cédula profesional de valuador, expedido por la Secretaría de Educación Pública, una vez que haya cursado los estudios específicos en el área del conocimiento de la valuación, en una institución de educación superior con reconocimiento oficial o avalados por ésta; para su ejercicio en forma individual o colegiada, debiendo además, estar inscrito en el Registro.

CAPÍTULO II DE LOS VALUADORES

Artículo 4°.- El Valuador es el profesionista que cumple las cualidades de la fracción XXIII del artículo 3º y, autorizado por la Comisión, para emitir dictámenes técnicos de valor.

Artículo 5°.- La función del valuador, para los efectos de la presente Ley, consiste en determinar el valor comercial de los bienes muebles e inmuebles, así como, extender el dictamen denominado avalúo que contenga el estudio y análisis que estipule dicho valor.

Artículo 6°.- Quedan comprendidos en las categorías de bienes señalados en el párrafo anterior, todo tipo de bienes muebles e inmuebles de cualquier naturaleza, urbanos, agropecuarios, maquinaria y equipo, obras de arte, joyas, de extracción, comerciales, intangibles y otros considerados así por las leyes.

Artículo 7°.- Quienes pretendan inscribirse en el Registro deberán presentar por escrito, ante el Gobernador, la solicitud correspondiente, debiendo anexar a ésta los documentos que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento o por naturalización;

II.- Tener cédula de especialista en valuación expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, por la dependencia educativa competente en materia local o contar con el aval del colegio profesional al que pertenezca; o, en su caso, acreditar a través de medios fehacientes y confiables, el arte u oficio al que pertenezca el punto sobre el cual va a emitir su avalúo, siempre y cuando dicha arte u oficio no estuvieren legalmente regulados por la ley de la materia;

III.- Estar en ejercicio activo de su profesión y tener mínimo tres años de práctica profesional en la materia y especialidad de valuación, inmediatamente anteriores a la fecha de su solicitud;

IV.- Acreditar experiencia y conocimientos en la materia respectiva mediante constancia de haber aprobado los cursos de capacitación en la especialidad otorgada por alguna universidad o por una organización de profesionales de valuación nacional o extranjera que gocen de pleno reconocimiento;

V.- Tener residencia permanente efectiva en el Estado no menor de dos años inmediatamente anteriores a la fecha de su solicitud;

VI.- Preferentemente, ser miembro activo de algún colegio de valuadores, que esté legalmente constituido ante la Dirección de Profesiones e inscrito en el Registro;

VII.- Tener cédula de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y número de la Clave Única del Registro de Población (CURP);

VIII.- Presentar su currículum vitae;

IX.- Contar con constancia de capacitación mínima de un año, que avale la formación continua del interesado; y

X.- Cubrir los derechos correspondientes a la Comisión.

En caso de que los valuadores cumplan con los requisitos en esta materia, pero no cuenten con el plazo de experiencia requerido, podrán ser autorizados para desarrollar la actividad de valuación, siempre que los dictámenes sean avalados por un Valuador que cuente con este requisito y suscriba el Avalúo de forma conjunta.

Los valuadores que no tengan su residencia en el Estado, podrán registrarse una vez que acrediten cumplir con los requisitos mencionados con anterioridad, con excepción de la residencia; además podrán formar parte de alguna asociación de valuadores profesionales.

Artículo 8°.- Los registros de valuadores se sujetarán a las disposiciones específicas que determinen la presente Ley, su Reglamento, a las normas técnicas que expida el Gobernador a propuesta del Comité y, a las demás aplicables en la materia.

Artículo 9°.- El ejercicio de la valuación, como actividad profesional en el Estado, se regirá conforme a las disposiciones que establece esta Ley, la Ley de Catastro del Estado de Colima, la Ley de Profesiones y las demás leyes aplicables vigentes, así como los reglamentos y normas de carácter técnico y arancelario, debiéndose ejercer por las personas que acrediten los conocimientos, experiencia, responsabilidad profesional y estar inscritos en el Registro.

La prestación del servicio conlleva la ejecución de un trabajo honesto, profesional, competente, con remuneración justa y racional, adecuada al trabajo profesional ejecutado.

Artículo 10.- Las autoridades administrativas, estatales, municipales, judiciales y los notarios públicos, que requieran de la determinación del valor de bienes en los actos jurídicos públicos, privados y jurisdiccionales de su competencia, así como los particulares que sean partes en esos actos, solicitarán la intervención de los profesionales en valuación que cumplan los requisitos previstos en la presente Ley y demás disposiciones respectivas.

Artículo 11.- Las autoridades jurisdiccionales, las dependencias y entidades paraestatales de la administración pública del Estado, el Poder Legislativo y los municipios de la entidad; así como los notarios públicos y los corredores públicos, sólo admitirán los avalúos que emitan los valuadores profesionales debidamente inscritos en el Registro y los emitidos por las personas legalmente facultadas para ello, salvo la excepción prevista en el artículo 22 o, aquellos que sean nombrados en los términos señalados en los párrafos tercero y cuarto del artículo 345 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, cuando no exista perito o Valuador en el lugar, de acuerdo con lo previsto en sus leyes y demás disposiciones respectivas, quedando excluidos los avalúos catastrales.

CAPÍTULO III DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS VALUADORES PROFESIONALES

Artículo 12.- Son derechos de los valuadores profesionales autorizados conforme a las disposiciones de este ordenamiento:

I.- Emitir dictámenes técnicos de valor o avalúos para los fines públicos y privados que determinen las leyes, acreditándose con su número de registro estatal en la especialidad que para tales efectos se le autorizó;

II.- Ofrecer sus servicios al público previa inscripción en el Registro;

III.- Cobrar los honorarios que correspondan a sus servicios, de conformidad con las normas arancelarias que expida el Gobernador a propuesta del Comité. Para este efecto, se tomará en cuenta la propuesta de las Asociaciones de Valuadores Profesionales, del representante de los valuadores independientes ante el Comité y, así como de sus demás integrantes;

IV.- Asistir a las actividades de profesionalización y capacitación que organice la Comisión, con el fin de actualizar e incrementar sus conocimientos en el campo de la valuación;

V.- Recibir y atender la información de interés profesional que emita la Comisión;

VI.- Proponer por escrito a la Comisión, en forma particular o, en su caso, avalado por las Asociaciones de Valuadores Profesionales que los represente, las modificaciones al marco jurídico relacionado con la profesión de valuación, ante el Gobernador;

VII.- Solicitar la participación de la Comisión cuando se susciten controversias entre miembros de las Asociaciones de Valuadores Profesionales o, de éstas entre sí o, con valuadores o peritos no registrados;

VIII.- Ser auxiliado por la Comisión, en casos relacionados con el ejercicio profesional de la valuación en actos contra terceros;

IX.- Asistir a las sesiones de trabajo del Comité, en las que podrán participar con voz, pero sin voto; y

X.- Las demás que establezca la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 13.- Son obligaciones de los valuadores profesionales:

I.- Aplicar los lineamientos, métodos, técnicas y criterios para estimar el valor comercial de los bienes, de acuerdo a las prácticas reconocidas en la materia y las normas de valuación, conforme a la naturaleza y condiciones de los bienes objeto de avalúo; así como determinar los elementos y razonamientos que lo hicieron llegar a tal determinación;

II.- Acudir personalmente al predio materia del avalúo, cuando se trate de bienes inmuebles y, tratándose de los demás bienes objetos de la clasificación que se establece en el artículo 28 de esta Ley, acudir al lugar donde se encuentren y tenerlos a la vista. No se podrá emitir dictamen de valuación de ningún bien que no se tenga a la vista, salvo justificación al respecto;

III.- Establecer su oficina en el lugar de su domicilio legal registrado para el ejercicio de su profesión, debiendo anunciar su especialidad y número de registro fijando en su exterior un letrero en el que se indiquen los datos anteriores;

IV.- Abstenerse de intervenir en los asuntos en que tenga un interés directo o indirecto, así como en aquellos en que tenga interés cualquiera de sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado o, colateral dentro del cuarto grado o afín dentro del segundo; así como, en los asuntos en que tenga pública amistad o enemistad con las partes o, relación civil o mercantil entre ellas; así como de elaborar avalúos que no sean de su especialidad autorizada, salvo disposición en contrario;

V.- Solicitar cada cinco años el refrendo de su registro ante el Comité, por conducto de la Secretaría, para lo cual deberá presentar constancias de cursos de capacitación y/o actualización, con un mínimo de treinta horas anuales en cualquier especialidad de acuerdo al artículo 65 de esta Ley, avalados por una institución educativa que esté reconocida por la Comisión o por la Secretaría de Educación Pública; por organismos de reconocimiento local, nacional o internacional, así como por alguna asociación de valuadores profesionales legalmente constituida;

VI.- Facilitar a la Comisión la información que se le requiera en los términos de esta Ley y su Reglamento;

VII.- Proporcionar al Comité los datos que permitan mantener actualizado el Registro;

VIII.- Respetar las normas que regulen la actividad valuatoria;

IX.- Llevar un control de los avalúos que emita, formando el archivo físico o electrónico correspondiente para cumplir con estricto apego a lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley;

X.- Expedir avalúos que contengan el nombre, firma autógrafa o electrónica, número de cédula profesional y número de registro estatal, lugar y fecha de su elaboración, motivo del Avalúo, descripción y cálculo del mismo, resultado de la valuación y reporte fotográfico; además, deberá comunicar al solicitante la participación de algún otro Valuador o experto en algún tema específico necesario para llevar a cabo el proceso de valuación otorgándole el crédito correspondiente;

XI.- Integrar los avalúos que expida con los datos complementarios requeridos por la normatividad específica de los organismos solicitantes del servicio;

XII.- Responsabilizarse por la precisión y veracidad de los avalúos que formulen;

XIII.- Inscribirse en el Registro;

XIV.- Cobrar los honorarios correspondientes a su actividad, conforme a las normas arancelarias vigentes;

XV.- Notificar por escrito al Registro el cambio de domicilio legal en un plazo no mayor de 90 días; y

XVI.- Las demás que determinen la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 14.- La actividad del Valuador es incompatible con el servicio público cuando sean funciones hacendarias o recaudatorias de la Federación, del Estado y de los municipios; de tal manera que los servidores públicos están impedidos para emitir dictámenes técnicos de valor en tanto continúen realizando empleo, cargo o comisión en las materias señaladas en el presente artículo o exista duplicidad de intervención del propio valuador o, que la dependencia donde preste sus servicios esté vinculada directa o indirectamente al objeto de la peritación.

Artículo 15.- Los documentos emitidos por el Valuador, que contravengan el contenido del artículo anterior y de la fracción IV del numeral 13, no surtirán los efectos legales procedentes, ni deben ser reconocidos por las autoridades competentes cuando éstas tengan pleno conocimiento de ello o lo haga valer alguna de las partes una vez designado el valuador o emitido su dictamen.

Compañero Presidente le solicito al compañero Romero me sustituya en la lectura.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Dip. Romero le pedimos apoye al Dip. Tito Vázquez.

DIP. ROMERO COELLO Artículo 16.- Las instituciones de crédito o entidades públicas con facultades valuatorias y, los demás valuadores o peritos autorizados o habilitados por autoridad federal competente, podrán desempeñarse en el Estado, sin más trámites o autorizaciones adicionales que las previstas en sus respectivas leyes, para lo cual deberán exhibir la autorización o habilitación e inscribirla en el Registro, a efecto de que le sean reconocidos sus dictámenes técnicos de valor por las autoridades del Estado y de los municipios.

Artículo 17.- Los valuadores profesionales registrados conforme a esta Ley y los peritos señalados en el artículo anterior, cuando sus avalúos tengan referencias locales, quedarán sujetos a la Comisión de Inspección, a la cual deberán proporcionar la información y documentación que les sea requerida en ejercicio de dichas facultades.

Artículo 18.- Los valuadores profesionales y los peritos mencionados en el artículo 16, que emitan dictámenes de valor para efectos catastrales, deberán sujetarse a las disposiciones de la materia que corresponda. El valuador no debe utilizar o revelar total o parcialmente el informe de valuación y de la documentación soporte sin el consentimiento escrito del solicitante o propietario del bien valuado, a excepción de que sea requerido por autoridad competente o la Comisión.

CAPÍTULO IV DE LA VALUACIÓN Y LOS AVALÚOS

Artículo 19.- La valuación, como actividad profesional en el Estado, se regirá conforme a las disposiciones de esta Ley y su Reglamento.

Artículo 20.- Los avalúos deberán realizarse conforme a los lineamientos, métodos, criterios, técnicas autorizadas y, de acuerdo a las disposiciones de esta Ley y su Reglamento, así como a la Norma Mexicana de Valuación.

Artículo 21.- Los avalúos deberán contener la documentación e información que se utilizó para realizar la valuación y, en su caso, mencionar los documentos que los soportan conforme se establezca en la presente Ley y en las normas técnicas, que al efecto se expidan en el Reglamento de esta Ley.

Artículo 22.- Los avalúos que se expidan sin observar lo que establece esta Ley y su Reglamento, únicamente tendrán el carácter de una opinión particular de quien lo emita, sin que tenga validez para utilizarse en actos jurídicos de los que se deriven obligaciones de naturaleza pública o privada. Excepción hecha, cuando sea parte el Estado o los municipios o, se requiera el dictamen de valuación para la aplicación de una sanción a particulares de parte de las autoridades, administrativa o judicial; o el alcance que les proporcione el juzgador en los procesos jurisdiccionales.

Artículo 23.- El valuador que emite el avalúo es responsable del cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley; debiendo incluir en el mismo su nombre completo, títulos, registros y acreditaciones vigentes correspondientes y firma autógrafa o electrónica certificada.

Artículo 24.- La valuación de bienes que se requieran en los términos de las leyes locales para celebrar actos jurídicos públicos o privados; para dar cumplimiento a obligaciones fiscales y administrativas; para determinar el valor de un bien mueble o inmueble; en todo acto procesal, en los tribunales civiles, penales, laborales o administrativos del Estado; así como en el acto de registrar obligaciones contraídas, en el que se deba precisar el valor de los bienes inmuebles que responderán como garantía de gravamen pactado, serán realizados por los valuadores que consten inscritos en el Registro, salvo excepción prevista en el artículo 22 de esta Ley.

Artículo 25.- El valor de los bienes deberá estimarse a la fecha de su emisión o referido a una fecha determinada, cuando así se requiera según sea el caso en particular.

Artículo 26.- Los avalúos que se expidan conforme a las disposiciones de esta Ley, tendrán vigencia por seis meses, contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción por parte del interesado. Para efectos de la vigencia de los avalúos, se deberá tomar en cuenta las posibles variaciones inflacionarias de un más menos 5% sobre el valor comercial del bien.

La valuación comercial se efectuará conforme a las disposiciones de esta Ley o su Reglamento, así como los lineamientos, métodos, técnicas y criterios autorizados por la Comisión o, en su caso, el de otras leyes aplicables.

Artículo 27.- Cuando en una controversia jurisdiccional o administrativa se requiera valorar bienes de diversa naturaleza, no será necesario nombrar valuador de cada especialidad. En ese caso, las partes y la autoridad que conozca del asunto, podrán nombrar a cualquiera de los mencionados en el artículo 65 de la presente Ley; sin embargo, el que dictamine deberá asistirse de aquellos que estén relacionados con las especialidades que correspondan a los bienes valuados, mencionando esta circunstancia en el documento, citando su nombre y especialidad. Los valuadores que coadyuven en ese dictamen, deberán tener vigente su registro en los términos de este ordenamiento.

Artículo 28.- La determinación de los valores tendrá las siguientes modalidades de valuación de:

I.- Bienes inmuebles;

II.- Bienes muebles;

III.- Maquinaria y equipo;

IV.- Industrial;

V.- Actividades extractivas;

VI.- Bienes agropecuarios;

VII.- Obras de arte;

VIII.- Joyas;

IX.- Comercial;

X.- Valuación de bienes intangibles; y

XI.- Otras modalidades que determine el Reglamento de esta Ley.

Artículo 29.- Para ser valuator en la modalidad general de valuación de bienes inmuebles a que se refiere la fracción I del artículo anterior, se requerirá tener título profesional a nivel de licenciatura, en el área de arquitectura, ingeniería o carreras afines, así como cédula profesional de especialidad o maestría en valuación inmobiliaria, otorgados por la Dirección de Profesiones e inscribirse en el Registro.

Artículo 30.- El Gobernador expedirá el Reglamento de esta Ley, a propuesta de la Comisión, en el cual se precisarán:

I.- Los elementos de las modalidades que deberán contener los antecedentes específicos y generales de los avalúos, en la determinación de valores de bienes;

II.- La formulación de lineamientos generales y específicos que contengan las normas técnicas, las cuales deberán observar los valuadores profesionales al realizar sus avalúos;

III.- Las especialidades en la determinación de valores de bienes;

IV.- Las condiciones y requisitos que deberán acreditar las personas que realicen la actividad profesional de valuador profesional, en las distintas modalidades de avalúos y conforme a la especialidad que atiendan;

V.- Los procedimientos para obtener y conservar el registro como perito valuador, conforme a la modalidad y especialidad correspondiente; y

VI.- Las demás que se consideren pertinentes y necesarias para el cumplimiento de la actividad.

Artículo 31.- Sólo se exceptúan de lo previsto en los artículos que anteceden:

I.- Los actos relativos a bienes nacionales; y

II.- Los casos en que la legislación federal y la estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias, faculte a persona determinada y establezca otro procedimiento para determinar el valor de los bienes.

Artículo 32.- Para expedir los dictámenes de valor, el Comité determinará los criterios y lineamientos básicos correspondientes según los bienes y modalidades de la valuación, mismos que tendrán el carácter de obligatorios.

CAPÍTULO V DE LAS ASOCIACIONES DE VALUADORES PROFESIONALES

Artículo 33.- Las Asociaciones de Valuadores Profesionales se integrarán, en el caso de las asociaciones de profesionistas conforme a lo dispuesto por el Título Décimo Primero del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima y, para el caso de los colegios, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Profesiones, por lo que tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 34.- Para los efectos de esta Ley, las Asociaciones de Valuadores Profesionales, deberán cumplir con los siguientes requisitos para obtener su inscripción en el Registro:

I.- Tener un mínimo de 10 socios para el caso de las asociaciones de profesionistas y de 25 en el caso de los colegios; debiendo, en ambos casos, cumplir sus integrantes con los requisitos establecidos por el artículo 7º de la presente Ley;

II.- Presentar a la Comisión, para el caso de las asociaciones de profesionistas, el acta constitutiva y, para el caso de los colegios, el registro que al efecto haya emitido la Dirección de Profesiones; y

III.- Contar como mínimo con tres reuniones debidamente documentadas, en el que asistan el total de los socios mencionados en la fracción I al momento de solicitar su registro ante la Comisión.

Artículo 35.- Las Asociaciones de Valuadores Profesionales tendrán como fines específicos los siguientes:

I.- Agrupar y relacionar a los valuadores para hacer posible el mejor desempeño de su actividad profesional;

II.- Promover el mejoramiento profesional de sus asociados y, en general, de los servicios de valuación en el Estado;

III.- Participar en la formulación de reglas de desempeño profesional, que permitan eficientar el trabajo de los valuadores en las actividades relacionadas con su especialidad, aportando sus opiniones y comentarios;

IV.- Promover la capacitación profesional de los valuadores;

V.- Participar con la Comisión, organismos públicos y privados en la solución de los problemas de valuación de carácter social; así como en los casos de desastre natural que ocurran en la entidad, cuando sean convocados por la autoridad competente;

VI.- Coadyuvar con las autoridades en asuntos relativos a la valuación de bienes;

VII.- Desarrollar programas de investigación constituyendo bases de datos, para apoyar a sus miembros en el ejercicio profesional; y

VIII.- Los demás fines que les señale la presente Ley, su Reglamento y las demás disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 36.- Las Asociaciones de Valuadores Profesionales que se integren de acuerdo con el artículo 33 de esta Ley, tendrán los siguientes derechos y obligaciones:

I.- Vigilar el cumplimiento de esta Ley, su Reglamento y las normas éticas, técnicas y arancelarias que regulen la actividad profesional del Valuador;

II.- Representar a sus asociados en forma individual o colectiva, ante la Comisión y otras instancias públicas;

III.- Proponer ante el Comité, la adopción o modificación de métodos, normas y técnicas de valuación;

IV.- Remitir a la Comisión anualmente, a más tardar en la segunda quincena del mes de febrero, el padrón actualizado de la membresía de valuadores;

V.- Proporcionar a la Comisión en un plazo no mayor de 30 días, la relación de los asociados de nuevo ingreso, así como la de los que hayan causado baja, señalando además el motivo de la misma;

VI.- Celebrar actos, contratos, convenios y operaciones de cualquier naturaleza que sean necesarios para cumplir con sus fines; y

VII.- Los demás que establezca esta Ley y su Reglamento.

CAPÍTULO VI DE LA COMISIÓN DE VALUACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA

SECCIÓN I DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 37.- La Comisión, es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Artículo 38.- La estructura orgánica de la Comisión, se integrará por:

I.- El Comité, que será el Órgano de Dirección y Administración;

II.- La Comisión de Inspección, que será el Órgano de Revisión y Control; y

III.- Las unidades técnicas y de personal administrativo, las cuales se establecerán en su Reglamento.

Artículo 39.- La Comisión tiene por objeto:

I.- Fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y regulación de la actividad de valuación, en cualquiera de sus modalidades en el Estado, en los términos de las leyes federales;

II.- Generar y aplicar lineamientos para que la valuación en el Estado cumpla con los requisitos de equidad y justicia, de acuerdo con las disposiciones normativas;

III.- Proponer al Gobernador, los métodos, criterios y técnicas de valuación de acuerdo a la naturaleza y condiciones de los bienes a valorar;

IV.- Unificar, expedir y revisar las normas que regirán la actividad y desempeño de la profesión de valuación, mismas que deberán respetar los valuadores en lo individual así como las Asociaciones de Valuadores Profesionales que se integren;

V.- Ser la autoridad en el Estado en materia de control y vigilancia de la valuación en cualquiera de los rubros o modalidades;

VI.- Establecer el interés público de las actividades profesionales de la valuación, en relación a los requerimientos del Estado, los municipios y los particulares, a efecto de que se cuente con dictámenes técnicos que establezcan el valor de los bienes muebles e inmuebles en forma fehaciente y autorizada, para fines administrativos y judiciales;

VII.- Formar, conservar y operar el Registro;

VIII.- Coordinar las acciones de capacitación en materia de valuación, tendientes a obtener el refrendo del registro como valuador profesional;

IX.- Promover, vigilar el mejor desempeño y el ejercicio profesional de los valuadores en la entidad;

X.- Formar un banco de datos sobre valores de bienes del Estado;

XI.- Coordinarse con la Dirección de Profesiones, con la Dirección de Catastro de Gobierno del Estado y, con el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en la entidad, respecto a los datos que obren en sus registros;

XII.- Establecer contacto permanente con organizaciones similares de otras entidades federativas;

XIII.- Promover la investigación, capacitación y los estudios en materia de valuación;

XIV.- Determinar y aplicar, a través de la Comisión de Inspección, las sanciones a los peritos valuadores que hayan infringido las normas; y

XV.- Ejercer las demás facultades y atribuciones que le señale esta Ley y su Reglamento.

Artículo 40.- Para el cumplimiento de sus fines, la Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Coordinar los trabajos técnicos y de investigación científica relacionados con sus funciones;

II.- Celebrar acuerdos y convenios de coordinación o colaboración, respecto a los servicios que presten personas físicas o jurídicas, relacionados con sus funciones;

III.- Celebrar acuerdos y convenios de coordinación o colaboración con las dependencias e instituciones públicas y privadas que desarrollen actividades relacionadas con sus funciones;

IV.- Vigilar el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento;

V.- Establecer políticas en materia de valuación y proponer los procedimientos, lineamientos, métodos, criterios y técnicas, a que deberán sujetarse los valuadores al efectuar el avalúo;

VI.- Coadyuvar con el Gobernador en la elaboración de propuestas de reforma, adición o derogación de esta Ley y su Reglamento;

VII.- Vigilar y supervisar el ejercicio profesional de los valuadores autorizados por esta Ley;

VIII.- Solicitar a los valuadores la información adicional de un avalúo en particular, que requiera resolver una situación en controversia;

IX.- Emitir opinión cuando lo soliciten por escrito los interesados, en las reclamaciones que se deriven de los avalúos emitidos por los valuadores; y

X.- Las demás que determinen esta Ley y su Reglamento.

SECCIÓN II DEL COMITÉ EJECUTIVO

Artículo 41.- El Comité estará integrado por:

I.- Un Presidente, que será el Gobernador;

II.- Un Vicepresidente, que será el Secretario General de Gobierno;

III.- Un Secretario Técnico, que será el Director General del Instituto del Registro Territorial y que tendrá a su cargo el Registro;

IV.- Un vocal por cada una de las siguientes entidades y dependencias:

a).- El Supremo Tribunal de Justicia del Estado;

b).- El H. Congreso del Estado;

c).- La Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado; y

d).- La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

V.- Los municipios del Estado, que estarán representados por dos ayuntamientos, uno por cada distrito electoral Federal existente en la entidad, nombrados por la mayoría de los mismos, quienes tendrán el carácter de vocales;

VI.- Dos representantes por cada una de las Asociaciones de Valuadores Profesionales constituidas en la entidad, a propuesta de sus integrantes, quienes tendrán el carácter de vocales. El número de integrantes de cada asociación de valuadores profesionales se acreditará conforme a los datos del registro a que se refieren los capítulos II y V de esta Ley; y

VII.- Un representante de los valuadores independientes de la entidad con registro vigente, a propuesta de cuando menos tres de estos últimos, quienes tendrán el carácter de vocales.

Artículo 42.- Cada uno de los integrantes del Comité podrá nombrar a su respectivo suplente, con excepción del Presidente, quien será suplido en sus ausencias por el Vicepresidente o, en ausencia de éste, por un representante, quienes tendrán todas las facultades asignadas a él, incluyendo el voto de calidad en caso de empate.

Artículo 43.- Cuando los suplentes deban asistir a las sesiones y no lo hagan por causas no justificadas, se notificará por escrito a los titulares para que nombren a otra persona que los sustituya.

Artículo 44.- Los vocales señalados en las fracciones IV, V, VI y VII del artículo 41, que sin causa justificada no asistan a tres sesiones del Comité, dentro del mismo año, serán dados de baja de este organismo y, deberá de quedar vacante la representación de que se trate por el término de seis meses.

Artículo 45.- El Presidente del Comité, por sí o a propuesta de sus integrantes, podrá convocar a las sesiones del Comité e invitar a funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno

Artículo 46.- Son atribuciones del Comité:

Diputado Presidente le pido le solicite al Dip. Germán Virgen continúe con la lectura.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Instruimos al Dip. Germán Virgen le de lectura al dictamen correspondiente hasta concluirlo.

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Artículo 46.- Son atribuciones del Comité

I.- Representar legalmente a la Comisión, por si o por conducto de quien se nombre;

II.- Vigilar el cumplimiento de esta Ley, su Reglamento y las normas éticas, técnicas y arancelarias que se expidan;

III.- Examinar las solicitudes de registro de quienes aspiren a ejercer la profesión de valuadores profesionales, formulando por escrito la resolución correspondiente, debiendo aprobar aquéllos que cumplan con los requisitos que establece el artículo 7° de la presente Ley, así como su refrendo correspondiente; en caso de negativa deberá ésta fundarse y motivarse. Así mismo, en caso de controversia se estará a lo que dispone la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios;

IV.- Designar a la persona encargada para que elabore y actualice la base de datos del Registro;

V.- Proponer las reformas y modificaciones al marco jurídico, orientados al mejoramiento del servicio en materia de valuación, para proveer el cumplimiento de esta Ley y el establecimiento de los criterios generales de valuación;

VI.- Formular al Gobernador, las normas técnicas y arancelarias que atenderán los valuadores profesionales, para el cobro de los honorarios que correspondan a sus servicios;

VII.- Revisar, armonizar y simplificar las normas que rigen la actividad y desempeño de la profesión de la valuación, para facilitar su cumplimiento;

VIII.- Aprobar a propuesta del área de especialización, los métodos, criterios y técnicas de valuación de acuerdo a la naturaleza y condiciones de los bienes a valorar;

IX.- Establecer y modificar los criterios y lineamientos básicos para emitir los dictámenes técnicos de valor de las modalidades generales y específicas;

X.- Vigilar a través de la Comisión de Inspección, que los avalúos se realicen conforme a los métodos, criterios, técnicas y formatos de valuación autorizados, para lo cual, podrá solicitar a los valuadores profesionales información adicional en relación con algún avalúo en particular;

XI.- En el caso de la fracción VII del artículo 41, cuando los valuadores independientes con registro vigente no elijan de entre ellos a su representante ante el Comité, éste los exhortará para que un término de cinco días hábiles procedan a nombrarlo; de no ser así, el propio Comité lo nombrará en su defecto;

XII.- Establecer los contenidos mínimos de los cursos de capacitación, que tengan por objeto cumplir los requisitos establecidos en esta Ley;

XIII.- Promover, coordinar acciones y programas de capacitación y actualización dirigidos a los valuadores del Estado y, avalar aquellos que impartan las asociaciones de valuadores, las instituciones de educación superior y otros organismos;

XIV.- Proponer al Gobernador, la tarifa de los derechos que deban pagarse por concepto del estudio y tramitación de cada solicitud de registro de Valuador en sus distintas modalidades y especialidades o, renovación del mismo;

XV.- Desempeñar las funciones consultivas que se acuerden en el pleno del Comité;

XVI.- Participar, cuando así se lo soliciten por escrito los interesados, en las reclamaciones que se deriven de los dictámenes de valor o avalúos, que presenten los solicitantes y autoridades;

Presidente, le pido, le solicite al Dip. Milton le de continuidad.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Dip. Milton le pedimos apoye por su discapacidad motriz al Dip. Germán

DIP. DE ALVA GUTIERREZ. XVII.- Aprobar los estudios y dictámenes que deberán presentar sus órganos técnicos y unidades administrativas en el plazo que se les encomienda;

XVIII.- Expedir su reglamento interno;

XIX.- Expedir y revisar las normas éticas que regirán la actividad de la valuación, en los términos de la presente Ley y su Reglamento, las que deberán respetar los valuadores en lo individual, así como las Asociaciones de Valuadores Profesionales que se integren;

XX.- Revisar, unificar y simplificar las normas que regirán la actividad y desempeño de la valuación profesional, las que deberán de acatar los valuadores profesionales, en lo individual, así como, los institutos, Asociaciones de Valuadores Profesionales que los integren; y

XXI.- Las demás que determine la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 47.- El Presidente del Comité tendrá las siguientes facultades:

I.- Convocar a sesiones ordinarias u extraordinarias, presidirlas, dirigirlas y conceder el uso de la palabra, atribuciones que podrá delegar a su representante;

II.- Dar curso a los asuntos conforme al orden del día aprobado y firmar junto con el Secretario Técnico del Comité, las resoluciones o acuerdos que se adopten;

III.- Vigilar el cumplimiento de los acuerdos;

IV.- Mantener contacto permanente con el Secretario Técnico del Comité en el cumplimiento de sus funciones;

V.- Invitar a funcionarios federales, estatales, legisladores locales o funcionarios municipales, especialistas en la materia, a los representantes de instituciones educativas, académicas y otros cuando por los asuntos que se vayan a abordar, se considere pertinente su presencia en alguna de las sesiones;

VI.- Recibir las propuestas que formulen los integrantes del Comité y que sean aprobadas en cumplimiento de sus objetivos previstos en esta Ley;

VII.- Participar en las sesiones con voz y voto; teniendo a su cargo el voto de calidad en caso de empate;

XXII.- Sustanciar y resolver los recursos de revisión que se interpongan; y

VIII.- Las demás que se deriven de la naturaleza de la función que tiene encargada y que le señale el Reglamento de esta Ley.

Artículo 48.- El Gobernador se podrá auxiliar para los efectos de la administración, control y manejo del Registro, con el Secretario Técnico del Comité.

Artículo 49.- El Vicepresidente tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Acudir a las sesiones de la Comisión, en el día y hora que sean citados para tal efecto;

II.- Emitir sus opiniones sin que sean reconvenidos, siempre y cuando dialoguen sobre el asunto a tratar o tratado en el seno de la Comisión;

III.- Someter a la Comisión para su conocimiento, cualquier asunto que pueda surgir y pueda ocasionar alguna controversia o preocupación en el desarrollo de la actividad de la valuación en la entidad;

IV.- Participar en las sesiones con voz y voto, incluyendo el voto de calidad, en ausencia del Presidente, en caso de empate; y

V.- Las demás que se establecen en la presente Ley y su Reglamento, cuando actúe en sustitución del Presidente.

Artículo 50.- El Secretario Técnico del Comité tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones:

I.- Notificar oportunamente a los integrantes e invitados del Comité, la convocatoria de las sesiones, misma que deberá acompañarse del orden del día y documentación correspondiente;

II.- Auxiliar al Presidente del Comité, en la vigilancia del cumplimiento de las resoluciones y acuerdos que se adopten en el seno del propio Comité;

III.- Preparar y presentar los informes sobre los avances y resultados de las actividades, resoluciones y acuerdos que se tomen en el Comité;

IV.- Cumplir con las instrucciones que le formule el Comité o su Presidente;

V.- Elaborar las actas de las sesiones, consignando en ellas de manera específica las resoluciones o acuerdos que se hubiesen adoptado;

VI.- Participar en las sesiones con voz y voto; y

VII.- Las demás que se deriven de la naturaleza de la función que tiene encargada y que le señale el Reglamento de esta Ley.

Artículo 51.- Los vocales tendrán las siguientes atribuciones:

I.- Acudir a las sesiones en el día y hora que sean citados para tal efecto;

II.- Emitir sus opiniones, las que invariablemente serán sobre el asunto a tratar o tratado en el seno del Comité, salvo permiso de éste para abordar otro tema;

III.- Someter al Comité para su conocimiento, cualquier asunto que pueda surgir y pueda ocasionar algún problema o controversia en el desarrollo de la actividad de la valuación en la entidad; y

IV.- Participar en las sesiones con voz y voto.

Artículo 52.- El Comité se reunirá en sesión ordinaria cuando menos cada dos meses, para tal efecto se establecerá un calendario de sesiones que observarán el Presidente y el Secretario Técnico del mismo. También se podrá reunir en cualquier tiempo de manera extraordinaria, siempre y cuando el Presidente, por sí o a propuesta de la mayoría de sus miembros, así lo acuerden cuando el asunto o asuntos a tratar lo ameriten.

Artículo 53.- El Comité sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes y sus acuerdos serán tomados por mayoría simple.

Artículo 54.- Las convocatorias de las sesiones del Comité, se harán por escrito y señalarán el tipo de sesión, fecha, hora y lugar de su realización las cuales deberán notificarse a todos sus integrantes; en caso de sesiones ordinarias, deberá notificarse con cinco días hábiles antes de la reunión y tratándose de sesiones extraordinarias, con dos días hábiles de anticipación como mínimo a su celebración.

Artículo 55.- De cada sesión el Secretario Técnico del Comité levantará el acta respectiva, la cual deberá contener como mínimo lo siguiente:

I.- El lugar, día y hora en la que se celebre la sesión;

II.- Lista de asistencia y certificación del quórum legal;

III.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior;

IV.- Orden del día;

V.- Síntesis de intervenciones de los participantes en el desahogo de los puntos del orden del día; y

VI.- Acuerdos de la sesión.

SECCIÓN III

DE LA COMISIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Artículo 56.- La Comisión de Inspección, es el órgano de revisión y control de la Comisión, que tiene por objeto:

I.- Vigilar que los valuadores y Asociaciones de Valuadores Profesionales registrados, den cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, su Reglamento, así como las normas éticas, técnicas y arancelarias que para la materia se expidan;

II.- Supervisar que los avalúos que se emitan, cumplan con los requisitos y formalidades establecidos en los formatos autorizados por la Comisión;

III.- Solicitar información y documentación adicional a los valuadores y Asociaciones de Valuadores Profesionales, respecto del ejercicio de sus actividades de valuación;

IV.- Recibir las quejas y denuncias contra los valuadores o Asociaciones de Valuadores Profesionales autorizados;

V.- Amonestar y sancionar a los valuadores que incumplan o infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Ley, su Reglamento y demás ordenamientos relacionados con la materia;

VI.- Remitir a la Comisión las resoluciones que se dicten para suspender y, en su caso, cancelar la habilitación del registro como valuador profesional autorizado, a efecto de que ésta lo omita en el directorio de valuadores inscritos en el registro;

VII.- Presentar denuncia ante el ministerio público, por los probables delitos en que hubieren incurrido los valuadores en ejercicio de sus funciones;

VIII.- Informar a la Comisión de las amonestaciones y sanciones cuando la misma se los solicite, para los efectos de resolución de los recursos administrativos que se prevén en esta Ley;

IX.- Nombrar a la persona que deberá notificar a los interesados de las amonestaciones, sanciones y cancelaciones de registro, en su caso, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; y

X.- Las demás que le confiera esta Ley y su Reglamento.

Artículo 57.- La Comisión de Inspección se integrará:

I.- Por un representante que nombre el Gobernador;

II.- Por quien nombre el Secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado;

III.- Por los Presidentes de las Asociaciones de Valuadores Profesionales que estén constituidos en la entidad; y

IV.- Por quien represente a los valuadores independientes ante el Comité.

SECCIÓN IV DEL REGISTRO ESTATAL DE VALUADORES PROFESIONALES

Artículo 58.- Se establece el Registro, como un medio de consulta pública y control del ejercicio de la valuación como actividad profesional en el Estado, que estará a cargo del Gobernador a través de la Secretaría.

Artículo 59.- Para ejercer la actividad de valuación en el Estado, los interesados deberán inscribirse en el Registro, presentando su solicitud por escrito ante el Presidente del Comité, por conducto de la Secretaría, anexando a ésta los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 7° de la presente Ley.

Artículo 60.- La Secretaría recibirá la solicitud acompañada de los documentos a que se refiere el artículo anterior, debiendo turnarlos de inmediato a la Comisión para su análisis y revisión a fin de determinar si el solicitante cumple con los requisitos señalados por esta Ley.

Artículo 61.- En caso de que algún requisito quede sin satisfacer, el Secretario General de Gobierno, se lo hará saber al interesado, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para cubrirlo, contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento respectivo; apercibiéndolo que de no satisfacerlo en el plazo señalado, será desechada su solicitud.

Artículo 62.- La Comisión, examinará la solicitud y documentos anexos y emitirá su dictamen de resolución, el que enviará a la Secretaría para que esta resuelva en definitiva lo procedente. Si la resolución es de no aprobación, por falta de algún requisito, se reenviará a la Comisión de Inspección, con las observaciones pertinentes y una vez que se subsanen, se remitirá a la Secretaría para que se pronuncie nuevamente y, de negarse, prevalecerá como firme su resolución.

Artículo 63.- En caso de que el Presidente del Comité, por conducto de la Secretaría, conceda la inscripción en un plazo que no exceda de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que la Comisión le haya turnado su dictamen de resolución, la asentará en el Registro y procederá a expedir a favor del interesado la autorización correspondiente, asignándole su número de registro respectivo, para que pueda ejercer la actividad de valuación profesional en el Estado, en la especialidad que haya acreditado de acuerdo a la clasificación establecida en el artículo 28 de esta Ley.

Artículo 64.- En caso de que se niegue el Registro, deberá notificarse por escrito al solicitante, fundando y motivando debidamente las causas de tal resolución, la que podrá ser impugnada en los términos señalados en esta Ley.

Artículo 65.- La autorización del Registro que le otorgue el Presidente del Comité, al valuador profesional, será de acuerdo a la especialidad y naturaleza de los bienes a valuar, conforme lo señalado por el artículo 28 de esta Ley.

Para el caso de los valuadores en obras de arte, en joyas y en especialidades específicas, únicamente deberán de cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones I, III, V, VI y VII del artículo 7º de esta Ley, para poder obtener su registro, debiendo acreditar conocimientos de su especialidad.

En el Reglamento de la presente Ley, se deberá detallar el ámbito de acción de cada uno de los valuadores.

Artículo 66.- En caso de que no existan peritos de alguna de las especialidades a que hace mención el artículo anterior, se procederá en los términos de los tercero y cuarto párrafos del artículo 345 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima.

Artículo 67.- El Gobernador, por conducto de la Secretaría, expedirá cada cinco años a todos los valuadores profesionales inscritos en el Registro, una credencial oficial que los acredite como tal, la que deberá contener los datos y registros que se especifiquen en el Reglamento de esta Ley.

Artículo 68.- Los valuadores profesionales a quienes se les haya otorgado su registro, sólo podrán ser privados del mismo cuando hayan sido sancionados en términos de las disposiciones de esta Ley, su Reglamento, las establecidas en la Ley de Profesiones, así como en otros ordenamientos que hagan referencia al respecto.

Dentro de los treinta días naturales anteriores a la fecha en que expire la vigencia del registro de los valuadores profesionales, éstos deberán tramitar el refrendo ante la Secretaría.

Artículo 69.- Las Asociaciones de Valuadores Profesionales, deberán acreditar su inscripción expedida por la Dirección de Profesiones ante la Comisión y, sus integrantes se sujetarán al cumplimiento de los requisitos establecidos en este Capítulo y en el artículo 7º de la presente Ley.

Artículo 70.- El registro del valuador deberá ser refrendado cada cinco años, conforme al procedimiento que determine el Reglamento de esta Ley. Para hacerlo, el valuador profesional deberá presentar solicitud por escrito ante el Comité, por conducto de la Secretaría, acompañada de los documentos que acrediten los siguientes datos:

I.- Estar en el ejercicio profesional de valuador y que contengan los requisitos señalados en el artículo 7° de esta Ley; y

II.- Su actualización profesional, avalada por alguna asociación de valuadores profesionales legalmente constituida o por una institución educativa que esté reconocida por la Comisión, por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.

Artículo 71.- En el mes de enero de cada año, el Gobernador publicará en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el Padrón de Valuadores Profesionales en la entidad inscritos en el Registro, expresando sus nombres, direcciones, número de registro, especialidad y datos profesionales.

SECCIÓN V DEL PATRIMONIO DE LA COMISIÓN

Artículo 72.- El patrimonio de la Comisión se formará con:

I.- Los bienes muebles, inmuebles y derechos de uso y aprovechamiento que el Gobierno Estatal le asigne o adquiera mediante cualquier figura jurídica;

II.- Con los ingresos propios o derechos que obtengan de conformidad con las disposiciones de la materia;

III.- Las aportaciones económicas que expidan los integrantes del Comité;

IV.- Las donaciones, legados o herencias que hagan a favor del Comité; y

V.- Todos los demás bienes o derechos que perciba el Comité a su favor de forma lícita.

Artículo 73.- Los bienes muebles e inmuebles de la Comisión gozarán de las prerrogativas concedidas respecto de los fondos y bienes de Gobierno del Estado. Dichos bienes, así como los actos y contratos que celebre la Comisión en cumplimiento de su objeto, estarán igualmente exentos de toda clase de contribuciones, impuestos y derechos del Estado.

CAPÍTULO VII DE LAS SANCIONES

Artículo 74.- Todo acto u omisión de los valuadores profesionales que contravenga lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento, será sancionado por la Comisión de Inspección, previo procedimiento que se establecerá en su Reglamento dando preeminencia al derecho de audiencia y defensa al valuator, señalado como probable infractor.

Artículo 75.- Cuando se determine el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente Ley, en su Reglamento, o de otros ordenamientos legales y administrativos aplicables a la actividad valuatoria, la Comisión de Inspección podrá aplicar al valuator, las sanciones establecidas en el presente capítulo, de acuerdo a la gravedad de la falta o faltas cometidas.

Artículo 76.- Procederá la amonestación por escrito, cuando:

I.- En la revisión de los avalúos se determine que los datos no corresponden a la realidad o, los valores asentados fluctúen en mayor rango que el determinado por el Reglamento y las normas técnicas aplicables;

II.- Se conozca que realiza publicidad que no corresponda a su especialidad, de manera que induzca o pueda inducir al error respecto de los servicios que presta;

III.- Por no realizar los avalúos en los términos de las fracciones II y IV del numeral 13 de la presente Ley; y

IV.- Por no dar aviso de cambio de domicilio legal de acuerdo a la fracción XV del artículo 13 de la presente Ley.

Artículo 77.- Procederá la sanción con suspensión del registro del valuator, mínimo de tres y máximo de seis meses por:

I.- Reincidir en alguna de las causas señaladas en el artículo anterior; y

II.- Violentar el contenido de la fracción III del artículo 13 de este ordenamiento.

Artículo 78.- Procederá la cancelación del registro, por:

I.- Renuncia;

II.- Por reincidir en alguno de los supuestos señalados en las fracciones I, II y III del artículo 76 y fracciones II y III del numeral 77;

III.- Haber obtenido inscripción en el Registro proporcionando documentación y datos falsos;

IV.- Revelar dolosamente o sin causa justificada datos del peritaje;

V.- Negarse a prestar sus servicios sin causa justificada, cuando la autoridad lo solicite en caso de desastre natural;

VI.- Violaciones reiteradas a las normas técnicas, vigentes a la fecha de referencia del documento sobre la práctica y formulaciones de los dictámenes de valor que causen perjuicio a alguna de las partes;

VII.- Actuar con parcialidad en la elaboración del avalúo o lo emita con dolo o mala fe manifestando un valor simulado o notoriamente inferior o mayor al valor real comercial del objeto o que contenga certificaciones, datos o apreciaciones falsas;

VIII.- Haber otorgado responsiva en algún avalúo que no ha formulado personalmente;

IX.- Haber formulado un avalúo estando inhabilitado para ello por decisión judicial;

X.- Dejar de cumplir en forma definitiva con alguno de los requisitos que la presente Ley prevea para la obtención de su inscripción en el Registro;

XI.- Cuando habiendo sido suspendido temporalmente el registro, el valuador reincida en la violación de cualquier disposición del presente ordenamiento; y

XII.- Por ser condenado por delito intencional relacionado con las funciones de valuador profesional, mediante sentencia ejecutoria que a juicio de la Comisión amerite la cancelación del registro. La Comisión de Inspección, podrá presentar denuncia ante el ministerio público por los delitos cometidos por valuadores profesionales, en el ejercicio de su profesión.

Artículo 79.- En caso de omisión del refrendo correspondiente la suspensión del registro operará hasta que el valuador obtenga dicho refrendo, debiendo cubrir en este caso, además de la cuota correspondiente, el porcentaje adicional que establezca la Ley de Hacienda del Estado.

Artículo 80.- Para aplicar las sanciones la Comisión de Inspección, escuchará previamente al valuator señalado como responsable de alguna violación a esta Ley aplicando para tal efecto, lo señalado en la presente normatividad y su Reglamento.

CAPÍTULO VIII DE LOS RECURSOS

Artículo 81.- Contra los actos o resoluciones emitidos por la Comisión de Inspección que impongan sanciones que los evaluadores profesionales estimen indebidamente fundadas y motivadas, procederá el Recurso de Revisión ante el Presidente del Comité por conducto de la Secretaría debiéndose estar a lo que dispone esta Ley.

Será optativo para el valuator agotar el Recurso de Revisión o promover el juicio correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.

Artículo 82.- El valuator profesional podrá interponer el Recurso de Revisión dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado la resolución que le imponga la sanción.

Artículo 83.- Una vez recibido el Recurso de Revisión por el Presidente del Comité, este verificará si fue interpuesto en tiempo y forma, pronunciándose al respecto si se admite o lo desecha. Si el recurso se admite, el Presidente del Comité, por conducto de la Secretaría calificará las pruebas que el recurrente haya ofrecido y dictará en su caso, un acuerdo dentro del término de cinco días contados a partir de la recepción del recurso, en el que fijará la fecha en que deberá presentarse al recurrente para la audiencia de desahogo de las pruebas que se hayan admitido como procedentes.

Contra el acuerdo que deseche las pruebas por considerarlas improcedentes, no existirá recurso alguno.

Artículo 84.- El término para la celebración de la audiencia de desahogo de las pruebas, deberá fijarse dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de recepción del recurso; desahogadas las mismas o si no las hubiere, el Presidente del Comité, resolverá el recurso dentro de los siguientes 10 días hábiles a la fecha de la audiencia de pruebas, debiendo notificar su resolución por escrito al recurrente en el domicilio que éste hubiere señalado para las respectivas notificaciones dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de su resolución.

La resolución que dicte el Presidente del Comité sobre el Recurso de Revisión, será inapelable.

Artículo 85.- El escrito de interposición del Recurso de Revisión que se presente ante el Presidente del Comité, deberá contener los siguientes datos:

I.- Nombre, domicilio del recurrente, de su abogado defensor o representante y de la persona que autorice para oír y recibir notificaciones;

II.- Número asignado en el Registro como Valuador;

III.- La autoridad competente a quien se dirige;

IV.- El acto que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del mismo;

V.- Citar la fecha y número de oficio en el documento en que conste la resolución impugnada;

VI.- Exponer en forma sucinta los hechos que motivaron el recurso, y el acto que se recurre;

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Gracias Diputado y le solicitamos al Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes le de conclusión a la lectura por favor.

DIP. VAZQUEZ MONTES. VII.- Los agravios que le causan el acto o resolución impugnada;

VIII.- El señalamiento de las pruebas que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con cada uno de los puntos controvertidos de la resolución o acto impugnado; y

IX.- Exponer los fundamentos legales en que se apoye el recurso.

Artículo 86.- Si faltare alguno de los requisitos previstos en las fracciones I a V del numeral anterior, el Presidente del Comité, por conducto de la Secretaría, requerirá al recurrente dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación del recurso para que lo haga en el término improrrogable de tres días, apercibiéndolo para que en el caso de no hacerlo, se tendrá por no interpuesto dicho recurso.

Artículo 87.- Si durante la tramitación de un procedimiento, se advierte la existencia de un tercero cuyo interés jurídico directo puede afectarlo y que hasta ese momento no haya comparecido, se le notificará la tramitación del mismo para que alegue lo que a su derecho le corresponda.

Artículo 88.- La resolución se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios, pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto.

Artículo 89.- La autoridad en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso.

Artículo 90.- La resolución que se dicte, se notificará personalmente al recurrente.

Artículo 91.- El notificador deberá:

I.- Cerciorarse de que el domicilio de la persona corresponde con el señalado para recibir las notificaciones;

II.- Entregar la copia del acto o resolución que se notifica;

III.- Señalar la fecha y hora en cuando se efectúa la diligencia; y

IV.- Recabar el nombre y firma de la persona con quien se entienda la notificación; datos que se cotejarán con la identificación oficial de ésta. Cuando la persona con quien se realice la notificación, se niegue a firmar se hará constar dicha circunstancia en el acta respectiva.

Artículo 92.- Las notificaciones se entenderán con la persona que deba ser notificada, con su representante legal o con la persona autorizada; a falta de éstos el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado le espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encuentra cerrado y nadie responde al llamado del notificador para atender la diligencia, el citatorio se dejará en un lugar seguro y visible del mismo domicilio.

Artículo 93.- Si la persona a quien haya de notificarse no atiende el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona con capacidad de ejercicio que se encuentre en el domicilio en donde se realice la diligencia; y de negarse ésta a recibirla o, en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por cédula que se fijará en un lugar seguro y visible del mismo domicilio. En estas diligencias, el notificador asentará lo correspondiente en un acta circunstanciada en presencia de dos testigos.

Artículo 94.- Las notificaciones surtirán efectos, a partir del día hábil siguiente a aquel en que se realicen.

Artículo 95.- El recurso se tendrá por no interpuesto y se desechará cuando:

I.- Se presente fuera del plazo;

II.- No se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del recurrente; y

III.- No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se firme antes del vencimiento del plazo para interponerlo.

Artículo 96.- Se desechará por improcedente el recurso, contra actos:

I.- Que no afecten los intereses jurídicos del promovente;

II.- Consumados de un modo irreparable;

III.- Consentidos expresamente; y

IV.- Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa legal interpuesta por el promovente, que pueda tener por efecto modificar revocar o nulificar el acto respectivo.

Artículo 97.- Será sobreseído el recurso cuando;

I.- El promovente se desista expresamente;

II.- El agraviado fallezca durante el procedimiento si el acto respectivo sólo afecta su persona;

III.- Durante el procedimiento sobrevenga algunas de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;

IV.- Cuando hayan cesado los efectos del acto respectivo; y

V.- Por falta de objeto o materia, o no se probare la existencia del acto respectivo.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

SEGUNDO.- Se abroga la LEY QUE CREA EL REGISTRO DE PERITOS VALUADORES EN EL ESTADO DE COLIMA, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 28 de noviembre de 1992, aprobada mediante Decreto No. 106.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

CUARTO.- Se establece un término de 180 días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la presente Ley, en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, para la expedición de su Reglamento. Mientras tanto se continuarán aplicando los ordenamientos reglamentarios y administrativos vigentes a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, en todo aquello que no la contravenga. Siendo la Comisión la encargada de resolver todas las cuestiones relativas a la aplicación y debidas observancias de esta Ley.

QUINTO.- El Comité deberá instalarse dentro de un término no mayor a 90 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, por lo que para tal efecto, la Secretaría deberá convocar a los integrantes del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 52 de la presente Ley.

SEXTO.- Los registros realizados por los entonces peritos valuadores, seguirán surtiendo efecto hasta en tanto se haga el nuevo registro, término que no podrá exceder de 240 días.

SÉPTIMO.- Los peritos valuadores inscritos actualmente en el Directorio de Peritos Valuadores del Estado a cargo de la Dirección de Catastro, cuyos nombres y datos profesionales se señalan en el directorio respectivo, el cual fue expedido por el Titular de esa dependencia y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, con fecha 27 de marzo del año 2010, serán respetados en todos sus derechos que hayan adquirido en su calidad de Peritos Valuadores, debiendo apegarse, para su refrendo, a las disposiciones de esta Ley y a los programas de capacitación, actualización y profesionalización en materia

de valuación, que coordine la Comisión con las Asociaciones de Valuadores Profesionales en la materia, constituidos en el Estado, de acuerdo a sus especialidades respectivas.

OCTAVO.- El cargo de Secretario Técnico del Comité será ejercido por el Director de Catastro, en tanto no sea creada la Dirección General del Instituto del Registro Territorial a que se refiere el artículo 41 fracción III de la presente Ley.

El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe”.

Las Comisiones que suscribimos solicitamos que de ser aprobado el presente dictamen se emita el Decreto correspondiente, atentamente Sufragio efectivo No. Reección Colima, Col., a 11 de agosto de 2011, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, José Manuel Romero Coello, Dip. Presidente. Enrique Rojas Orozco, Dip. Secretario, Alfredo Hernández Ramos, Dip. Secretario. Comisión de Planeación del Desarrollo Héctor Raúl Vázquez Montes, Dip. Presidente, Juan Roberto Barbosa López, Dip. Secretario, Raymundo González Saldaña, Dip. Secretario. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo decreto un receso... RECESO. Se reanuda la sesión y se le concede el uso de la voz por así haberlo solicitado al Dip. Vázquez Montes.

DIP. VAZQUEZ MONTES. Gracias Presidente, solamente para hacer unas precisiones técnicas legislativas de redacción de esta Ley de Valuación para el Estado de Colima, lo que comprende el artículo 35 fracción I, que a la letra quedará agrupar y relacionar a los valuadores para el mejor desempeño de su actividad profesional; así mismo también en el artículo 39 fracción III, quedará como sigue:

Generar e informar al Gobernador los métodos, criterios y técnicas de valuación de acuerdo a la naturaleza y condiciones de los bienes a valorar, por lo cual esto, se hace la corrección al documento de la presente Ley. Gracias Diputado Presidente.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, con las modificaciones ya realizadas por el Dip. Héctor Vázquez. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano, le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. Recordándoles que con fundamento en lo establecido en el artículo 148 fracción IV inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular algún artículo del mismo, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Con fundamento en el artículo 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en virtud de no haberse reservado ningún Diputado para discutir y votar por separado algún Título, Capítulo, Sección o Artículo del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente, sobre si se admite que la presente Ley sea votada lo general y en lo particular en un solo acto.

DIP. SRIO. LOPEZ GONZALEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si se admite que toda la ley se vote en un solo acto, en lo general y en lo particular, en virtud de no existir reserva alguna. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto, en lo general y en lo particular del dictamen que nos ocupa.

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal, y en un solo acto en lo general y en lo particular si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Por la negativa.

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, pasaremos a emitir nuestro voto la Mesa Directiva, Alfredo, a favor.

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. López, por la afirmativa.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Rojas, a favor.

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 17 votos a favor en lo general y en lo particular.

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra en lo general y en lo particular.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 17 votos en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa por la que se adiciona el inciso c), a la Ley fracción I, del artículo 1º de la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, en el uso de la voz el Dip. Alfredo Hernández Ramos.

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con su permiso Diputado Presidente, amigas y amigos Diputados, público que amablemente nos acompaña. H. Congreso del Estado de Colima, Presente, a la Comisión de Educación y Cultura le fue turnada para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley con proyecto decreto presentada por los Diputados Guillermo Rangel Lozano y Alfredo Hernández Ramos, integrantes del Grupo Parlamentario del Grupo de Nueva Alianza; así como de los Diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional y del Diputado único del Partido del Trabajo Olaf Presa Mendoza. Relativa a adicionar el inciso c), a la Ley fracción I, del artículo 1º de la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, y

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO.- Que mediante oficio número 2306/011 de fecha 14 de junio de 2011, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Educación y Cultura, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por los Diputados José Guillermo Rangel Lozano y Alfredo Hernández Ramos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, así como los Diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional y el Diputado Único del Partido del Trabajo Olaf Presa Mendoza, relativa a adicionar el inciso c) a la fracción I, del artículo 1o., de la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses.

SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala textualmente que:

“ El 29 de septiembre de 1967, el H. Congreso del Estado creó la Condecoración “PROFESOR GREGORIO TORRRES QUINTERO” para ser otorgada a miembros distinguidos del Magisterio y a benefactores de la Educación Pública del Estado. Esta Condecoración se estableció mediante el Decreto No. 145 para establecer “LA LEY QUE CREA PREMIOS y ESTIMULOS PARA LOS COLIMENSES”.

El 11 de mayo de 1968 se adiciona con un inciso b) el Artículo 1º. de la Ley mencionada para crear la “Orden Profr. Gregorio Torres Quintero” y Diploma de Honor, para los “Maestros en servicio que cumplan cincuenta años de labor profesional en el sistema educativo del Gobierno del Estado de Colima”.

Sin embargo, el 16 de mayo de 1984 se reforma, mediante el Decreto 152, el mencionado inciso b) para que la “Orden Profr. Gregorio Torres Quintero” se otorgará a “Maestros en servicio que cumplan 40 años de labor profesional en el sistema educativo del Gobierno del Estado de Colima.

Considerando lo anterior, el Gobierno del Estado no ha reconocido desde 1984 a los docentes que han cumplido 50 años de servicio.

Los considerandos de los decretos antes mencionados siguen siendo válidos y aplicables, en tanto que ha sido una política del Gobierno del Estado el reconocer el honroso servicio de los maestros en la formación de las nuevas generaciones por lo que se debe seguir premiando su dedicación y años de servicio.

Si a los profesores con 40 años de servicio se les otorga la Orden “Profr. Gregorio Torres Quintero” y Diploma de Honor, con cuanta más razón debe otorgarse un reconocimiento a los trabajadores de la educación que cumplan 50 años de servicio, porque en ese tiempo han demostrado inequívocamente su constancia, dedicación y amor al servicio educativo en la noble tarea formativa de los nuevos ciudadanos que el país requiere para su transformación eficiente.

La fracción VI del Artículo 16 de la Ley de Educación del Estado de Colima es muy precisa cuando indica como facultad y deber del Gobierno del Estado en materia educativa el de “Establecer un sistema de reconocimientos y recompensas a favor de aquellos docentes que se hayan distinguido por haber consagrado su vida a la enseñanza, por haber prestado servicios distinguidos en el ámbito de la educación o se hayan destacado por su eficiencia y esfuerzo permanente de superación”.

Uno de los mayores reconocimientos debe ser para aquellos docentes que han dedicado la mayor parte de su vida al servicio de la educación, tal es el caso de los maestros y maestras que durante 50 años han permanecido en su labor educativa.

Actualmente, la Ley que crea Premios y Estímulos para los Colimenses reconoce para los docentes la condecoración “Profesor Gregorio Torres Quintero” para miembros distinguidos del magisterio y a benefactores de la Educación Pública del Estado. Asimismo prevé la “Orden Profr. Gregorio Torres Quintero” y diploma de honor, para los maestros en servicio que cumplan 40 años de labor profesional en el sistema educativo del Gobierno del Estado de Colima.

Consideramos necesario crear un reconocimiento para los docentes que cumplan 50 años de servicio, ya que encontramos que, con mayor frecuencia, este reconocimiento se ha establecido en otras entidades federativas, tal es el caso de Nuevo León, Michoacán y Chiapas entre otros.

El reconocimiento que proponemos, consideramos que debe denominarse Galardón y debe llevar también el nombre de nuestro más Ilustre Educador “**Gregorio Torres Quintero**”.

TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, después de haber analizado la iniciativa en estudio, relativa a adicionar un inciso c) a la fracción I del artículo 1o., de la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, determina que la reforma planteada por el iniciador es viable, en virtud de que como se indica en la misma, dentro de su exposición de motivos, una de las políticas del Gobierno del Estado ha sido siempre reconocer el honroso servicio de los maestros en el proceso formativo de las nuevas generaciones, por lo que se comparte el espíritu de que se debe continuar premiando su dedicación, empeño y años de servicio en la loable tarea de la enseñanza.

La Comisión comparte el criterio que da sustento a esta iniciativa contenida en el artículo 16, fracción VI, de la Ley de Educación del Estado de Colima, en la que se establece como obligación del Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Educación: *establecer un sistema de reconocimientos y recompensas a favor de aquellos docentes que se hayan distinguido por haber consagrado su vida a la enseñanza, por haber prestado servicios distinguidos en el ámbito de la educación o se hayan destacado por su eficiencia y esfuerzo permanente de superación.*

En virtud de lo anterior, se justifica la intención del iniciador de premiar y/o reconocer a aquellos docentes que han demostrado constancia, perseverancia y dedicación a la docencia y enseñanza en las instituciones del Sistema Educativo Estatal, coadyuvando así a la formación académica y educativa de los colimenses.

Es por tanto, que esta Comisión determina aprobar, en adición a la condecoración y orden vigentes, el reconocimiento que se propone en la iniciativa que se dictamina, relativo a otorgar un “Galardón”, con el nombre del ilustre y preclaro educador colimense “Gregorio Torres Quintero” y un Diploma de Honor, a aquellos docentes en servicio que hayan cumplido 50 años de labor ininterrumpidos en la formación académica de los colimenses, con el firme propósito de que sigan con el mismo ímpetu en el desarrollo de su profesión de manera continua e íntegra, siendo ejemplo, modelo y motivación para los demás docentes, para que éstos sigan dando el máximo esfuerzo en el área de la docencia, educando e impartiendo su

conocimiento a los niños y jóvenes del Estado, formando y forjando generaciones de educandos, que serán mujeres y hombres de bien para nuestro Estado y para nuestro país.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:

D I C T A M E N:

“**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se adiciona el inciso c) a la fracción I, del artículo 1o., de la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, para quedar como sigue:

Artículo 1o.

I.-

a) y b).

c) Galardón “**Profesor Gregorio Torres Quintero**” y Diploma de Honor a los docentes en servicio que cumplan 50 años de labor profesional en el Sistema Educativo Estatal.

II a la VII.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se emita el decreto correspondiente, atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 11 de agosto de 2011, La Comisión de Educación y Cultura, Dip. Alfredo Hernández Ramos, Presidente, Dip. José Guillermo Rangel Lozano, Dip. Secretario, Dip. Armida Núñez García Secretaria. Gracias Diputado Presidente.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen

que nos ocupa en la presente sesión. Como no hay intervenciones al respecto. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano, le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Por la negativa.

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, pasaremos a votar la Mesa Directiva, Alfredo, a favor.

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. López, por la afirmativa.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Rojas, a favor.

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 17 votos a favor del documento que nos ocupa.

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 17 votos en lo general y en lo particular, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen por medio del cual se desecha la iniciativa con proyecto que reforma el artículo 4º transitorio de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; así como el inciso c), segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto 200, aprobado el 27 de octubre del año 2010, y publicado el 6 de noviembre del mismo año. Tiene el uso de la voz la Diputada, el Dip. Rigoberto Salazar.

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente, Diputados de la Mesa Directiva, Diputadas y Diputados, público que nos acompaña H. Congreso del Estado. A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de Decreto presentado por el Dip. Milton de Alva Gutiérrez y demás integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, relativa a reformar el artículo 4º transitorio de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; así como el inciso c), segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto 200, aprobado el 27 de octubre del año 2010, y publicado el 6 de noviembre del mismo año, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que mediante oficio número 2409/011 de fecha 12 de julio de 2011, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa con

Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Milton de Alva Gutiérrez y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado, para reformar el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, así como el inciso c), Segundo Párrafo del Artículo Segundo Transitorio del Decreto 200, aprobado el 27 de octubre del año 2010, publicado el 6 de noviembre del mismo año.

SEGUNDO.- La iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala textualmente que:

“El sentir de la sociedad que se ha venido manifestando en diversas formas hacia el rechazo total sobre el impuesto de cobro de placas y tenencia es realmente palpable. No es posible que ignoremos de plano todas las voces de ciudadanos que ven mermada su situación económica al pensar en erogar un gasto que de plano ya han realizado en años anteriores, o que sin haberlos efectuado no cuentan con el recurso necesario para llevarlo a cabo.

Como representantes de todas esas voces, el Grupo del Partido Acción Nacional, no estamos ni nunca estuvimos de acuerdo con el cobro de un impuesto que de hecho debe ser subsidiado por las arcas del gobierno del estado. Sin embargo y ante una realidad inminente, hemos sabido que muchos ciudadanos aún no han realizado el pago de este impuesto, lo cual implica que ante diversas declaraciones de personajes del medio político, que se vean en la necesidad de, o no circular su vehículo o arriesgarse a que se les detenga y se les retire de la circulación aunado a lo anterior que implica esto una infracción, el costo de la grúa y de los días que permanezca en el corralón.

Quiero agregar, que, constitucionalmente hablando, se nos obliga a todos a contribuir con el pago de los impuestos, según la fracción cuarta del artículo 31 constitucional, y sobre lo que marque nuestra Carta Magna lo debemos de acatar, sin embargo en esta situación real, no proponemos que se deje de pagar, si no un plazo considerable para que el ciudadano no se vea en apuros y pueda pagar el costo de las placas y la tenencia.

Por otro lado, en días pasados, a través de un punto de acuerdo, esta Asamblea aprobó un Punto de Acuerdo mediante el cual exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que condone los recargos, multas y gastos de ejecución a los contribuyentes que no han cubierto el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos correspondientes al año 2009, cuando esa contribución era de carácter federal. Cabe recordar que en la exposición de motivos de dicho punto de acuerdo, se señaló que a pesar de la abrogación a la Ley del Impuesto sobre Tenencia Vehicular, se tiene conocimiento que un considerable número de usuarios de vehículos no han cubierto el impuesto federal de referencia, con lo cual se les han originado multas, recargos y gastos de ejecución; aumentando considerablemente el adeudo a la autoridad hacendaria, y es por ello que precisamente se exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Congreso de la Unión, para que implementen medidas de apoyo para aquellos contribuyentes que no han hecho el pago correspondiente, condonándoles dichas multas, recargos y gastos de ejecución derivados de la falta de pago de que se trata y cubran solamente el monto original del impuesto.

Reconocemos la responsabilidad ciudadana y el civismo de la sociedad colimense que día a día hace el esfuerzo de salir adelante y a la par, cumplir con sus obligaciones como en el caso que hoy nos ocupa. En ese sentido, se propone una nueva prórroga en el pago del citado impuesto, en beneficio de un gran número de usuarios de vehículos automotores.

Debemos insistir que esta propuesta no significa que estemos de acuerdo con el injusto cobro de la tenencia y el reemplacamiento, de hecho, siempre hemos estado en desacuerdo, y así lo hemos externado en diferentes momentos y ante diferentes instancias; sin embargo, es un hecho que los citados cobros se encuentran vigentes en la ley y esto obliga a los gobernados a cumplir con la misma. Sin embargo, siendo congruentes con el punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y al Congreso de la Unión para que condonen las multas, recargos y gastos de ejecución del otrora impuesto federal, se propone la siguiente iniciativa, con la finalidad de que se tenga el tiempo suficiente para materializar el citado punto de acuerdo, tomando en cuenta que para gozar del beneficio del subsidio al pago de la tenencia, se debe estar al corriente del pago del impuesto de años anteriores.

También hay que recordar en esta legislatura se aprobó la ampliación del pago del impuesto predial, mismo que se fijó como fecha límite en diciembre de este año y siendo congruentes en nuestro actuar, no le veo la dificultad de que se apruebe la presente iniciativa, pues es facultad de este Congreso la condonación de recargos, estipulada en la fracción XLI de nuestra Constitución Local, situación que es favorable para aquellos que por diversas circunstancias no han pagado las placas y tenencia, insistimos existe la viabilidad y procedencia de la medida que se solicita, pues esta petición no representa un daño patrimonial, sino un mecanismo legal que establece nuestros ordenamientos, pues al final, es decir al día 31 de diciembre de 2011, se regularizarán el padrón vehicular.

De aprobarse esta iniciativa se generará beneficios de apoyo a la población toda vez que la medida tiene por objeto incentivar al pago voluntario de esta contribución omitida, proyectándose la participación voluntaria de los contribuyentes en el pago, pues se considera necesario ampliar el beneficio al concepto de recargos.” Tercero.

le pediría Presidente si ahora si le pedimos a nuestra Secretaria puede auxiliarnos en la lectura.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Le pedimos a la Dip. Mely Romero Celis, pase a darle seguimiento a la lectura del Dictamen.

DIP. ROMERO CELIS. Con su permiso Diputado Presidente compañeros Legisladores considerando

TERCERO.- Que esta Comisión que dictamina, una vez realizado el estudio y análisis de la presente iniciativa, por la que se solicita una nueva prórroga, sin recargos, al 31 de diciembre del año en curso para el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, así como para el para el pago de los derechos por la expedición o renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular, correspondientes al ejercicio fiscal 2011, previstos en la Ley de Hacienda del Estado de Colima, la misma se considera improcedente por los motivos y razones que más adelante se señalan.

Para lo cual, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Que en términos del artículo 41 Z BIS 12 y 53, fracción IV, de la Ley de Hacienda del Estado vigente se establece que el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, así como los derechos por la expedición o renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular se deben pagar durante los tres primeros meses y a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal que corresponda, respectivamente.

Que mediante Decreto No. 110, de fecha 30 de marzo de 2010, se adicionó un Artículo Cuarto Transitorio a la Ley de Hacienda para el Estado, para que en ejercicio fiscal 2010 los contribuyentes gozaran de una prórroga para el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos por dicho año, estableciéndose como terminación de dicha prórroga el 30 de abril de 2010.

Que mediante Decreto No. 200, de fecha 27 de octubre de 2010, se reformó la Ley de Hacienda del Estado, otorgándose en el Segundo Transitorio del citado Decreto un programa de estímulos fiscales consistente en un subsidio en el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos durante el ejercicio fiscal 2011, previendo en el inciso c) de la misma disposición transitoria que, para tener derecho a tal subsidio, debería cubrirse dicha contribución y los derechos de control vehicular de ese año durante los meses de enero a marzo del mismo ejercicio.

Que mediante Decreto No. 297, de fecha 31 de marzo de 2011, se reformó el Artículo Cuarto Transitorio a la Ley de Hacienda para el Estado, para establecer que en el ejercicio fiscal 2011, el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, así como el pago de los derechos por la expedición o renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular, se podrá efectuar, sin recargos, hasta el 31 de mayo del año en curso.

Asimismo, en el propio Decreto No. 297 se reformó el inciso c) del Segundo Transitorio del citado Decreto No. 200, para ampliar el período de pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y los derechos de control vehicular hasta el 31 de mayo de 2011, para tener el derecho al subsidio en el pago de la tenencia prevista en la misma disposición transitoria.

El autor de la iniciativa materia del presente dictamen, señala que, en efecto, como lo es, esta Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado aprobó en sesión celebrada el 24 de mayo del año en curso, un Punto de Acuerdo mediante el cual se exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para solicitar, dentro del ámbito de su competencia, las medidas necesaria y pertinentes para la condonación de recargos, multas y gastos de ejecución a aquellos contribuyentes que por diversas circunstancias no han cubierto el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, originado durante la vigencia de la Ley del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos de carácter federal, es decir, hasta antes de pasar esta contribución al ámbito estatal, exhorto que también se hizo extensivo al Congreso de Unión dentro de sus respectivas competencia.

Que en este sentido, los iniciadores proponen una nueva prórroga en el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, en congruencia con el referido exhorto a la Secretaria de Hacienda y al Congreso de la Unión, considerando también la reciente aprobación de “la ampliación de pago del impuesto predial, mismo que se fijó como fecha límite en diciembre de este año”, partiendo de la base para solicitar la prórroga en el pago del citado impuesto que la condonación de recargos es una facultad del Congreso, y que tal medida no representa un daño patrimonial, sino un mecanismo legal establecido en los ordenamientos, **apreciación e interpretación** que a juicio de esta Comisión dictaminadora resulta equivocada, toda vez que, *en el primer caso*, se trata de un exhorto a las autoridades federales para la condonación del pago de accesorios del citado gravamen y no de una prórroga en el pago del mismo y, *en el segundo caso*, el Congreso Local aprobó una condonación de recargos y multas como concepto de estímulo fiscal a los contribuyentes que paguen el impuesto predial en el segundo semestre del ejercicio fiscal 2011 y no de una ampliación del pago del Impuesto Predial como erróneamente se señala en la iniciativa.

En tal tesitura, para esta Comisión que dictamina la propuesta de reforma al Artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Hacienda del Estado para que el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y el pago de los derechos por la expedición o renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular, correspondientes a los ejercicios fiscales 2010 y 2011, puedan efectuarse sin recargos hasta el 31 de diciembre del año 2011, así como la propuesta de reforma del inciso c) segundo párrafo del Artículo Segundo Transitorio del Decreto 200, aprobado por la legislatura local el 18 de octubre de 2010, para que los derechos de control vehicular y el Impuesto sobre Tenencia de los ejercicios fiscales 2010 y 2011 puedan realizarse sin recargos hasta el 31 de diciembre de 2011, carece de fundamento y sustento legal.

En efecto, resulta jurídicamente improcedente la iniciativa en comento, al pretender otorgar una nueva “prórroga” en el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, toda vez que se trata de un plazo fenecido en la Ley de Hacienda del Estado, mismo que venció el 31 de mayo próximo pasado, por lo que en términos de ley, toda prórroga únicamente puede otorgarse antes de la conclusión del plazo correspondiente, es decir, jurídica y legalmente no puede prorrogarse un plazo que ya no existe o el mismo ha concluido, por lo que, dicha iniciativa de reforma al pretender prorrogar el plazo para el pago de la referida contribución, resulta improcedente.

Esto es así, en razón de que en términos del artículo 16 del Código Fiscal del Estado de Colima vigente, las normas de derecho tributario que establecen cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de *aplicación estricta*, y por disposición expresa del propio precepto legal, se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, cuota, tasa o tarifa.

Por tal motivo, no es jurídicamente válido pretender aplazar el cumplimiento de disposiciones fiscales cuando la fecha para su pago feneció anteriormente, ya que, como lo dispone el artículo 12 del propio Código Tributario estatal, las contribuciones se causan cuando se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran, por lo que se determinarán y liquidarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su nacimiento, por ello, las contribuciones determinadas en los periodos de inexistencia de prórrogas, se causan y liquidan conforme a los plazos vigentes.

Lo anterior es así, en virtud de que los artículos 41 Z BIS 12 y 53, fracción IV, de la Ley de Hacienda del Estado vigente, prevén que el período de pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, será dentro de los tres primeros meses del año y que el pago de los derechos por la expedición o renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular se deberá realizar a más tardar el 31 de marzo del año que corresponda. Siendo, mediante Decreto No. 297, aprobado por esta propia LVI Legislatura el 31 de marzo de 2011, y dentro del plazo señalado en la ley, que se amplió extraordinariamente el período de pago correspondiente hasta el 31 de mayo de 2011, es decir, dos meses más de la fecha establecida en la Ley de Hacienda estatal para el pago de ambas contribuciones.

Bajo las premisas analizadas anteriormente, resulta improcedente la iniciativa que se analiza, en virtud que, como se advierte con antelación, el período de pago ordinario y extraordinario otorgado, concluyó el 31 de mayo de 2011, y a la fecha que se dictamina la misma ya se han realizado pagos tanto del impuesto como de derechos con los recargos correspondientes generados por la falta de pago oportuno, máxime que, como lo prevé el Decreto No. 200 del 18 de octubre de 2010, el otorgamiento de los subsidios del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos concluyó el 31 de mayo del presente año, por lo cual, resulta evidente que existen contribuyentes del impuesto mencionado que han realizado el pago íntegramente tanto del principal como de accesorios (recargos), por lo que, en caso de aprobar la iniciativa de que se trata en esta fecha, conllevará a dar un tratamiento inequitativo e injusto a los contribuyentes que pagaron el Impuesto sobre Tenencia y los derechos por la expedición o renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular sin beneficios y con accesorios.

Situación similar se presenta con relación a los derechos por concepto de la renovación de placas de circulación, ya que el plazo ordinario para el pago correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 50, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Hacienda del Estado, concluyó el 30 de junio del año en curso, por lo cual, existe un gran número de contribuyentes que realizaron el pago del referido derecho más accesorios por la extemporaneidad del pago.

Asimismo, no pasa desapercibida la diferencia existente entre la condonación de recargos al mes de diciembre próximo realizada por esta Soberanía al Impuesto Predial sin dejar de cubrir la contribución principal de forma íntegra y no de una ampliación en el pago del impuesto como equívocamente se señala en la iniciativa de reforma, con la presente iniciativa de prórroga propuesta, ya que la primera, corresponde a una acción emprendida por los municipios en la que asumen el costo por la reducción de sus ingresos a iniciativa de ellos mismos. En cambio, la iniciativa en estudio, presentada el 12 de julio de 2011, contiene una prórroga a un plazo ya inexistente, el cual, como reiteradamente se menciona, expiró el 31 de mayo respecto al Impuesto sobre Tenencia y sobre los derechos por la expedición o renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular, y el 30 de junio respecto de la renovación de placas de circulación, motivo por el cual lo hace improcedente.

Finalmente, a invitación del Presidente de la Comisión que dictamina, a las 09:00 horas del 10 de agosto de 2011, se realizó una reunión en la Sala de Juntas "Francisco J. Mújica" del Congreso del Estado, contando con la presencia de los integrantes de la misma Comisión Diputados Rigoberto Salazar Velasco, Mely Romero Celis y José Luis López González, así como del Diputado Milton de Alva Gutiérrez en calidad de iniciador, el Legislador Ernesto Germán Virgen Verduzco en

representación del Presidente de esta Soberanía, los Diputados Patricia Lugo Barriga, Raymundo González Saldaña y Ma. del Socorro Rivera Carrillo, integrantes de esta Legislatura, además del Ing. Armando González Manzo, Director General del Transporte y de la Seguridad Vial y el Lic. Miguel Ceballos Valencia, Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, ambos del Gobierno del Estado.

En dicha reunión, se dieron a conocer de manera detallada los argumentos que sustentan el presente instrumento, así como las posibles consecuencias que se generarían con la aprobación de la iniciativa que se estudia, lo que generó el debate de calidad, concluyendo en la viabilidad de este dictamen.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:

D I C T A M E N:

ARTICULO ÚNICO.- En los términos y por los razonamientos expuestos en el Considerando Tercero del presente dictamen, se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, así como el inciso c), Segundo Párrafo, del Artículo Segundo Transitorio del Decreto 200, aprobado el 27 de octubre del año 2010, publicado el 6 de noviembre del mismo año.

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le de el trámite legal respectivo debiéndose archivar el presente asunto como totalmente concluido, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja de dicha iniciativa. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 11 de agosto de 2011. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, Dip. Rigoberto Salazar Velasco, Presidente, Dip. Mely Romero Celis, Dip. Secretaria, Dip. José Luis López González Secretario, Dip. José Guillermo Rangel Lozano Vocal y Francisco Alberto Zepeda González Dip. Vocal, es cuanto Dip. Presidente.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso. RECESO...se reanuda la sesión y le pedimos a los Diputados pasen a ocupar su lugar. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Como no hay intervenciones al respecto. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano, le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En el uso de la voz el Dip. Milton de Alva.

DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Gracias Diputado Presidente. Compañeros ciudadanos que nos acompañan, la iniciativa que presenté el día 12 de julio y que en estos momentos es considerada de forma arbitraria como improcedente con un dictamen donde se vierten argumentos efímeros y que no poseen un peso jurídico como tal demuestra que no existe voluntad política de parte de la mayoría en este Congreso, se dice en el referido dictamen que la iniciativa fue presentada 40 días después del último plazo para el pago de dicho impuesto, y que de aprobarse esta caeríamos en una total inequidad tributaria pues según sus cifras alegres es que la gran mayoría del padrón vehicular ya pago dicho impuesto con sus respectivos accesorios. Pero como no van a pagar si es una obligación desgraciadamente impuesta a la sociedad colimense, ante una posible infracción y el levantamiento del vehículo si no presentan las placas nuevas o tiene cubierta la tenencia, debo de manifestar que hay otros estados en la república que han derogado por completo este fatal impuesto y que de alguna forma han salido adelante recuperando lo que por el pago de la tenencia se cobraba, es evidente que en esta Legislatura no se quiere dar beneficios a los ciudadanos y que conste que en ningún momento me he inclinado por la evasión de impuestos, si no que se debe incentivar a los ciudadanos a que es obligación nuestra de contribuir al pago de los impuestos tal y como lo establece el máximo ordenamiento federal, nuestra Carta Magna, pero dichos impuestos, deben de tener una razón de peso y no ser un capricho que todos hemos venido arrastrando y pagando desde los juegos olímpicos del año de 1968. Insisto pues que existen diversos mecanismos que pueden dar la cara por la economía de los colimenses, pero en el caso particular sobre la eliminación de la tenencia hoy se trata como un asunto concluido y para mala fortuna de todos seguiremos pagando un impuesto que repito deliberadamente ha sido cobrado durante muchos años. Ahora bien se han venido manejando diversas cifras de ciudadanos que supuestamente ya han cubierto este pago, sin embargo; nadie sabe a ciencia cierta la cantidad exacta y oficial sobre el verdadero número de contribuyentes que ya cumplieron con dicho impuesto; aquí cabe recordar el compromiso que en el propio dictamen se mencionaba de que el día de ayer sostuvimos una reunión en donde el Director de Transportes se comprometió a proporcionar esta información y es hora que no ha llegado. Una vez más queda evidenciada la inequidad en esta Legislatura y la falta de preparación de varias de nuestras autoridades que sin fundamentos claros, razonables y concisos echan abajo una iniciativa que tiene por objeto eliminar este injusto cobro sobre la propiedad de los vehículos. Finalmente los ciudadanos de alguna manera aceptaríamos el pago de este impuesto si lo viéramos reflejado en el mantenimiento de las vialidades, tanto para los vehículos, como para los peatones, sin embargo, solamente vasta caminar unos pasos por cualquiera de nuestras ciudades en el Estado para darnos cuenta de que este impuesto no es bien aplicado y solo trata de cubrir desfalcos en el Gobierno del Estado, es cuanto Diputado Presidente gracias.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. En el uso de la voz el Dip. Rigoberto Salazar.

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente, Diputadas, Diputados, público que nos acompaña, desde luego que no estoy de acuerdo con lo que ha venido a expresar el iniciador de esta iniciativa el Dip. Milton de Alva, de que se esté actuando en forma arbitraria y que los argumentos sean efímeros los que contiene el dictamen, el día de ayer con mucha amplitud todas las dudas, todas interrogantes que se formularon en la reunión de trabajo fueron debidamente contestadas, ya lo digo en la lectura la Dip. Mely Romero está bien sustentado el análisis jurídico que se hizo al respecto donde se determina que jurídica y legalmente es improcedente esta iniciativa por las disposiciones que marca el propio Código Fiscal del Estado, de que una prorroga solo puede autorizarse cuando estas en tiempo, está desfasada la solicitud que hizo el Diputado, la fracción del PAN, se habló el día de ayer y está en el dictamen la inequidad que se provocaría con quienes sin han cumplido, quienes han pagado inclusive recargos, multas y la Ley establece con claridad lo que procede en estos casos. y también veamos la respuesta de la ciudadanía si bien la tenencia en efecto es un impuesto polémico, la

respuesta de la ciudadanía en Colima es extraordinaria, prácticamente casi el 100% a cumplido con esas obligaciones lo que se tiene registrado es de quienes aún no han reemplacado es porque sus vehículos pues ya salieron del estado y los dieron de baja y algunos casos por supuesto de quienes no tienen posibilidades económicas pero de ahí todas las facilidades que se han otorgado para que a petición del contribuyente se abra un expediente y puedan pagar en la medida de sus posibilidades y también que en la Dirección de Transportes les den un permiso para que puedan circular que no los molesten en tanto cumplen con esta obligación. Se habló el día de ayer en la reunión de los logros que se han alcanzado en estos programas porque se dijo, que en efecto se iba a reemplacar para que también sirviera como una medida de seguridad y el día de ayer se planteó con claridad que más de 40 mil vehículos andaban circulando con palcas prestadas y eso ya se logró también corregir, entonces la respuesta de la ciudadanía es muy positiva y lo que falta se van a seguir dando facilidades, lo digo y se comprometió el Director de Transportes de que iba a ver las infracciones de, utilizaron un término ahí que no van a tener la primera validez legal pero lo que se va a buscar es que quien aun no allá reemplacado lo exhorten primero a que si lo hago, entonces por facilidades no ha quedado. ¿Qué es lo que esta de fondo?, en esta discusión, lo que esta de fondo es que va a suceder con la tenencia y aquí hay debates y hay cosas que también no se manejan con claridad porque el gobierno federal si ustedes escuchan maneja un spots, donde dice que prácticamente el gobierno cumplió con lo de la tenencia y que a partir del 2012 no se cobrará, pero no dice el spots, ni el gobierno federal que cuando se abroga la Ley de la Tenencia a nivel federal se le da la facultad a los Estados para que determinen si la siguen cobrando o no. Y ahí hay que recordar que Colima ya legisló y la tenencia es un ingreso, es un impuesto local propio y que hay Estados de la República que no han atendido esto y están en la disyuntiva que va a pasar ante la cercanía del 2012; y hay en efecto estados que han dicho nosotros la vamos a eliminar y Estados como Zacatecas que recientemente dice no, nosotros no la vamos a eliminar y el D. F. que Marcelo Ebrad, dice es la peor tontería que he escuchado derogar la tenencia si el problema que tenemos es de contaminación en el D.F. y para subsidiar el transporte público ocupó los ingresos de la tenencia. Entonces hay una potestad tributaria que tienen los Congresos para determinar que hacen en materia de impuestos, y hablando de ese tema, pues es muy poquito lo que tienen los estados como ingresos o impuestos propios, la tenencia, el impuesto sobre la nómina y uno o dos tres por ahí de profesiones, pero los que realmente logran una bolsa importante para acceder a más participaciones federales y poder atender las necesidades de gasto público es este impuesto de la tenencia. Ayer yo lo planteaba que tuviéramos cuidado se tiene que resolver el problema, pero que tuviéramos cuidado porque el próximo año, ya los Estados y los municipios no van a recibir el impuesto a la gasolina, este ya no se le entregará a estados y municipios y si quitamos la tenencia sin tener resuelto de donde va a salir ese dinero provocaríamos un ollo un boquete en las finanzas del Estado arriba de los 300 millones, y si el pleito es jalar participaciones federales y la base para lograr que lleguen más es lo que tu recaudas, pues al recaudar menos tendríamos el próximo año y los años subsecuentes un serio problema en el Estado de Colima. Este tema lo tienen todos los estados y es polémica y debate a nivel nacional, y en efecto el PRI ha fijado una serie de posicionamiento donde se está planteando modificar la Ley de Coordinación Fiscal. Que a los estados y municipios les den más recursos, para poder atender las necesidades y entonces si, se elimina la tenencia sin ningún problema; pero que ha sucedido aquí nosotros mismos ya hicimos planteamientos, el gobernador presentó una iniciativa que la hicimos nuestra, la firmamos prácticamente todos, exhortamos a los Estados de la República y le pedimos al Congreso de la Unión que modificara la fórmula de coordinación fiscal para que en lugar de que nos den el 20% del fondo general de participaciones se vaya a el 25, cual ha sido la respuesta ninguna, entonces este tema será discutido los próximos días en la Cámara de Diputados a nivel federal porque el Ejecutivo tendrá que presentar su paquete económico, su iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos a nivel federal en una situación difícil porque también debemos estar atentos a lo que esta sucediendo en contexto internacional donde vemos que en E.U. prácticamente van a entrar en recesión no lo aceptan todavía pero hacia allá van las cosas, en Europa si ustedes están siguiendo las noticias traen muchos países problemas de carácter financiero y eso a provocado que las bolsas de valores caigan, entonces hay un momento de incertidumbre, incertidumbre económica que va a suceder en los próximos meses y cuando hay recesión recuerdan aquella frase de Cartens el Secretario de Hacienda que andaba por ahí

en el 2008 un problemita en E.U. y que no nos preocupáramos que iba a ser un catarrito y fue pulmonía cayó la economía de México más del 6%, cuando cae la economía o no crecemos o en el producto interno Bruto no vemos crecimiento económico es que no hay posibilidades de crear nuevos empleos y al no crear empleos la gente se va a la calle y al irse a la calle traemos los problemas de inseguridad que vive el país. Entonces el tema tiene muchas aristas lo vamos a abordar con seriedad en su momento que vamos a hacer con la tenencia de entrada hay que buscar como lo que entra por tenencia lo puedes ingresar o que la federación nos de más participaciones federales o crear nuevos impuestos y cuando se habla de crear nuevos impuestos también la gente dice momento y ahí vamos a entrar en una discusión, a lo mejor no ahorita con Raymundo, porque Raymundo trae otra iniciativa sobre este tema y en la iniciativa de Raymundo estamos hablando también en cuanto al reemplazamiento que quienes tengan vehículos de hasta 50% pesos no paguen las placas y prácticamente darles muchas facilidades entonces entra el tema de los impuestos ecológicos y ahí va a ver otra discusión. Lo que nos ocupa en este momento es lo que ya presento Milton que en el dictamen van todos los soportes jurídicos y con la reunión de ayer, información con datos técnicos de cómo estamos en materia de recaudación. Pero que vamos a hacer de fondo con este problema, todos lo debemos traer de tarea y concluyo porque también en la polémica ahorita cuando hablaba de los spots del Gobierno Federal pues el propio partido Acción Nacional a través de su Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados Mario Alberto Becerra Pocaroba planteo hace unos días pues que fueran viendo los estados como resolver este asunto ejerciendo esa atribución, esa potestad que tenemos los estados para legislar en la materia que fortalezcamos nuestros ingresos propios, que fortalezcamos las finanzas y aquí con el planteamiento de las iniciativas del PAN es totalmente al revés, no es para fortalecer las finanzas del Estado, ayer en una respuesta de Miguel Ceballos, Dir. de Ingresos se lo decía a Raymundo con las iniciativas lo que estoy viendo ustedes quieren que el gobierno no recaude y todavía más de lo que ya ingresó plantea que se le regrese a la gente señor problema porque ya se ejerció en el gasto público entonces sería un problema todavía adicional no me extendo más pero lo quise plantear porque el dictamen es muy claro, la información de la que disponemos muchos de nosotros como lo estoy diciendo aquí, así está el problema por eso con todas esas razones se ve la improcedencia de lo que está planteando Milton. Que quede también asentado y lo digo Mely ayer tenemos que revisar los esquemas si realmente queremos ayudar a la gente, a lo mejor no es por esta vía, hay que buscar otras vías para ayudar realmente a la gente que en efecto tiene problemas que no ha podido pagar la tenencia o que sus posibilidades económicas da hasta traer una pobre carcanchita, hay que buscar como fortalecer la cuestión económica de estas personas para que puedan ejercer su trabajo, es cuanto gracias.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. En el uso de la voz el Diputado Milton de Alva.

DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Gracias Dip. Presidente y gracias a los ciudadanos que nos siguen acompañando. Miren qué bueno que aquí Rigoberto nos dio amplia explicación que pues en parte comparto con los razonamientos, sin embargo aquí queda de manifestó algo que nosotros reiteradamente manejamos, el argumento principal de cambio de placas fue que era por nuestra seguridad y vemos como todos lo que hemos tenido vehículos y eso también se comentó en la reunión de ayer, fue que las placas te llegaban a tu domicilio, si era por nuestra seguridad lo ideal era que los vehículos fueran revisados por la autoridad competente a fin de verificar que estuvieran totalmente en regla, que no tuvieran vidrios polarizados, que no tuvieran sus números de motor cambiados porque desgraciadamente hay muchos vehículos que se utilizan por el crimen organizado, cosa que no ocurrió, porque, porque las placas y toda la documentación era enviada por correo y lo que también vimos es que el costo de las placas, el costo real de las placas era sobre 200 pesos y nos fueron cobradas sobre 850, entonces el argumento de la seguridad quedó totalmente desechado y lo que se pretendía era precisamente cubrir los desfalcos de la anterior administración. Yo he estado recibiendo a personas que por diversas circunstancias no han podido hacer el pago y que por ahí hubo alguna declaración que no la compartí, no se si después se disculpo el legislador y no recuerdo de quien fue, donde afirmaban que todo aquel que no había pagado pues era deudor o malandrín o delincuente etc. Etc. Muy desafortunada, pero yo le voy a poner un ejemplo hay una persona que el Gobierno

del Estado no le debe de este mes, no le debe del año pasado ni del antepasado, tiene alrededor de cuatro años que no ha podido cobrar un servicio que le prestó y hacer mismo me lo estaba planteando me dice que hago, no puedo pagar yo la tenencia, ni las placas, no tengo tarjeta de crédito o sea estoy mal económicamente como le hago ahí con el gobierno del estado que me esta exigiendo que le pague pero el no me paga a mí, y que con los puros intereses que se generan con ese adeudo cumplen totalmente con el pago de placas y la tenencia que hacemos ahí. El día de ayer en la reunión también ahí platicamos de que bueno está buscando el gobierno del estado por cualquiera medida de recaudar dinero y la pregunta aquí era ¿Que está haciendo el Gobierno del Estado? para también reorganizar sus procesos, eliminar gastos superfluos, reducir personal que no se requiere, lo que hace cualquier empresa y lo que hace cualquier persona que tiene un pequeño negocio cuando no le esta alcanzando el recurso lo tiene que ajustar y desgraciadamente no hemos visto eso en el Gobierno del Estado. También se mencionó que están solicitando una modificación a la Ley de Coordinación Fiscal, que pase del 20 al 25% de las participaciones, pero no se quieren aprobar las reformas a la ley laboral la cual crea mejores expectativas para las empresas para que generen más empleos, la reforma energética, una verdadera reforma energética ahí la tiene detenida el PRI y la reforma pues sufre las misas, entonces por una parte si se le quiere exigir al ciudadano y por la otra que es la parte política que podemos hacer todos ahí se le pone el freno, de ahí el que no exista esa equidad cuando pides y cuando tienes que dar y que bueno, que bueno que aquí mi compañero Rigoberto trajo a colación el tema de la recesión de E.U. en el 2009, esa recesión que nos toco vivir a todos con el problema de la influenza, con a recesión de E.U. y los países europeos ha sido la primera en la historia moderna de México, que no fue generada por el Gobierno Federal a diferencia de todas las anteriores y habla acerca de las incertidumbres económicas que tienen precisamente los europeos y hoy en México y no lo dicen mexicanos e, lo dicen lo europeos, y lo dicen los propios estadounidenses, México tiene una mayor y mejor estabilidad que las mejores economías del mundo, si no compárenlos ahí esta Alemania, ahí está Japón, ahí esta E.U, ahí esta el Reino Unido. Y hay que reconocer que es por una buena administración si no quien sabe como estaríamos. Habla de que cayeron 6% los empleos, pero como están los países desarrollados uno España con un 20% de desempleo, los industrializados con una tasa de desempleo del 10% y nosotros aquí logramos sortear esto, que se avecinan tiempos difíciles ni duda cabe, los E.U. están tambaleándose por ello urge, urge precisamente no nada más querer sangrar al ciudadano, si no tenemos que cumplirle a los mexicanos, cada uno en la medida de nuestra responsabilidad para hacer esta reformas que ya plantíe, la laboral que es donde pega directamente al ciudadano y es su forma de vida y que coincido que si no le damos la oportunidad a los jóvenes pues son susceptibles de caer en las manos del crimen organizado. También no hemos visto la respuesta del Gobierno del Estado, en la modificación a la Ley de Pensiones, esa es otra bomba de tiempo que los propios especialistas del INDETEC lo han comentado a Colima cada minuto que pasa al no hacer esas reformas le están costando miles de pesos y para que se asusten aún mediano plazo 10,15 años el presupuesto del Gobierno del Estado con todo y los impuesto locales y las participaciones federales no va a alcanzar para pagar eso, no es porque yo lo diga, lo dicen lo propios especialistas entonces pues vámonos poniendo las pilas para buscar nuevos esquemas y hacer los ajustes y no estar sangrando al ciudadano de forma tan directa, es cuanto Diputado Presidente, gracias.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. En el uso de la voz al Dip. Germán Virgen.

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Gracias Diputado Presidente, estoy aquí con los compañeros para invitarlos a votar a favor del dictamen y bueno tomaría algunas consideraciones que han hecho algunos Diputados, un Diputado del PAN referente a una serie de observaciones y nos viene a platicar como si fuéramos niños y nos viene a decir con la doble moral que tiene lo que supuestamente los gobiernos del PRI hacen mal o estuvieran haciendo mal, como primer tema voy a tocar, habla de que las grandes economías del mundo dicen que reconocen, la estabilidad o sea que México es un país estable económicamente y muy fuerte hace poco tuvimos la oportunidad de un exsecretario de Hacienda de un gobierno panista que hubieran reconocido esas grandes potencias que esta persona que fue candidato al fondo monetario internacional si mal no recuerdo pues era el mejor reconocimiento que le habían dado se me hace que no saco ni el voto de México, que yo sepa casi

ningún país voto por él, ninguna economía era el momento de reconocer, dos por cada peso que se gasta en este país, 75 centavos o 75% se puede decir que lo gasta el gobierno federal, es decir la mayor parte la tiene el gobierno federal, es decir que en estos 12 años del gobierno panista, yo no veo a los compañeros Diputados del PAN que siendo congruentes digan, está mal de esto y esto, los gobiernos priístas, de gobiernos estatales y porque no decir del gobierno federal y porque no decir está mal esto. Habla de sangrar a los ciudadanos, yo no veo, la gasolina sube cada mes, y a quién está sangrando ahí, quién lo haya aprobado, está subiendo y es facultad de hacienda y lo puede parar. Si hablamos de la cantidad de gente que han contratado el gobierno federal, yo no veo un compañero del PAN que diga: el gobierno federal del PAN ha contratado tantas gentes, tienen secretarios, subsecretarios, ayudante del secretario, ayudante del ayudante y una serie de nombramientos que se sacan de la manga y yo no veo a ningún diputado del PAN que venga a decir, está mal lo que está haciendo el gobierno del PAN, eso se llama congruencia y ya lo han demostrado desde hace 2 meses que no son congruentes y vienen a mencionar esa gran incongruencia que tienen el día de hoy. Qué bonito sería que un diputado del PAN diga, entiendo que el gobierno de Colima contrató mucha gente y gasta mucho dinero y el gobierno federal también lo hace. Esto se llama congruencia, señores el gobierno federal que es un gobierno panista maneja el 75 y 80% de recursos de este país, ustedes saben la cantidad de gente que ha contratado, ustedes mismos se han beneficiado de ese gobierno y yo no veo que ustedes vengan hablar, sería hablar mal de los gobiernos, pero si voy hablar de la economía de un estado o de un partido, pues también. Son gobierno ustedes, yo entendería que otro diputado que no en estos momentos, no tenga, no sea parte del gobierno o de un estado federal, no sé qué adjetivo pudiera escoger... pero un diputado del PAN venir a esta tribuna y decir lo que está mal y no mencione nada del Gobierno Federal y me pregunto ¿tan bien está el gobierno federal? Todo hace bien el gobierno federal, el gobierno federal hasta el día de hoy está cobrando la tenencia, cobra tenencia, de todos los que tienen placas federales, porque no las quitan o porque no las quitaron, el Presidente Calderón quiere pasar a la historia como el presidente que quitó la tenencia, la hubiera quitado el primer año que estuvo, la va a quitar exactamente cuándo se va, y le va a dejar el problema al que viene y a los estados, no dice cómo y nunca dijo que se les va a regresar y lo hace en el último año, por qué no lo hizo en el primer año, podemos decir cosas buenas del gobierno federal que me consta, pero también tiene muchos errores, congruencia es venir a tribuna y decir también cuales son los errores del PAN y congruencia que lo diga un panista, que lo que está mal del PRI pero que también lo que está mal del PAN, eso se llama congruencia compañeros. Y si hablamos de la tenencia hay que recordar que el 2011 la tenencia en Colima, se modificó beneficiando a muchos colimenses, no la totalidad pero por lo menos a los que menos tienen, a los que tienen vehículos, del sector que tiene un vehículo y de los que menos tienen se beneficiaron, al igual que lo hicieron otros Estados gobernados por el PRI, la tenencia para el 2012 es un tema que no está terminado, es un tema que se va a discutir, es un tema que están discutiendo y que también vamos a discutir en este Congreso, no es un tema terminado. Yo también les pido que en Colima en el 2012 no paguemos tenencia pero aspiro también que los gobernadores busquen la forma junto con el gobierno federal de cómo se van a hacer llegar los recursos que van a dejar de ingresar por la tenencia. Algunos gobiernos ya lo han dicho que van a el D.F. si no mal recuerdo ya lo dijo que elimina la tenencia del 2012 pero crea el impuesto DAT? Que seguramente le va a pegar, que debería ser así, a lo mejor, pero les va a pegar a los que menos tienen pero son los que más contaminan porque tienen los carros de modelos más avanzados y seguramente en esa forma de ese impuesto va afectar a los que menos tienen pero bueno, es un tema que no está terminado y decir que el gobierno del estado, quise entenderlo así que el gobierno del estado lo etiqueta que es el gobernador de Colima no ha aprobado las modificaciones a la ley de pensiones, pero el que aprueba las modificaciones es el Congreso no el gobierno, pues entonces logren los consensos y vamos a modificar lo que quieran modificar pero entre nosotros logren los consensos, no hay que esperar que otra autoridad nos diga, somos diputados, vámonos sentando, logren los consensos, podemos modificar todos los considerandos que queramos modificar compañeros, invitarlos a favor del dictamen y buscar la congruencia entre los compañeros diputados que cuando hay que subir a tribuna, podemos decir lo que está bien y lo que está mal pero con un abanico amplio pero si soy del PAN decir los defectos del PAN porque no creo que el PAN sea una santa palomita, porque ya vemos en qué condiciones está dejando el país y si realmente es un gobierno que ha beneficiado a la gente, pues en el

2012 van a triunfar en el 2012 creo que la gente de este país y de Colima es muy lista, los gobiernos que los beneficien a ese le dan el voto, ya veremos en el 2012 a quien se lo dan. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. En el uso de la voz el Diputado Milton de Alva.

DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Gracias Diputado Presidente, bueno, pues ya aumentó el calibre del disparo, luego entonces, aplicaremos la segunda Ley de Newton, la física, “toda acción corresponde una reacción de igual magnitud pero en sentido contrario”, aquí me queda claro que el compañero reconoce tácitamente que el no es congruente porque yo nunca lo he escuchado aquí en tribuna hablar mal, ni del PRI ni del Gobierno del Estado pues por lo tanto, creo que acepta que es incongruente y vean el tamaño de las incongruencias es un tema que acaba de salir en días pasados, la planta de tratamiento de aguas residuales, de esa que todos estamos pagando en la cual el recurso para la construcción de la misma, había sido dispuesto por el gobierno federal con ese que tanto critica nuestro compañero para que los colimenses no pagáramos lo que ahorita se está pagando y que recientemente se acaba de anunciar que van hacer un refinanciamiento, antes era de 20 años y ahora es para 30 años. Porque no se pueden hacer los pagos, siendo que había los recursos federales para que no hubiera esas cargas de ese tamaño es la incongruencia; y yo quiero decirles también que tuve la oportunidad de trabajar en el Gobierno Federal y me consta que se iniciaron los procesos y los sistemas de gestión de la calidad, esos sistemas que no hemos podido todavía implementar aquí en el Congreso que estamos en vías de desarrollar, apenas, y que en los municipios del gobierno del estado que han sido gobernados por el PAN se han iniciado y no porque nosotros seamos muy buenos como panistas sino que han demostrado que el estar certificado en los procesos y entrar en los sistemas de gestión, mejoran las administraciones, no se trata de tener demagogos al frente de una administración y de regalar y regalar y decir que en el 2012 que aquel que le haya dado más va a ganar, pero cada vez hasta los gobiernos priístas están aceptando meterse en el sistema de gestión de la calidad, y bueno esos son datos para que ustedes los valoren. Hasta 1999 se repartían 100 mil millones de pesos entre los estados, actualmente se reparten más de 630 mil millones de pesos, con los cuales todos los gobernadores de los estados en muchas ocasiones suelen saludar con sombrero ajeno, respecto a las plazas que también a mí me consta en el sector donde yo trabajé en lugar de aumentar se redujeron, todas aquellas plazas que se dejaban se congelaban y bueno ahí están los datos, para que vean como se estaba antes y cómo se está hoy. Y bueno pues ese paradigma de que si a E.U. le daba catarro y a nosotros nos daba una pulmonía pues ya está roto ese paradigma porque a ellos le ha dado catarro y pulmonía y nosotros hemos podido seguir gracias a las buenas finanzas del gobierno federal aunque aquí a mi compañero no le guste que hable bien del gobierno federal, entonces yo creo que México si ha cambiado favorablemente y hay buenas cuentas para todos los mexicanos. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Solicito a la Secretaria recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZALEZ. Por la negativa.

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, pasaremos a votar la Mesa Directiva. Alfredo a favor.

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZALEZ. López por la negativa.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Rojas a favor.

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 13 votos a favor del documento que nos ocupa.

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZALEZ. Le informo a usted Diputado presidente que se emitieron 6 votos en contra del documento que nos ocupa.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 13 votos el dictamen que nos ocupa. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En el uso de la voz el Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes.

DIP. VAZQUEZ MONTES. Con su permiso Diputado Presidente, con el permios de los compañeros de la Mesa Directiva, de los compañeros Diputados y público que nos compañía.

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

P r e s e n t e.

Los suscritos Diputados Héctor Raúl Vázquez Montes, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Mely Romero Celis, Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón A. Mancilla González, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Rigoberto Salazar Velasco, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los diputados Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y, el Diputado Único del Partido del Trabajo, Olaf Presa Mendoza de la

Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126, 127 y 128 de su Reglamento, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar el artículo 275 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la actualidad nuestro Estado se ha enfrentado a diversos conflictos ambientales como consecuencia de la tala indiscriminada de árboles, tal es el caso de la ocurrida durante el mes de mayo del año en curso, en un predio situado en la avenida Constitución de la ciudad de Colima, donde se derribaron árboles de gran tamaño, así como la lamentable reciente tala de 14 parotas sin autorización alguna de la autoridad correspondiente, en el predio ubicado al norte del Tercer Anillo Periférico, entre el camino a la Capacha y la prolongación de la avenida Ignacio Sandoval de esta ciudad.

Ante estos hechos, es necesario, por una parte, que las autoridades competentes apliquen las sanciones correspondientes a los responsables de llevar a cabo estas conductas sin la previa autorización, en caso de resultar procedentes y, por otro, que se adopten las medidas y acciones adecuadas con el fin de evitar e inhibir la realización de estas conductas, pues no podemos ni debemos permitir que las mismas se sigan repitiendo y se continúe dañando de manera considerable y en algunos casos de manera irreparable, el medio ambiente de nuestro Estado.

En este sentido, es obligación de nosotros como diputados, representantes de toda la población colimense, impulsar las reformas necesarias y adecuadas en los ordenamientos estatales con el principal objetivo de crear y establecer las disposiciones legales que favorezcan el libre ejercicio de sus derechos, resolviendo los conflictos u obstáculos que atenten contra el goce y disfrute de los mismos, como en este caso en particular, lo representa la tala indiscriminada de árboles por parte de empresas inmobiliarias que no están autorizadas para realizar estas conductas.

Hechos que, en gran medida, pueden ser evitados al fijar la obligación para que las personas físicas o morales interesadas en la realización de obra inmobiliaria, soliciten la *Evaluación del Impacto Ambiental* de dichas obras a la autoridad competente, ya sea la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado o los Ayuntamientos, y deban presentar esta evaluación como requisito previo para obtener la autorización del Programa Parcial de Urbanización por parte de los Ayuntamientos de la entidad, a través de sus Cabildos respectivos.

Esto en razón, de que en la actualidad, a excepción de lo establecido por el supuesto del segundo párrafo del artículo 46 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado, la autoridad municipal correspondiente carece de los elementos necesarios y suficientes para conocer y analizar las implicaciones ambientales inherentes a la obra inmobiliaria al momento de autorizar su Programa Parcial de Urbanización, toda vez que, cumplidos los requisitos exigidos por la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, el Ayuntamiento se encuentra obligado a emitir su resolución en relación al Programa Parcial de Urbanización, en razón de que la citada ley no prevé la obligación de requerir la *Evaluación del Impacto Ambiental* como requisito *sine qua non* para otorgar la autorización del referido Programa.

Con esta medida se pretende que el Ayuntamiento respectivo, de manera previa a la autorización del Programa Parcial de Urbanización, pueda conocer los efectos que sobre el medio ambiente y los recursos naturales pueden generar la realización de las obras o actividades a ejecutar, y declarar así, en el supuesto de que existan riesgos de afectación al medio ambiente, la negación de la autorización correspondiente del Programa, evitando así, desde ese momento, la degradación ambiental.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente Proyecto de

DECRETO:

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 275 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, para quedar como sigue:

ARTICULO 275.- La autorización del Programa Parcial de Urbanización requerirá del dictamen de vocación del suelo que para su efecto expida el Ayuntamiento, con la verificación de congruencia de éste con los programas de Desarrollo Urbano, según lo previsto en los artículos 127 al 140 de esta Ley, y *de la Evaluación del Impacto Ambiental realizada por la autoridad competente en los términos de lo establecido por los artículos 44, 45 y 46 de Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos y prevenir futuros daños al medio ambiente y los recursos naturales.*

T R A N S I T O R I O S

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe”.

Los suscritos Diputados solicitamos que la presente Iniciativa se turne a la Comisión correspondiente para proceder al análisis y elaboración del dictamen correspondiente. Atentamente. Colima, Col., a 11 de agosto de 2011. Los Diputados que suscriben el presente documento, es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Se toma nota y se instruye a la Secretaria le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se le solicita a la Diputada Mely pase a hacer el uso de la voz.

DIP. ROMERO CELIS. Gracias Diputado Presidente, compañero Diputados, y Diputadas, público que nos acompaña.

C. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

P r e s e n t e s .

Los suscritos Diputados Mely Romero Celis, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Montes, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Rigoberto Salazar Velasco, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y Olaf Presa Mendoza, Diputado Único del Partido del Trabajo de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que nos confieren la fracción I del artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 126, 127 y 128 de su Reglamento, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa de Ley con

Proyecto de Decreto relativa a reformar el segundo párrafo del artículo 211, del Código Penal para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Federal en su artículo 1o señala expresamente que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Carta Magna establece.

De igual forma, en el tercer párrafo del mismo precepto, se prevé que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley respectiva.

En este orden de ideas, es importante que los representantes populares propongan y realicen a las diferentes legislaciones, cuantas modificaciones sean necesarias, siempre que el objetivo sea garantizar un beneficio social, de protección a los derechos humanos de los mexicanos y de toda persona que transite por el territorio nacional.

Actualmente, las actividades delictivas en contra de menores de edad se han incrementado considerablemente en todo del país, y aunque en Colima las autoridades estatales y municipales se encuentran coordinadas y en constantes campañas para evitar que la niñez de la entidad sea objeto de delitos, deben precisarse en la legislación vigente los tipos penales así como la sanción respectiva.

En este sentido, los diputados que suscriben la presente iniciativa, con el fin de proteger a la niñez y juventud colimense, así como sancionar con mayor rigor aquellas conductas delictivas que les causen un daño en su integridad física y emocional, proponemos la reforma al segundo párrafo del artículo 211 del Código Penal vigente en la entidad, para dar mayor claridad y precisión a la tipificación de la hipótesis que prevé, así como a su sanción aplicable.

Es así que, el párrafo primero del citado precepto 211, tipifica la conducta del estupro, cuya hipótesis se establece para aquella persona que tenga cópula con persona mayor de catorce y menor de dieciocho años, obteniendo su consentimiento por medio de la seducción o engaño, es decir, aunque exista consentimiento de la persona menor, el mismo carece de toda validez, por encontrarse viciado de origen, por razón del engaño o seducción del que se vale el sujeto activo del delito.

Mientras que en su segundo párrafo, se señala que no se consideran como estupro, los casos en que la relación sea producto del comercio carnal.

En esa tesitura, el delito de estupro es consecuencia de una relación y consentimiento viciados, que surgen a través del engaño y la seducción, motivo por el cual debe sancionarse la conducta del sujeto activo, independientemente de las demás circunstancias o condiciones de la relación con la parte pasiva.

Sin embargo, el párrafo segundo del citado artículo 211, no especifica el delito que se atribuye cuando la relación sea producto del comercio carnal, generando así ambigüedades y dificultades para las autoridades competentes encargadas de la investigación, persecución y sanción del delito, luego entonces deberán encuadrar, bajo su criterio, esa conducta en otro tipo penal, lo que genera incertidumbre jurídica en las partes involucradas.

Es así, que se propone reformar el segundo párrafo del artículo 211, del Código penal vigente en la entidad, para especificar bajo qué tipo penal se sancionará el hecho de que una persona tenga cópula con persona mayor de catorce y menor de dieciocho años, como producto del comercio carnal; por ello, es que se plantea que dicha relación sea sancionada en términos de lo previsto actualmente para el delito de corrupción y explotación de personas.

La anterior propuesta obedece, a que el tipo penal de corrupción y explotación de personas señalado por el artículo 154 del Código Penal del Estado, sanciona a quien obligue, induzca, procure, o facilite a una persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o no se pueda resistir a éste, a realizar entre otros actos, el exhibicionismo corporal, la prostitución o cualquier otras prácticas sexuales, es decir, si la relación carnal del sujeto activo con una persona menor de edad, es por razones de comercio carnal, dicha conducta encuadra perfectamente en el delito descrito, toda vez que la principal característica es que la víctima no tenga 18 años o más, así como la inducción para la realización de la cópula.

Lo anterior, cobra vigencia toda vez que, el segundo párrafo del artículo 211 del Código Punitivo vigente, se concreta a señalar que no se considera como estupro, los casos en que la relación sea producto del comercio carnal, lo que ha venido generando impunidad por la falta de claridad y precisión del precepto jurídico, toda vez que las autoridades al tratar de aplicarlo en la administración de justicia, pudiera considerarse tal hipótesis como una excluyente de responsabilidad genérica en el delito de estupro, lo que no significa, que no se pueda sancionar la conducta reprochable de tener una relación carnal con una menor de edad por razones de comercio carnal, por el delito que se configure, y, que en el caso concreto, resulta ser el tipo penal de corrupción y explotación de personas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de

D E C R E T O:

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 211, del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar de la siguiente manera:

ARTÍCULO 211.-

Los casos en que la relación sea producto del comercio carnal, se sancionarán conforme a lo previsto para el delito de corrupción y explotación de personas, sancionado por el artículo 154 de este Código.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”

Los suscritos Diputados solicitamos que la presente Iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos de los artículos 86 y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el 128 de su Reglamento. Atentamente. Colima, Col., 11 de Agosto de 2011. Los Diputados y Diputadas antes citados, es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Se toma nota y se instruye a la Secretaria lo turne a las comisiones correspondientes. En el mismo punto del orden del día en el uso de la voz el Diputado Salvador Fuentes Pedroza.

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

P r e s e n t e

DIP. SALVADOR FUENTES PEDROZA y demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre y

Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 37, fracción I, de la Constitución del Estado, 22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de esta Asamblea la **iniciativa con Proyecto de Decreto que deroga los incisos A y B del artículo Quinto Transitorio de las Leyes de Hacienda para los Municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez** al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que las Leyes de Hacienda Municipales son un instrumento que junto con las Leyes de Ingresos sirven para recaudar fondos económicos para el buen funcionamiento de los Municipios, sin embargo, debe cuidarse que dicha recaudación no afecte a la sociedad Colimense que pudiera darle un golpe fuerte al bolsillo de los mismos, tal como ocurre actualmente en todas las Leyes de Hacienda de los diez municipios del Estado de Colima, y esto ocurre en la aplicación del artículo quinto transitorio en el que para allegarse de mayores recursos provenientes del Impuesto Predial, al incrementarse los factores de 1.04 a 1.06 y hasta de 1.08 a 1.10 cuando el valor catastral es de \$0.00 a \$264,000.00 donde se aplicaran las tasas y tarifas previstas en el artículo 13 fracciones I, II y III del mismo cuerpo normativo, determinándose también que en no puede ser mayor del que resulte de multiplicar el factor 1.06 por el impuesto anual correspondiente al año inmediato anterior, tomando como base el valor catastral del predio vigente en el último bimestre de dicho año y la misma regla se aplicará a los predios catastrales que rebasen de \$264,000.01 pero con el factor 1.10, sin embargo, esto no resulta aplicable en los siguientes incisos:

- a) **Cuando cambie la base del impuesto predial en los términos del Artículo 9 de este ordenamiento.**
- b) **Los que sean objeto de transmisión patrimonial.**
- c) **Los que tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o más.**

Para que se entienda cuando no aplica los supuestos de protección a la sociedad que fue la reforma que se llevo a cabo el día 22 de diciembre de 2006 mediante decreto número 38, que justificaba dicha medida de protección, no entrarían todos los que estuvieran en el hecho del artículo 9 que dispone lo siguiente:

ARTICULO 9º.- La base del impuesto predial se cambiará:

I. Cuando en los inmuebles se constituya o disuelva el régimen de copropiedad o bien se subdividan, fusionen, amplíen, construyan, reconstruyan, demuelen, fraccionen o relatifiquen y en los demás casos previstos en la Ley de Catastro como causales de valuación y revaluación. En estos casos, la autoridad competente que emita la autorización respectiva, deberá comunicarlo a la autoridad catastral municipal para efectos del pago del impuesto que resulte, que se aplicará a partir del bimestre siguiente, así como de la asignación de clave catastral, en su caso;

II. Cuando la autoridad competente fije el valor catastral a los inmuebles que hubieren estado tributando sobre una base provisional.

III.

En los casos a que se refiere este artículo, la autoridad catastral procederá a la valuación y revaluación correspondiente, en la forma y términos previstos por la Ley de Catastro.

Efectivamente, como ya quedó puntualizado, en su momento, cuando la Comisión de Hacienda de esta soberanía hizo el razonamiento para hacer las modificaciones a leyes en comento, argumentó que con el objeto de atender el reclamo de las tesorerías municipales, para allegarse de mayores recursos provenientes del Impuesto Predial, solicitó que se incrementaran los valores que sirven de base para la cuantificación de los cobros, sin embargo, dicha Comisión, en consenso con las diversas fracciones parlamentarias así acreditadas en ésta Soberanía, concordaron en cuidar la economía de las familias, por lo que se consideró que dichas peticiones que a pesar de ser

válidas, se debía establecer un equilibrio entre ambos actores, para que el incremento que se propuso, ayudara a las haciendas municipales sin afectar la economía de los habitantes, motivo por el cual, se decidió incrementar los factores de 1.04 a 1.06 y de 1.08 a 1.10, previstos en el ARTICULO QUINTO transitorios, que establece el candado para que solo se pueda incrementar el factor mencionado en relación al ejercicio fiscal anterior.

El espíritu del legislador fue claro, en el caso de las viviendas que venían tributando con una base gravable anterior a la de la reforma que ese estableció en el citado decreto, seguirían pagando la misma cantidad que el año inmediato anterior, pero con el incremento que resulte de multiplicar el factor de 1.10 por el impuesto anual correspondiente al año inmediato anterior, que equivale aproximadamente a un 10%, sin embargo, se dejó abierta la posibilidad en el artículo 9, de que aquellos inmuebles en los que se constituyera o disolviera el régimen de copropiedad o bien se subdividiera, fusionara, ampliara, construyera, reconstruyera, demoliera, fraccionara o relotificara y en los demás casos previstos en la Ley de Catastro como causales de valuación y revaluación, pues precisamente se hiciera la revaluación correspondiente, lo que ocasionó que muchas familias que tradicionalmente pagaban una cantidad por concepto de predial, se disparara el cobro hasta un 1000 %, lo que evidentemente les causó un perjuicio en su economía, no cumpliéndose así con el espíritu que la aludida reforma en su momento planteó. Lo mismo sucedió con las transmisiones patrimoniales, entendiéndose como tales compraventas, donaciones, entre otras, en las que el anterior dueño pagaba una cantidad de predial y el nuevo dueño, por el simple hecho de que haya pasado a su propiedad, ahora debe pagar hasta un 1000 % de incremento.

Luego entonces, para subsanar esta situación que afecta a muchas personas, se propone eliminar los incisos a y b del artículo Quinto Transitorio de las Leyes de Hacienda para los diez Municipios de la entidad, lo que traería consigo un beneficio a la ciudadanía. Cabe hacer que esta reforma planteada en la presente iniciativa, solo aplicaría a las viviendas que ya existían previamente a las reformas del 22 de diciembre de 2006, por lo que las que existen a partir de esa fecha tributan conforme a lo previsto en los numerales invocados.

Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de

D E C R E T O

ARTÍCULO PRIMERO.- Se deroga los incisos A y B del artículo Quinto Transitorio de la Ley de Hacienda para el Municipio de Armería, para quedar en los siguientes términos:

EL ARTICULO QUINTO queda igual, solamente lo previsto, solamente se derogan el inciso a) el inciso b) y el inciso c) queda igual y así sucesivamente se va exponiendo la derogación en todas la Leyes de Hacienda de los Municipios, de los 10 municipios del Estado de Colima.

TRANSITORIO:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. Signan la presente iniciativa su servidor Dip. Salvador Fuentes Pedroza, Dip. Raymundo González Saldaña, Dip. Luis Alfredo Díaz Blake, Dip. Milton de Alva Gutiérrez, Dip. Leonel González Valencia, Dip. Patricia Lugo Barriga y Dip. José Luis López González, solicitar Diputado Presidente que de manera íntegra se inserte en el diario de los debates y de igual forma solicitar que la presente iniciativa se turne a las Comisiones correspondiente para su análisis y dictaminación. Es cuanto Diputado Presidente.

...SE INSERTA LA INICIATIVA INTEGRAMENTE....

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

Presente

DIP. SALVADOR FUENTES PEDROZA y demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción I, de la Constitución del Estado, 22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de esta Asamblea la **iniciativa con Proyecto de Decreto que deroga los incisos A y B del artículo Quinto Transitorio de las Leyes de Hacienda para los Municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez** al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que las Leyes de Hacienda Municipales son un instrumento que junto con las Leyes de Ingresos sirven para recaudar fondos económicos para el buen funcionamiento de los Municipios, sin embargo, debe cuidarse que dicha recaudación no afecte a la sociedad Colimense que pudiera darle un golpe fuerte al bolsillo de los mismos, tal como ocurre actualmente en todas las Leyes de Hacienda de los diez municipios del Estado de Colima, y esto ocurre en la aplicación del artículo quinto transitorio en el que para allegarse de mayores recursos provenientes del Impuesto Predial, al incrementarse los factores de 1.04 a 1.06 y hasta de 1.08 a 1.10 cuando el valor catastral es de \$0.00 a \$264,000.00 donde se aplicaran las tasas y tarifas previstas en el artículo 13 fracciones I, II y III del mismo cuerpo normativo, determinándose también que en no puede ser mayor del que resulte de multiplicar el factor 1.06 por el impuesto anual correspondiente al año inmediato anterior, tomando como base el valor catastral del predio vigente en el último bimestre de dicho año y la misma regla se aplicará a los predios catastrales que rebasen de \$264,000.01 pero con el factor 1.10, sin embargo, esto no resulta aplicable en los siguientes incisos:

- d) **Cuando cambie la base del impuesto predial en los términos del Artículo 9 de este ordenamiento.**
- e) **Los que sean objeto de transmisión patrimonial.**
- f) **Los que tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o más.**

Para que se entienda cuando no aplica los supuestos de protección a la sociedad que fue la reforma que se llevo a cabo el día 22 de diciembre de 2006 mediante decreto número 38, que justificaba dicha medida de protección, no entrarían todos los que estuvieran en el hecho del artículo 9 que dispone lo siguiente:

ARTICULO 9º.- La base del impuesto predial se cambiará:

- IV. Cuando en los inmuebles se constituya o disuelva el régimen de copropiedad o bien se subdividan, fusionen, amplíen, construyan, reconstruyan, demuelen, fraccionen o relotifiquen y en los demás casos previstos en la Ley de Catastro como causales de valuación y revaluación. En estos casos, la autoridad competente que emita la autorización respectiva, deberá comunicarlo a la autoridad catastral municipal para efectos del pago del impuesto que resulte, que se aplicará a partir del bimestre siguiente, así como de la asignación de clave catastral, en su caso;

V. Cuando la autoridad competente fije el valor catastral a los inmuebles que hubieren estado tributando sobre una base provisional.

VI.

En los casos a que se refiere este artículo, la autoridad catastral procederá a la valuación y revaluación correspondiente, en la forma y términos previstos por la Ley de Catastro.

Efectivamente, como ya quedó puntualizado, en su momento, cuando la Comisión de Hacienda de esta soberanía hizo el razonamiento para hacer las modificaciones a leyes en comento, argumentó que con el objeto de atender el reclamo de las tesorerías municipales, para allegarse de mayores recursos provenientes del Impuesto Predial, solicitó que se incrementaran los valores que sirven de base para la cuantificación de los cobros, sin embargo, dicha Comisión, en consenso con las diversas fracciones parlamentarias así acreditadas en ésta Soberanía, concordaron en cuidar la economía de las familias, por lo que se consideró que dichas peticiones que a pesar de ser válidas, se debía establecer un equilibrio entre ambos actores, para que el incremento que se propuso, ayudara a las haciendas municipales sin afectar la economía de los habitantes, motivo por el cual, se decidió incrementar los factores de 1.04 a 1.06 y de 1.08 a 1.10, previstos en el ARTICULO QUINTO transitorios, que establece el candado para que solo se pueda incrementar el factor mencionado en relación al ejercicio fiscal anterior.

El espíritu del legislador fue claro, en el caso de las viviendas que venían tributando con una base gravable anterior a la de la reforma que ese estableció en el citado decreto, seguirían pagando la misma cantidad que el año inmediato anterior, pero con el incremento que resulte de multiplicar el factor de 1.10 por el impuesto anual correspondiente al año inmediato anterior, que equivale aproximadamente a un 10%, sin embargo, se dejó abierta la posibilidad en el artículo 9, de que aquellos inmuebles en los que se constituyera o disolviera el régimen de copropiedad o bien se subdividiera, fusionara, ampliara, construyera, reconstruyera, demoliera, fraccionara o relotificara y en los demás casos previstos en la Ley de Catastro como causales de valuación y revaluación, pues precisamente se hiciera la revaluación correspondiente, lo que ocasionó que muchas familias que tradicionalmente pagaban una cantidad por concepto de predial, se disparara el cobro hasta un 1000 %, lo que evidentemente les causó un perjuicio en su economía, no cumpliéndose así con el espíritu que la aludida reforma en su momento planteó. Lo mismo sucedió con las transmisiones patrimoniales, entendiéndose como tales compraventas, donaciones, entre otras, en las que el anterior dueño pagaba una cantidad de predial y el nuevo dueño, por el simple hecho de que haya pasado a su propiedad, ahora debe pagar hasta un 1000 % de incremento.

Luego entonces, para subsanar esta situación que afecta a muchas personas, se propone eliminar los incisos a y b del artículo Quinto Transitorio de las Leyes de Hacienda para los diez Municipios de la entidad, lo que traería consigo un beneficio a la ciudadanía. Cabe hacer que esta reforma planteada en la presente iniciativa, solo aplicaría a las viviendas que ya existían previamente a las reformas del 22 de diciembre de 2006, por lo que las que existen a partir de esa fecha tributan conforme a lo previsto en los numerales invocados.

Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de

D E C R E T O

ARTÍCULO PRIMERO.- Se deroga los incisos A y B del artículo Quinto Transitorio de la Ley de Hacienda para el Municipio de Armería, para quedar en los siguientes términos:

ARTICULO QUINTO.- ...

....

Lo previsto en este artículo, no será aplicable en los siguientes casos:

- a) Derogado.
- b) Derogado.
- c) **Los que tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o más.**

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga los incisos A y B del artículo Quinto Transitorio de la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima, para quedar en los siguientes términos:

ARTICULO QUINTO.- ...

....

Lo previsto en este artículo, no será aplicable en los siguientes casos:

- a) Derogado.
- b) Derogado.
- c) **Los que tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o más.**

ARTÍCULO TERCERO.- Se deroga los incisos A y B del artículo Quinto Transitorio de la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala, para quedar en los siguientes términos:

ARTICULO QUINTO.- ...

....

Lo previsto en este artículo, no será aplicable en los siguientes casos:

- a) Derogado.
- b) Derogado.
- c) **Los que tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o más.**

ARTÍCULO CUARTO.- Se deroga los incisos A y B del artículo Quinto Transitorio de la Ley de Hacienda para el Municipio de Coquimatlán, para quedar en los siguientes términos:

ARTICULO QUINTO.- ...

....

Lo previsto en este artículo, no será aplicable en los siguientes casos:

- a) Derogado.
- b) Derogado.
- c) **Los que tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o más.**

ARTÍCULO QUINTO.- Se deroga los incisos A y B del artículo Quinto Transitorio de la Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc, para quedar en los siguientes términos:

ARTICULO QUINTO.- ...

....

Lo previsto en este artículo, no será aplicable en los siguientes casos:

- a) Derogado.
- b) Derogado.
- c) Los que tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o más.

ARTÍCULO SEXTO.- Se deroga los incisos A y B del artículo Quinto Transitorio de la Ley de Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán, para quedar en los siguientes términos:

ARTICULO QUINTO.- ...

....

Lo previsto en este artículo, no será aplicable en los siguientes casos:

- a) Derogado.
- b) Derogado.
- c) Los que tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o más.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se deroga los incisos A y B del artículo Quinto Transitorio de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, para quedar en los siguientes términos:

ARTICULO QUINTO.- ...

....

Lo previsto en este artículo, no será aplicable en los siguientes casos:

- a) Derogado.
- b) Derogado.
- c) Los que tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o más.

ARTÍCULO OCTAVO.- Se deroga los incisos A y B del artículo Quinto Transitorio de la Ley de Hacienda para el Municipio de Minatitlán, para quedar en los siguientes términos:

ARTICULO QUINTO.- ...

....

Lo previsto en este artículo, no será aplicable en los siguientes casos:

- a) Derogado.
- b) Derogado.
- c) Los que tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o más.

ARTÍCULO NOVENO.- Se deroga los incisos A y B del artículo Quinto Transitorio de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, para quedar en los siguientes términos:

ARTICULO QUINTO.- ...

....

Lo previsto en este artículo, no será aplicable en los siguientes casos:

- a) Derogado.

- b) Derogado.
- c) Los que tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o más.

ARTÍCULO DECIMO.- Se deroga los incisos A y B del artículo Quinto Transitorio de la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, para quedar en los siguientes términos:

ARTICULO QUINTO.- ...

....

Lo previsto en este artículo, no será aplicable en los siguientes casos:

- a) Derogado.
- b) Derogado.
- c) Los que tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o más.

TRANSITORIO:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

ATENTAMENTE

Colima, Col., 11 de Agosto de 2011.

**EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL**

DIP. SALVADOR FUENTES PEDROZA

DIP. RAYMUNDO GONZALEZ SALDAÑA

DIP. LUIS ALFREDO DÍAZ BLAKE

DIP. MILTON DE ALVA GUTIERREZ

DIP. LEONEL GONZALEZ VALENCIA

DIP. PATRICIA LUGO BARRIGA

DIP. JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZALEZ

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Se toma nota y se instruye a la Secretaria la turne a la Comisión correspondiente. En el mismo punto del orden del día, en el uso de la voz al Dip. Profesor Nicolás Contreras.

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras integrantes de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas, Diputados y público que generosa y amablemente nos hace el favor de acompañarnos. Solicitarle su anuencia diputado presidente son 2 los asuntos que deseo tratar y le solicito sean de manera consecutiva.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Adelante Diputado.

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias. El primero es en relación a un punto de acuerdo que tiene como origen, el que un grupo de jóvenes organizados en una asociación civil, nos visitaron la semana pasada y nos hacían esta propuesta que en lo particular a mí me pareció interesante y sobre todo viable y ellos nos proponen el que podamos emitir de aquí del Congreso un exhorto a la Secretaría de Educación, al Gobierno del Estado, a la Secretaría General de Gobierno para que los agentes de tránsito de los 10 ayuntamientos municipales, a los integrantes de la Policía Estatal Preventiva, a los Profesores, Catedráticos, Maestros, Educadoras, se les pueda impartir cursos de primeros auxilios, ellos nos hacían notar que el número de accidentes automovilísticos en Colima, se ha incrementado de manera muy marcada y que quienes llegan primero al lugar del accidente son los agentes de tránsito o son los integrantes de la Policía Estatal, pero que tardan los socorristas o los integrantes de la Cruz Roja en llegar de 20 a 25 minutos y mientras, si en el accidente hubo algún lesionado en una coalición, el problema es que no recibe el accidentado ninguna atención, ni siquiera de primeros auxilios; entonces, se me hace una propuesta interesante, viable inclusive y sobre todo para los que somos profesores, es muy común que en la escuela haya algún accidente y que los profesores no tengamos ningún conocimiento para poder atender este tipo de emergencias. Antes de elaborar el punto de acuerdo que voy a poner a consideración ante ustedes, hablé con los directivos de la Cruz Roja para ver si ya existía algún programa de este tipo y no proponer cosas que ya existieran, platicando con el Subdirector que se llama Fernando Michel Palomares, me hacía notar él que hay de manera eventual, la Secretaría de Educación solicita cursos de manera eventual y que algunos Ayuntamientos también lo han hecho, pero que no hay un programa permanente de capacitación, de orientación para los Agentes de Tránsito, para la Policía Estatal, para los Profesores. Merced a esto presento ante ustedes el siguiente Punto de Acuerdo. Esperando la sensibilidad y el apoyo de ustedes para que se pueda aprobar.

**CIUDADANO PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO:**

En ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 126, 127 y 130 del Reglamento de dicha ley, el suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presenta el siguiente Punto de Acuerdo, de conformidad con los siguientes

FUNDAMENTOS

1°.- La atención inmediata y efectiva, mediante primeros auxilios, a una persona que sufre un accidente, un atentado o simplemente es objeto de una eventualidad que pone en riesgo su vida y su salud, es importantísima y fundamental para salvar su vida o, al menos, para mantenerla con ella en tanto es atendida por los servicios de urgencia, de la Cruz Roja o por paramédicos públicos o privados.

En la mayoría de los casos, los primeros que atienden a esas víctimas son los elementos de seguridad pública, de policía preventiva, agentes de tránsito y elementos de protección civil, que por la naturaleza de sus funciones, son quienes acuden de inmediato a atender a dichas personas. En otras situaciones, muy comunes también, son los profesores, catedráticos y maestros de niños, jóvenes o de personas adultas, quienes por su relación cercana a su alumnado, se colocan en la primera línea de auxilio.

2°.- Por ello, resulta muy importante que como una medida de prevención y de emergencia, los elementos antes descritos, agentes de seguridad, de policía preventiva, de tránsito, de protección civil y profesores, cuenten con la preparación necesaria en materia de primeros auxilios, ya que, en un momento dado, pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte.

De ahí que es primordial e impostergable establecer un programa permanente de capacitación en la materia, destinada a esos agentes colectivos, que asegure que cuenten con la preparación suficiente para hacer frente a una emergencia, con la efectividad, control de emociones y rapidez que logren el objetivo de atender con éxito a una persona que ha sido objeto de un accidente o de un transtorno inesperado en su salud.

3°.- Es por esa razón, que considero conveniente que esta Honorable Legislatura, se una al suscrito y apruebe un Punto de Acuerdo, para exhortar de manera respetuosa, pero firme, al Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Educación y de la Secretaría General de Gobierno, así como a los Honorables Ayuntamientos de la Entidad, para que intensifiquen sus acciones de capacitación y establezcan efectivamente este programa para asegurar que, los agentes y profesores arriba mencionados, saben y dominan el manejo de primeros auxilios.

Por tales consideraciones, propongo a esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO:

ÚNICO.- El Honorable Congreso del Estado, formula un atento pero firme exhorto, al Gobierno del Estado, por conducto de las Secretarías General de Gobierno y de Educación, así como a los Honorables Ayuntamientos de la Entidad, para que establezcan y pongan en práctica, a la brevedad posible, un programa permanente de gobierno, orientado a brindar capacitación efectiva en el manejo adecuado de primeros auxilios, a elementos de seguridad pública, de policía preventiva, de protección civil, agentes de tránsito, profesores y maestros de todos los niveles educativos, como medida preventiva para salvar la vida de las personas y alumnos que sufren un accidente o son objetos de un transtorno inesperado en su salud.

Comuníquese el presente Acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los ciudadanos Presidentes Municipales para que provean oportunamente a su debido cumplimiento e informen de ello a esta Soberanía Popular.

Antes de concluir con este primer asunto Dip. Presidente compañeros, la semana pasada leí en la prensa que la U. de C. inició con un programa de este tipo, ofreciendo en el Campus Central de sus instalaciones cursos de primeros auxilios para la ciudadanía en general, particularmente para sus profesores, este punto de acuerdo se sumaría a instituciones como esta la U. de C. que ya tienen pues de entrada esa iniciativa y ya echaron a andar programas que tratan de darle cumplimiento al asunto en comento. Es cuanto Diputado Presidente del primer asunto que solicité hacer uso de la voz.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la asamblea el Punto de Acuerdo que presentó el Dip. Nicolás Contreras Cortés, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse al artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala que hablan por una sola vez hasta 4 Diputados 2 en pro y 2 en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.

DIP. RÍOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente, también vemos el punto de acuerdo que hasta el Diputado Enrique inicio con el segundo apellido, yo decirles que yo veo con buenos ojos, yo le comentaba ahorita al Dip. Salvador, que en la Secretaría de Educación se está haciendo a nivel administrativo, nosotros estamos acudiendo y siendo partícipes no veo mal, que se haga en la totalidad a los maestros y adicional al personal de seguridad, lo digo además con conocimiento de causa, porque tenemos ahí vinculación y creo que todos los esfuerzos que se puedan hacer en materia de protección civil sean bienvenidos y además es importante tener congruencia de lo que nosotros hemos dicho de que hay que todos saber qué hacer en el caso de una contingencia, no se lo podemos dejar nada más a las instancias que ven esto como es Cruz Roja, también las instancias de Protección Civil, la ciudadanía en general independientemente de su formación maestros o no maestros, deberíamos tener acceso a saber de protección Civil, por lo mismo estamos con la Ley para la Protección Civil que va encaminado justo a lo que se tocó hace un rato, yo por mi parte estaría en acuerdo por lo que se tocó hace un momento, también reconocer los esfuerzos que se vienen haciendo, reconociendo también lo mucho que han hecho las instancias y que se ha avanzado, me ha tocado insistir ir a muchos lugares con la intención de la capacitación y también veo que es necesario en este caso ojalá se pueda no solamente hacer en un área en específico sino que se pudiera ampliar a lo más que se pudiera para tener como consecuencia gente más informada y capaz de poder atender cualquier contingencia lo hemos dicho en muchas ocasiones la diferencia de que algo no sea tan grave en la integridad física independientemente de lo material a la información y a la capacitación que tengamos sobre la prevención en materia de protección civil, es cuanto Diputado Presidente, esa sería mi opinión por la firme convicción como fracción de que nosotros le vamos apostar lo que vaya en beneficio y todo lo que veamos que tiene viabilidad y este es un tema que veo que tiene viabilidad. Es cuánto.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica del documento que nos ocupa.

DIP. SRIO.LÓPEZ GONZALEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse el documento presentado por el Dip. Nicolás Contreras Cortés favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el Dip. Profr. Nicolás Contreras Cortés, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente, en el mismo punto del orden del día el Profesor Nicolás.

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado Presidente. El segundo asunto por el cual un servidor está aquí es el que tiene que ver con que a últimas semanas, a últimas fechas, este Congreso del Estado a Estado de que hablar en la prensa a nivel local y lo digo en el buen sentido y el comentario va en el buen sentido. Se abrió un período donde a través de la Comisión de Gobierno Interno aprobaron que a partir del 19 de junio no sesionáramos hasta el pasado martes. Se nos argumentó y se explicó en la prensa el porqué, que era una facultad de la Comisión y se fundamentó la misma, fuimos objeto de señalamientos y de críticas, seguramente ustedes lo abran de haber percibido en la prensa, cómo en un periodo ordinario de sesiones, se abre un receso, se abre un periodo también de vacaciones, inclusive hubo declaraciones de algunos de ustedes aceptando que había un periodo de receso pero que también en ese receso nos habíamos dado el tiempo de analizar este proyecto de Código Electoral y sí lo hicimos, son 137 cuartillas, yo el lunes le entregué a la Dip. Itzel mi análisis, en el mismo análisis tuvimos el apoyo de los asesores jurídicos y nos llevamos varias horas y varios días para poderlo analizar, le propusimos inclusive la modificación de algunas cuestiones y las observaciones más de 400 que le encontramos a este proyecto, pero no dejó de ser para la ciudadanía y le quedó un mal sabor de boca a la ciudadanía esa percepción y esas críticas de las cuales fuimos objeto como Congreso, no como Comisión de Gobierno Interno, no como Diputados de Acción Nacional, sino como Congreso en general, ustedes hace algún tiempo, para ser más exactos el 30 de marzo del año pasado, hicieron una propuesta básicamente en el mismo sentido, pero la hicieron en el Pleno, en esta ocasión ya no la hicieron en el Pleno, lo hicieron en una reunión de Comisión de Gobierno Interno, y porqué abordo el asunto, porque es importante que el asunto se aclare, el asunto es el siguiente: se ha venido también manejando en los medios que esos días fueron aprovechados por los Diputados de esta Legislatura para viajar, para salir fuera del país inclusive se manejan hasta los países a donde fueron según esas versiones, algunos dicen que se fueron unos a Grecia y algunos otros dicen que se fueron a España, a Europa, eso es lo que se está diciendo, a lo mejor ustedes no lo han escuchado pero eso se está comentando. Hace algunas semanas, este Congreso se pronunció porque la Presidenta Municipal de la Villa aclarara si había salido o no del país en tiempo del trabajo o en un período del trabajo, inclusive hubo un punto de acuerdo que impulsaron los compañeros del PRI y que se aprobó para que la Presidenta inclusive presentara su pasaporte y que con ese pasaporte se iba aclarar si había salido o no había salido del país, fue un tema que ocupó su energía, fue un tema que ocupó su interés y que se estaba ventilando. En virtud de esos comentarios que se están haciendo y que inclusive ya hasta se nos está tildando pues de que somos diputados este, que nos gusta mucho vacacionar, que somos viajeros frecuentes, yo traigo aquí a la más alta tribuna de este estado, que es el Congreso, mis pasaportes y las copias de los mismos, para que quede muy puntualmente claro, que si eso que se está mencionando, que se está ventilando, es cierto, Nicolás Contreras no salió del Estado, no salí del país, pudiera parecer trivial pero así como se ríen algunos, así me reía yo cuando ustedes se obstinaban en estar insistiendo que la Presidenta Municipal de la Villa aclarara, ahora ese señalamiento que se nos hace de que salimos del país a vacacionar en periodo ordinario de sesiones si es delicado, si es grave, porqué, porque para eso tenemos un período de receso y ese período empieza en septiembre, que hayamos salido, dinero que hayamos utilizado de quien haya sido, que es de ustedes que bueno, pero que hayamos hecho, si es que se hizo en periodo ordinario de sesiones, eso es delicado. En virtud de lo anterior y porque es un señalamiento de la ciudadanía un servidor presenta y aquí está a la orden de quien lo quiera corroborar mi pasaporte y las fechas en que un servidor ha salido fuera del país han sido en el 2005, 2006, 2007 y 2008, pero un servidor no ha salido del país a partir del año 2008, aquí están los originales uno ya está vencido por eso traigo los 2 y aquí está la visa, y aquí están las copias, yo lo digo y lo digo fuerte y lo digo aquí, porque no es cualquier cosa el señalamiento que se nos está haciendo, el hecho de que se diga que algunos de nosotros salimos es una cosa delicada y en lugar de darnos risa nos debería de dar coraje y preocuparnos y por qué no, demostrarle a la ciudadanía que lo que están diciendo es mentira y lo que nosotros le exigimos a la Presidenta Municipal de la Villa en su momento ahora nosotros hacerlo porque si no entonces si tendríamos doble moral exigimos una cosa y a la mera hora, somos otra, entonces yo con todo respeto hago el señalamiento y bueno, reitero, más que dar risa ocuparnos, lo que deberíamos es de ocuparnos en el asunto y si hay fondo aceptar y sino demostrar que esos rumores hay son mentira. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. En el mismo punto del orden del día en el uso de la voz el Dip. Raymundo González Saldaña.

DIP. GONZALEZ SALDAÑA. Gracias Presidente. Saludo rápidamente a la gente que nos acompaña en este Recinto, y mencionar que traigo Presidente 2 puntos, que quisiera uno enviar a Comisión y otro someterlo aquí a votación, nada mas que por ahí me faltan algunas hojas del acuerdo, el acuerdo que me están recabando las firmas, pero si me permite Presidente darle lectura a esta iniciativa que es un proyecto de decreto para reformar la Ley de Hacienda para que sea turnada a comisiones.

EL DIPUTADO RAYMUNDO GONZALEZ SALDAÑA y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea una **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR Y ADICIONAR LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE COLIMA**, misma que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Tal y como lo hemos señalado en diferentes ocasiones, es importante reconocer la responsabilidad social y el civismo de la sociedad colimense que día a día hace el esfuerzo por buscar y conseguir el sustento familiar y a la par, cumplir con sus obligaciones fiscales. En ese sentido, el día de hoy se propone una prórroga en el pago del canje de placas de circulación de los vehículos automotores, hasta el mes de diciembre del presente año, para estar en sintonía con la iniciativa presentada recientemente por el diputado Milton de Alva Gutiérrez, mediante la cual solicitó se prorrogara hasta el mes de diciembre el pago del impuesto de la tenencia en beneficio de un gran número de usuarios de vehículos automotores. Ello en virtud de que a pesar de que en reiteradas ocasiones lo hemos señalado, todavía existe una imprecisión respecto al pago del canje de placas y el pago de la tenencia, haciendo hincapié en que, no obstante los diversos señalamientos que los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional han hecho en esta tribuna, se sigue presentando la queja de algunos ciudadanos que acuden a las ventanillas de pago, porque les argumentan que el sistema reconoce sólo pagos globales, esto es, tenencia y canje de placas juntos.

Por otro lado, mediante esta iniciativa igualmente se propone el otorgamiento de un descuento del 100 % sobre el canje de placas, también conocido como reemplacamiento, a aquellas personas que trabajan y que menos recursos económicos tienen, cuyos vehículos son utilizados como herramientas para desempeñar sus trabajos y que su valor comercial no excede de 50 mil pesos. Siendo congruentes de esta manera con el espíritu de la reforma a la Ley de Hacienda Estatal que aprobó este H. Congreso este año, mediante la cual se otorgaron estímulos fiscales a los contribuyentes, cabe mencionar que las personas que ya hicieron el pago correspondiente y que se encuentran en el supuesto de esta reforma, se propone reintegrarles el pago del derecho que ya hayan realizado, es decir, se les devolverá el dinero del pago del canje de placas que ya hayan efectuado.

Por todo lo antes expuesto y fundado someto a consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de:

D E C R E T O

ARTICULO PRIMERO: Se reforma y se adiciona la fracción IV del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 50.- . . .

De la I a la III . . .

IV.- . . .

Los derechos consignados en los incisos a), b), c), d), e), f), e i) anteriores, tratándose de canje o renovación, por término del período de vigencia, deberán pagarse durante los meses de enero a **diciembre**. Las personas que acrediten ser jubilados o pensionados por una institución pública, discapacitados acreditados por una institución de salud pública y adultos en plenitud, tendrán derecho a un descuento del 50 por ciento de la cuota establecida en los incisos a), c), d), f), g) e i), respecto a un vehículo que tenga en propiedad.

Así mismo, respecto de los vehículos cuyo valor comercial no exceda de \$50,000.00, sin incluir el impuesto al valor agregado, sus propietarios tendrán derecho a un descuento del 100 % de la cuota establecida en los incisos a), c), d), f), g) e i). Para tener derecho a este descuento, deberán demostrar ante la Secretaría de Finanzas que el vehículo es su herramienta de trabajo, en la inteligencia que no se entiende como tal aquel que utiliza para trasladarse a su lugar de trabajo, sino aquel que resulte indispensable para la realización de sus actividades de trabajo, quedando a juicio de la Secretaría de Finanzas solicitar lo necesario para acreditar lo anterior.

El descuento a que hace referencia el párrafo anterior sólo aplica en los casos de canje de placas, por lo tanto no aplica a los vehículos de cualquier tipo que sean de nueva adquisición, ni cuando sea trasladada la propiedad de los mismos, en cuyos casos deberá hacerse el pago del derecho correspondiente.

T R A N S I T O R I O S:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

SEGUNDO: Los contribuyentes que se ubiquen en los supuestos de otorgamiento de subsidio del presente decreto y que a la fecha de entrada en vigor del mismo ya hubieren pagado los derechos correspondientes al ejercicio fiscal 2011, tendrán derecho a que la Secretaría de Finanzas les reintegre dicho pago a su favor, previa solicitud por escrito que formulen ante la autoridad competente.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” Atentamente. Colima, Colima 11 de mayo de 2010. El Grupo Parlamentario Del Partido Acción Nacional y firman un servidor Dip. Raymundo González Saldaña, Leonel González Saldaña, Luis Alfredo Díaz Blake, Salvador Fuentes Pedroza, Milton de Alva Gutiérrez, Patricia Lugo Barriga y José Luis López González. Entonces esto es el punto presidente por lo cual lo entrego para que sea turnado a comisión.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Se toma nota y se instruye a la Secretaria lo turne a la Comisión correspondiente.

DIP. GONZALEZ SALDAÑA. Gracias Presidente, y el segundo punto es con respecto al asunto que en estos días ha estado convulsionando a nuestra sociedad colimense y sobre todo a un sector ambientalista a los jóvenes preocupados por nuestro entorno ecológico y la depreciación y el deterioro que se está haciendo del mismo y sobre todo concretamente hablando sobre el tema de la tala de las parotas, nos vimos a la tarea de investigar sobre el punto y hemos logrado coincidir quiero manifestar aquí mi satisfacción porque en este acuerdo pues estamos todos incluidos han decidido apoyarlo todas las fracciones y cosa que agradezco porque es un punto que creo que va ayudar a proteger la especie del árbol de la parota, sobre todo porque si bien no podemos lograr o demostrar que es una especie en peligro de extinción porque para hacer esto es un trámite demasiado difícil y además no se podía acreditar porque ustedes saben que la parota afortunadamente es muy prolífica aquí en el Estado de Colima, pero no obstante no es exclusiva de nuestro estado, está precisamente, se encuentra por todos los Estados del centro de la república hasta el sur y del centro y Sudamérica entonces, pero bueno, obviamente es un árbol que tiene a Colima en su tradición histórica que incluso en todos los libros históricos se ha mencionado este árbol como parte de nuestra cultura, entonces debido a esto vimos que hay precisamente dentro de la Ley de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado, hay una apartado donde faculta al Ejecutivo Estatal de solicitar ante el gobierno federal que se pueda hacer una declaratoria de mencionar a este árbol como una especie que debe quedar con protección especial, ya tuvimos también la buena noticia de que hemos constatado que el propio ejecutivo ya tiene por ahí elaborado un decreto que precisamente está sustentado en artículos que voy dar lectura, donde precisamente se está haciendo ya el trámite para que se pueda proteger esta especie arbolaria, entonces voy a dar rápida lectura a esta iniciativa de acuerdo.

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

P r e s e n t e

Los diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea un PUNTO DE ACUERDO, por el que se exhorta atenta y respetuosamente al Gobernador del Estado, para efectos de que proponga ante la autoridad federal, la declaración de protección de la especie conocida como “Parota”, por ser endémica y sujeta a protección especial, y en ese tenor que sea declarada como emblemática y símbolo del Estado de Colima, mismo que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El árbol conocido como “Parota”, es un árbol grande y frondoso, de 20 a 30 metros de altura, sin embargo, su follaje abundante le da una forma más ancha que alta. Es nativo de México y Centroamérica y es considerado precisamente como uno de los más grandes, frondosos y longevos, lo que lo hace imponentemente majestuoso.

También es conocido por las bondades de su madera, haciendo que la demanda de la misma y el desarrollo urbano haya hecho desaparecer los más grandes árboles de la región y sólo unos pocos árboles gigantescos quedan dispersos, dignos de ser visitados y preservados. Este árbol también es muy apreciado por la gente del campo, que lo siembra y protege para dar sombra al ganado en fincas y potreros.

Por otro lado, sin bien es cierto no es una especie en vías de extinción, por lo arriba expuesto sí se encuentra en peligro, sobre todo en esta región y particularmente en nuestro estado, debemos crear conciencia en los habitantes sobre su importancia, del valor que tiene dentro de las especies vegetales y sobre las demás propiedades que posee.

Sobre este tema, resulta particularmente vergonzoso el caso que recientemente sucedió, cuando una empresa de construcción, sin contar con el permiso correspondiente, derribó el pasado día 04 de los corrientes, al menos 14 Parotas que se encontraban en un predio donde está construyendo un fraccionamiento al norte de la ciudad.

Debemos también tomar en cuenta que el árbol de Parota es una especie endémica de la región, especialmente de nuestro estado, por lo que al interior del mismo y en el exterior resulta ser emblemático, un símbolo de la entidad, con el cual todos nos identificamos, de ahí que debemos llevar a cabo todas las medidas que sean necesarias para preservarlo. A nosotros como legisladores, nos corresponde esa responsabilidad.

Resulta indispensable citar de manera textual lo que señalan las fracciones XIV y XV del artículo 119 de la Ley Ambiental para el Desarrollo sustentable del Estado de Colima:

ARTÍCULO 119.- En materia de preservación, protección y aprovechamiento de flora y fauna silvestre, la Secretaría está facultada para:

XIV. Proponer al Gobernador la declaración de protección de especies de flora y fauna que sean de interés para el Estado y que no estén bajo ningún estatus de protección por la Federación;

XV. Proponer ante la autoridad federal la declaración de protección de especies en estatus de amenazadas, raras, en peligro de extinción, endémicas o sujetas a protección especial;

En virtud de que se tiene conocimiento, de que el Titular del Ejecutivo del Estado emitirá un Decreto para la protección de la especie arbórea conocida en la región como "Parota", los Diputados integrantes de la LVI Legislatura consideran que con ello quedaría cubierto el supuesto que establece la citada fracción XIV del artículo 119 en comento, sin embargo, para una mayor protección de la especie, ésta debe declararse como uno de los emblemas y símbolos de nuestro Estado, por lo que en atención a lo dispuesto por la fracción XV del numeral antes invocado, se solicita al Gobernador del Estado, de manera respetuosa, haga la propuesta ante la autoridad federal de la declaración de protección de la especie conocida como "Parota", por ser endémica y sujeta a protección especial.

En el mismo orden de ideas, se solicita al Gobernador del Estado, que la especie arbórea conocida como “Parota”, sea declarada como emblema y símbolo del Estado de Colima en el Decreto señalado en el párrafo anterior.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se proponen los siguientes:

PUNTO DE ACUERDO:

ÚNICO.- Se hace un atento y respetuoso exhorto al Gobernador del Estado para que en atención a lo dispuesto en la fracción XV del artículo 119 de la Ley Ambiental para el Desarrollo sustentable del Estado de Colima, proponga ante la autoridad federal, la declaración de protección de la especie conocida como “Parota”, por ser endémica y sujeta a protección especial, y en ese tenor que sea declarada como emblemática y símbolo del Estado de Colima. Atentamente. Colima, Colima a 11 de agosto de 2011. Los Diputados integrantes de la quincuagésima sexta legislatura y aquí firman los 25 Diputados de este Congreso. y mencionar que es muy importante ciudadano presidente que se ponga a consideración y que aprobemos este punto porque lamentablemente el hecho que pasó el día 4 como se menciona aquí de este mes de agosto, con el ejemplo que dio la empresa Ardica, en su fraccionamiento Colinas de Santa Fe al norte de la ciudad, puede sentar un precedente fatídico sobre todo porque ya algunos empresarios de la construcción incluso ayer platicaba yo, con uno de ellos, que está haciendo un fraccionamiento al sur de la ciudad y menciona que para ellos va a ser más redituable y más fácil, en lugar de estar tratando de salvar estas especies, pues mejor pagar la multa porque se ha anunciado por parte del Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Colima, quien ha tenido que imponer la sanción a esta empresa porque en un terreno municipalizado que puede ser la multa de unos 500 mil pesos por haber derribado sin permiso alguno estas 14 parotas y bueno si sacamos cuentas pues prácticamente estamos hablando de 14 árboles que fueron sacrificados, y que a cambio le dan a su urbanizador suponiendo unos 50 metros cuadrados por especie lo que daría un total de unos 700 metros cuadrados de superficie vendible adicional a lo que tenía previsto en su plan de desarrollo, entonces 700 metros en esa área pues ustedes saben que sale para ahí de los 300 mil pesos estamos hablando fácilmente de 2 millones 100 mil, que es lo que recuperaría como superficie vendible de su fraccionamiento pues comparado con los 500 mil de multa si los paga en los primeros 15 días, pues va deshacerse la mitad pues creo que es risoria la multa por eso dicen los urbanizadores, pues bueno, pues mejor, yo tengo ahorita 2 parotas en el proyecto que tengo del fraccionamiento, mejor las elimino y gano 2 lotes más para poderlos vender y la multa sería muy pequeña, entonces con este acuerdo que hagamos, obviamente el Gobernador ya tiene listo su decreto su iniciativa su proyecto pero le adicionaríamos que nombre a la parota como una especie de especial protección en el Estado y con esto por ende ya la normatividad podrá ser modificada para que las sanciones por la tala de estos tipos de árboles pueda ser todavía mucho más fuerte y obviamente y no alentaría a los fraccionadores a cometer estos actos, la verdad yo creo que es un punto que es importante en estos momentos que le demos para adelante y yo los invito a que lo podamos aprobar, es cuanto Presidente. Gracias.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a consideración de la asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Raymundo González Saldaña, recordándoles que dentro de la votación de dicho documento deberá sujetarse a lo que establece el artículo 130 del Reglamento de la Ley

Orgánica que hablará por una sola vez, hasta 4 Diputados, 2 a favor y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente del dictamen que nos ocupa.

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZALEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento presentado por el Dip. Raymundo González Saldaña, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el Dip. Raymundo González Saldaña, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el uso de la voz el Diputado Leonel.

DIP. GONZALEZ VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados, público que amablemente nos acompaña en esta emotiva tarde de sesión. Quienes integramos el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional esta Quincuagésima Sexta Legislatura, hemos asumido un compromiso ético, social y político, con toda la sociedad colimense. Buscamos el alcance de mejores etapas de seguridad, oportunidades y desarrollo para todos y cada uno de los sectores poblacionales. Uno de los rubros de gran importancia para nosotros, como también lo ha sido para quienes conformamos la Comisión de Protección a la Niñez y la Juventud, es el sector juvenil, que dicho sea de paso, en nuestro País representa la cuarta parte de la población total. Hemos trabajado en foros locales, nacionales, para definir políticas y estrategias de regulación de beneficio de los jóvenes. En el marco del 12 de Agosto, Día Internacional de la Juventud y en calidad de Presidente de la Comisión, reiteramos el compromiso de seguir aportando propuestas encaminadas a la protección de los jóvenes y de los niños. El universo de la población, según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, se indica que en el país residen 29.7 millones de jóvenes que representan la cuarta parte de la población total. De la población de 15 a 29 años, 37% tienen de 15 a 19 años, 33% de 20 a 24 y 29.6% de 25 a 29 años de edad. Existen temas fundamentales que le interesan a los jóvenes, como la vivienda, la educación, el empleo, la seguridad, en fin, oportunidades para el desarrollo. En ello debemos poner enfocar esfuerzos, que en general, entre los 15 y 29 años salen de la escuela, se incorporan a la actividad económica, se emancipan del hogar paterno e inician su vida en pareja y necesaria reproducción. Sin embargo, hay ocasiones en que continúan de dependencias económicas y participación en la familia de origen, sin estudiar, ni trabajar, derivado de una marcada falta de oportunidades, en función de varios agentes. En relación con la educación y el empleo, por ejemplo, es oportuno considerar que las instituciones educativas, públicas y privadas, además de implementar mecanismos adecuados de selección sin favoritismos e inclusión para todos, en sus respectivos planes académicos equiparen la oferta educativa con la laboral, estableciendo convenios con instituciones de reclutamiento. En ese sentido, consideramos que será posible disminuir el número de egresados que no encuentran trabajo, ocupándose en subempleos o actividades ajenas a su preparación, que a postre se traduce en frustración. Esa es la propuesta personal, en resumidas cuentas, que expongo ante Ustedes. Lo reiteramos, es necesario equiparar la oferta laboral con la educativa, por lo que en fecha próxima, luego de un análisis ante docentes y estudiantado, estaremos presentando en esta tribuna una propuesta legislativa consensada, a fin de coadyuvar en el desarrollo de nuestros jóvenes colimenses. Felicidades a todos los jóvenes y felicidades a los jóvenes también de corazón y espíritu. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. En el mismo punto del orden del día en el uso de la voz y último en la lista, Diputado Milton de Alva.

DIP. DE ALVA GUITIERREZ. Gracias Presidente, ciudadanos que nos acompañan. Muy rápidamente vamos a exponer esta iniciativa. **MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO**

P r e s e n t e

MILTON DE ALVA GUTIÉRREZ y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano

de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción I, de la Constitución del Estado, 22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea una **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPITULO CUARTO Y EL ARTICULO 202 BIS AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE COLIMA**, misma que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La desaparición forzada surgió como una práctica de los Estados totalitarios, con el fin de eliminar a disidentes políticos, cuyos antecedentes se remontan a técnicas de represión empleadas por Luis XVI, Napoleón Bonaparte, Stalin y Hitler.

Este crimen afecta derechos como la dignidad humana, el derecho a vivir en paz, el derecho a un debido proceso, la libertad, entre otros, y a su vez pone en peligro el derecho a la vida, a la salud y a no ser sometido a tortura u otros tratos crueles, degradantes o inhumanos.

En América Latina, la conducta penal en mención se ha presentado en una gran cantidad de países. Sin embargo, Argentina y Chile se destacan, pues esta práctica ha estado ligada a pugnas políticas, golpes de Estado y dictaduras militares, totalitarias y represivas. En nuestro caso, México durante la guerra sucia, tuvo más de quinientas denuncias por desaparición y la que más trascendió fue el caso de Rosendo Radilla un gran luchador social, desaparecido en 1974 en un retén militar en el Estado de Guerrero.

La desaparición forzada de personas ha sido considerada a lo largo de la historia como un crimen de Estado, una práctica de gobierno o de agentes de éste, con el objetivo de deshacerse de opositores políticos, eliminar evidencias de asesinatos y luego negar cualquier información sobre el paradero de los desaparecidos.

La persona desaparecida es privada legal o ilegalmente de su libertad y se desconoce su paradero, bien porque se niega la desaparición por parte de los autores del hecho o porque se informa a los interesados del lugar en el que el sujeto se encuentra.

La declaración sobre la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, manifiesta que se entiende por este delito “cuando se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agente gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentamiento y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de estas personas o a reconocer que están privadas de la libertad sustrayéndolas así de la protección de la ley.

Mientras que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual México ratifica en el año 2002, en su artículo 2 incluye la siguiente definición: “se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con la cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías pertinentes”

La estructura del delito de desaparición forzada se describe de la siguiente manera: el tipo subjetivo implica un dolo complejo, es decir la intención de privar de la libertad, pero esta acción es tan solo el medio para obtener el resultado

querido por el agente, es decir el ocultamiento, con el fin de reprimir a un sujeto que se opone a los diversos propósitos del Estado o del grupo. Mientras que el tipo objetivo es privar al sujeto pasivo de la libertad, ocultándolo posteriormente para sustraerlo del amparo de la ley.

El delito se perfeccionará con la privación de la libertad, seguida del ocultamiento, que debe ser “forzado”, lo que significa, que no medie voluntad de la víctima. Se recalca que la privación de la libertad es tan solo un medio material, para que pueda verificarse el tipo, porque este vendrá a perfeccionarse cuando se configure el ocultamiento.

El sujeto activo de la conducta lo hace muy particular referente a este delito, pues es considerado como un crimen de Estado, por lo tanto se trata de una conducta de sujeto activo calificado. Sin embargo los servidores públicos pueden ejecutar, instigar, determinar o prestar ayuda en la comisión del delito. El servidor público puede entonces como autor material o intelectual, coautor, instigador o cómplice. No importando si dicho funcionario posee o no las facultades para ejercer una medida de detención; basta que posea en general funciones públicas y éstas le faciliten la ejecución del delito.

El sujeto pasivo del delito de desaparición forzada puede ser cualquier persona sobre la que se ejecute la conducta. El delito es singular, ya que se comete sobre una persona determinada y por cada acción de desaparición forzada, se producirán otros delitos diferentes. En conclusión se consuma un delito por cada individuo desaparecido.

El bien jurídico que tutela este delito son la libertad personal, el derecho a las garantías judiciales, el debido proceso, la seguridad personal, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a vivir en paz, la dignidad humana y la vida.

Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha declarado a favor del delito de desaparición forzada, donde ha resuelto controversias constitucionales en las que figura este delito, y ha determinado que el plazo para la prescripción del delito de desaparición forzada de personas, empieza a correr hasta que la víctima es encontrada viva o muerta, por tratarse de un ilícito de naturaleza permanente o continua, que se consuma momento a momento durante todo el tiempo en que la víctima se encuentra desaparecida.

Aunado a lo anterior, el día 23 de noviembre de 2009, mediante sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso relevante del Estado Mexicano contra la Desaparición Forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, se condena a México para que en un plazo razonable deberá adoptar, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar los estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona el Capítulo IV y el artículo 202 BIS al Código Penal del Estado de Colima, para quedar de la siguiente manera:

“CAPÍTULO IV.

DESAPARICIÓN FORZADA

ARTICULO 202 BIS.- Comete el delito de desaparición forzada quien o quienes siendo agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado priven de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, impidiendo el ejercicio de los recursos legales y de las garantías pertinentes, se les impondrá de dieciocho a veintiocho años de prisión “

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. Atentamente. Colima, Colima a jueves 11 de agosto de 2011. Lo firman José Luis López Gonzalez, Leonel González Valencia, Patricia Lugo Barriga, Luis Alfredo Diaz Blake, Salvador Fuentes Pedroza, Raymundo González Saldaña, y el de la voz Milton de Alva Gutierrez, le solicito atentamente Diputado Presidente turnarlo a las Comisiones respectivas, para su análisis y dictamen, es cuanto muchas gracias y hago entrega del documento correspondiente.

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Se toma nota y se le pide a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima reunión ordinaria a celebrarse el día jueves 18 de agosto del presente año a partir de las 9:00 horas, finalmente agotados todos los puntos del orden del día se les solicita a todos los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 16 horas con 30 minutos del día 11 de agosto del año 2011, declaro clausurada la presente sesión, por su asistencia muchas gracias y buen provecho.